

★ **¿Quién será el próximo enemigo?** por Serge Halimi

Año XXI, número 225 ♦ ENERO-FEBRERO 2021

Edición chilena

Precio del ejemplar \$ 2.500

Regiones I, II, XI, XII y XV \$ 2.750

LE
MONDE
diplomatique
Aún Creemos en los Sueños



Nuevo libro
**AVANZANDO HACIA RELACIONES
MÁS COLABORATIVAS ENTRE
FAMILIAS Y ESCUELA:
EXPERIENCIAS DESDE PAÍSES
IBEROAMERICANOS**
Editoras: Mahia Saracostti y Laura Lara
Versión digital en venta a \$2.950 en
www.editorialauncreemos.cl

Que la soberanía vuelva al pueblo

Por Álvaro Ramis

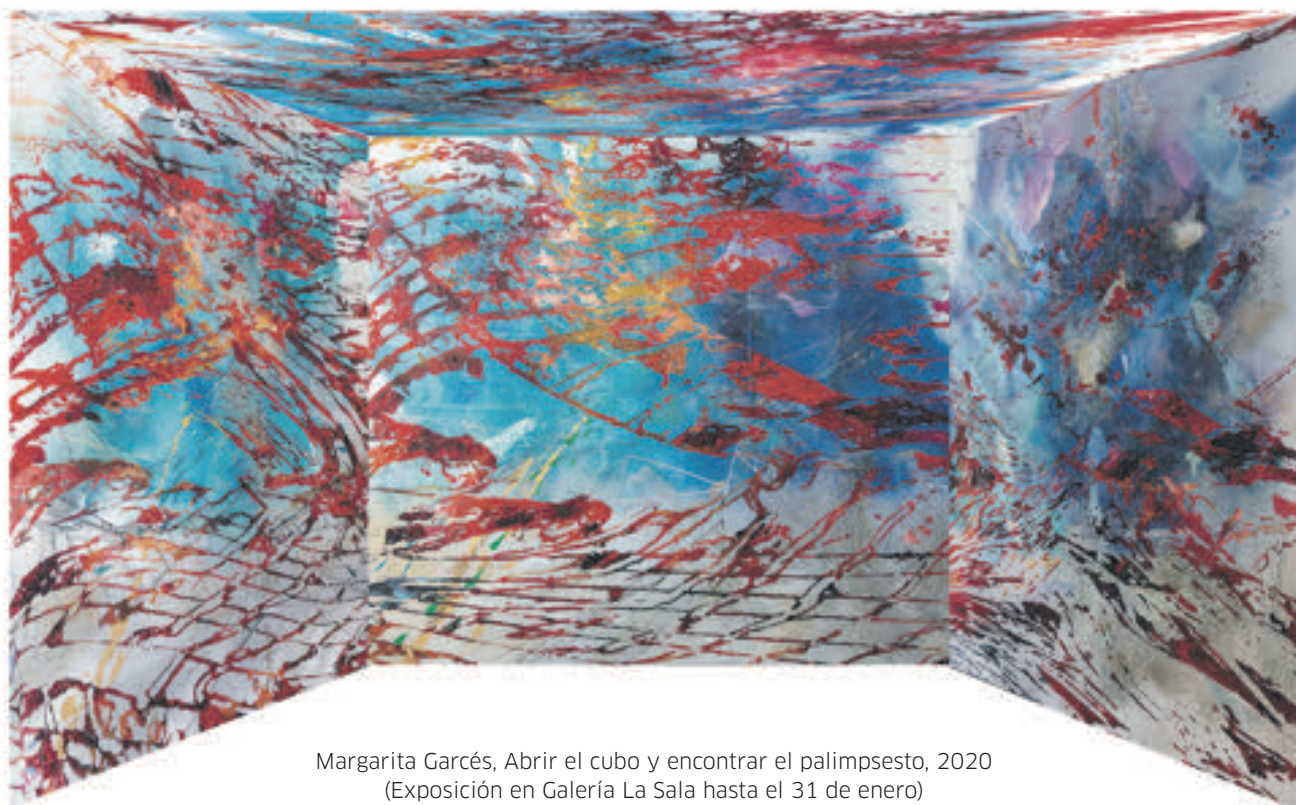
Dossier:

**-La justicia de
la liberación**

por Daniel Urrutia

-Justicia de clase

por Manuela Royo y
Felipe Berrios



Margarita Garcés, Abrir el cubo y encontrar el palimpsesto, 2020
(Exposición en Galería La Sala hasta el 31 de enero)

**-Piñera y su carrera por la
(im)popularidad**

por Libio Pérez

**-La diversidad evangélica
en la política chilena**

por Nicolás Panotto

**-El profesorado en
las urnas**

por Dante Castillo y Mario Torres

**-Transparencia y
probidad para el 2021**

por Bernardo Navarrete



Artículos sobre Perú, EEUU, Reino Unido, Alemania, Yemen, Rusia, África, Asia...

LE MONDE diplomatique

Equipo

EDICIÓN CHILENA

Director:
Victor Hugo de la Fuente

Editor General:
Libio Pérez Zúñiga

Iconografía:
Dominique Monteau

Diseño y diagramación:
Cristián Escobar

Administración:
Ruth Flores
Carolina Muñoz
Freddy Araneda
Consultora en administración y finanzas: Allende y Montes Asociados Ltda

Colaboradores:
Clara González
Margarita Iglesias
Federica Matta
Ricardo Parvex
Álvaro Ramis
Gonzalo Rovira
María Emilia Tijoux

Le Monde Diplomatique Edición chilena es una publicación mensual de la Editorial "Aún Creemos en los Sueños"

Dirección: San Antonio 434 local 14 - Santiago Chile

Teléfono: 22 608 35 24

E-mail:
edicion.chile@lemondediplomatique.cl

Página web:
www.lemondediplomatique.cl

Venta de ejemplares:
www.editorialauncreemos.cl

Impresión: Copesa

De este número se imprimieron 8.000 ejemplares

Distribución:
Quioscos: Meta
Librerías: LOM Ediciones

EDICIÓN CONO SUR

Director:
José Natanson

Redacción:
Carlos Alfieri
Creusa Muñoz
Luciana Garvarino
Nuria Sol Vega
Pablo Stancanelli

Le Monde Diplomatique (Francia)

Fundador:
Hubert Beuve-Méry
Presidente del Directorio y Director de la redacción:
Serge Halimi
Jefe de redacción: Benoît Bréville
Jefes de redacción adjuntos:
Martine Bulard y Renaud Lambert
Encargada de desarrollo y ediciones internacionales:
Anne-Cécile Robert

1-3 rue Stephen-Pichon,
75013 París Francia
Tél.: (331) 53 94 96 21
Fax: (331) 53 94 96 26
E-mail:
secretariat@monde-diplomatique.fr
Internet: www.monde-diplomatique.fr

Difusión

Ediciones internacionales de Le Monde Diplomatique

ALBANIA Y KOSOVO. Mensual, editado por Bota Diplomatike, Eduard Lir, Nr 50, Ap.10, 10000 Prishtina, Kosovo. 500 ejemplares (Friedrich)

ALEMANIA. Die Tageszeitung. (Friedrichstraße 21, 10969 Berlín); 80.000 ejemplares, supl. mensual. www.monde-diplomatique.de

BRASIL. Palavra Livre (Rua Araújo 124, São Paulo); 30.000 ejemplares, mensual.

BULGARIA. Les Amis du Monde diplomatique. (Rakovski 78, 1000 Sofía); 6.000 ejemplares, suplemento de Duma.

CHILE. Editorial "Aún Creemos en los Sueños" (San Antonio 434, Local 14, Santiago); mensual, 8.000 ejemplares. www.lemondediplomatique.cl

COLOMBIA. Tebeo Comunicaciones S.A. (Avenida 19, N° 4-20, Bogotá); 6.000 ejemplares, mensual.

COREA DEL SUR. Sociedad Le Monde Corea. (Seúl); 5.000 ejemplares, mensual.

ESLOVENIA. Novinarski Klub. (Tavcarjeva 15, Ljubljana, Eslovenia); 1.000 ej., mensual.

ESPAÑA. Ediciones Cybermonde SL. (Aparisi i Guijarro N° 5, 2º, 46003, Valencia); 30.000 ejemplares, mensual.

GRECIA. Avgi. (Agiou Konstantinou 12, 10431 Atenas); 10.000 ejemplares, suplemento semanal, www.monde-diplomatique.gr

HUNGRÍA. Edición electrónica difundida por Közép-Európai Fejlesztési Egyesület, Múzeum u. 7. Kossuth Klub, Budapest). www.magyardiplo.hu

INDIA. Hard News. (Gautam Nagar 110049, Nueva Delhi); 40.000 ejemplares, suplemento mensual en inglés.

IRÁN. Sedaye Adalat. (60/6 rue Sarve, Ave Vali Asr, Teherán); 5.000 ejemplares, suplemento mensual.

IRLANDA. Village. (44 Westland Row, Dublin 2); suplemento semanal en inglés.

ITALIA. Il Manifesto. (via Angelo Bargonio 8, 00153 Roma); 49.000 ejemplares, suplemento mensual.

LUXEMBURGO. Tageblatt. (44, rue du Canal, 4050 Esch-sur-Alzette); 30.000 ejemplares, suplemento mensual en alemán.

GRAN BRETAÑA Y MUNDO ANGLÓFONO. Edición mensual, 5.000 ejemplares https://mondediplo.com.

MUNDO ÁRABE. La versión árabe es editada por la Sociedad Nouvelles Presses disponible por suscripción (www.editionarabediplo.com); publicada en varios diarios de Medio Oriente, el Golfo y el Magreb.

NORUEGA. Diplo AS. Distribuido en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca por la Sociedad (Le Monde diplomatique Norge AS, Postboks 33 Grefsen, 0409 Oslo); Mensual 25.000 ejemplares www.lmd.no

POLONIA. Livres et presse. (Rue twarda, 60, Varsovia); 10.000 ejemplares, mensual.

PORTUGAL. Cooperativa Outro Modo, Rua Febo Moniz, nº 13, R/C, 1150-152 Lisboa; 4.000 ejemplares, mensual.

RUSIA. Asociación Le Monde diplomatique rusa. Kakhovka 9-1-176, 113303, Moscú; ru.mondediplo.com.

SERBIA. Mensual, l'hebdomadaire Nedeljnik. 20.000 ejemplares. www.nedeljnik.rs

SUIZA. El semanario Wochenzeitung. (Hardturmstrasse 66, Postfach 8031, Zurich); 20.000 ej., suplemento mensual.

TURQUÍA. Suplemento mensual del diario Cumhuriyet. Empresa Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi, oficina principal Prof Nurettin Öktem Sok. No: 2 Şişli, Estambul. 50.000 ejemplares.

VENEZUELA. (Cuarta av. Res Unión. Torre B. Local E y F, Caracas), 5.000 ejemplares.

EN INTERNET
Chino: http://cn.mondediplo.com
Esperanto: http://eo.MondeDiplo.com
Inglés: http://MondeDiplo.com
Japonés: www.diplo.jp

Le Monde diplomatique se difunde en 22 idiomas en sus 31 ediciones internacionales

https://www.monde-diplomatique.fr/diplo/int/

Este ejemplar corresponde a enero-febrero de 2021
El próximo número circulará en marzo

Nuevo horario de librería

La librería de *Le Monde Diplomatique* abre con nuevo horario:
De lunes a viernes de **10 a 17:30 horas**. San Antonio 434 - T: 22 608 35 24

Calendario de fiestas nacionales enero y febrero

ENERO

1 Cuba Fiesta Nacional
Haití Independencia
Sudán Independencia
4 Birmania Independencia
26 Australia Fiesta Nacional
India Fiesta Nacional
31 Nauru Fiesta Nacional

FEBRERO

4 Sri Lanka Independencia
6 Nueva Zelanda Fiesta Nacional
7 Granada Independencia
11 Irán Aniversario de la revolución
16 Lituania Independencia
18 Gambia Independencia
22 Sta. Lucía Fiesta Nacional
23 Brunei Independencia
23 Guyana Fiesta Nacional
24 Estonia Independencia
25 Kuwait Fiesta Nacional
27 R. Dominicana Independencia

Suscríbese a Le Monde Diplomatique y sus libros mensuales

Suscríbese con pago automático (PAT) y reciba cada mes *Le Monde Diplomatique* más un libro por \$4.900 mensual.

Periódico y libro en versión digital por \$4.300 mensual con Pago automático con tarjeta

Teléfono: 22 608 35 24

<https://editorialauncreemos.cl/producto/suscripcion-periodico-libro-mensual/>



UdeSantiago Radio

Una emisora con real sentido público y compromiso con la ciudadanía que promueve el debate de los grandes temas país y divulga la ciencia, la cultura y las artes.

Te invitamos a visitar nuestra nueva señal online Escena Viva.

SOMOS TU RADIO UNIVERSITARIA

94.5 FM - WWW.RADIOUSACH.CL

Editorial "Aún Creemos en los Sueños"

La Editorial "Aún Creemos en los Sueños" publica la Edición chilena de Le Monde Diplomatique

Director: Victor Hugo de la Fuente

San Antonio 434 - local 14 - Santiago-Chile

Tel.: (56) 22 608 35 24

E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl

www.lemondediplomatique.cl

www.editorialauncreemos.cl

¿Quién será el próximo enemigo?

por Serge Halimi*

La tarjeta de felicitaciones de Anders Fogh Rasmussen no esperó hasta la víspera de Año Nuevo. El ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) resumió así la misión que esta debería cumplir, según él, no bien Donald Trump haya dejado la Casa Blanca: “En 2021, Estados Unidos y sus aliados tendrán una oportunidad que solo se presenta una vez por generación. La de invertir la retirada global de las democracias frente a las autocracias como Rusia y China. Pero para eso será necesario que las principales democracias se unan” (1). Algo que hicieron muchas de ellas, hace una generación, justamente, al invadir Afganistán, y luego Irak. Es tiempo, aparentemente, de arremeter contra adversarios más poderosos...

Pero ¿por cuál empezar? Dado que Washington pretende asegurar el “leadership” de la cruzada democrática -“Estados Unidos está de regreso, listo para dirigir el mundo”, proclamó Joseph Biden el 24 de noviembre de 2020-, los países satélites harían bien en entender que Estados Unidos ya no se pone de acuerdo en cuanto a la identidad de su adversario principal. Sus razones poco tienen que ver con la geopolítica mundial, y todo con sus grietas internas. Para los demócratas, el enemigo es en primer lugar ruso, dado que, desde hace cuatro años, los dirigentes de este partido repitieron, al igual que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que “con Trump todos los caminos llevan a Putin”. Del lado republicano, en el registro del “ojo por ojo” que evoca los revuelos del jardín de infantes, responden con el eslogan “Beijing Biden”. Porque el segundo hijo del nuevo presidente, Hunter Biden, hizo negocios en China; y la globalización, que se le imputa a los demócratas, fue un negocio para China. QED.



Raimundo Edwards, Serie Diagonal Indoor 2 (Spray acrílico/papel), 2020
(www.collectio-collectio.com)

El 10 de diciembre, el secretario de Estado Michael Pompeo se dedicó entonces a agrandar la brecha existente entre los dos países. Invocando, sin reírse, su preocupación por el respeto de la vida privada, quien también fuera director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) primero alertó al mundo: “[El presidente chino] Xi Jinping tiene el ojo puesto en cada uno de nosotros”. Luego arremetió por turnos contra los 400.000 estudiantes chinos en Estados Unidos cada año, de los cuales una parte iría a robar secretos industriales y científicos; contra las universidades estadounidenses, “muchas de las cuales fueron compradas por Pekín”; finalmente, contra los productos de la empresa Huawei, con los cuales cada usuario estaría poniéndose “en manos del aparato de seguridad chino” (2). Este es el estribillo que los republicanos le van a oponer a Biden. Va a relevar a los cuatro años de paranoia anti-rusa alimentada por los demócratas contra Trump. Mar de China, Taiwán, el destino de los Uigures, Hong Kong: todo será pretexto para poner a prueba la determinación anti-china de la nueva administración.

Rasmussen vio claro al menos en un punto: “Una fila de aliados inquietos esperan al presidente electo Joe Biden delante de su puerta”. Pero, al permanecer en una alianza que dirige una potencia mentalmente estremecida, no les resultará tan fácil recuperar su tranquilidad. ■

1. Anders Fogh Rasmussen, “A new way to lead the free world”, *The Wall Street Journal*, Nueva York, 16-12-20.

2. Michael R. Pompeo, “The Chinese Communist Party on the American campus”, discurso en el Georgia Institute of Technology, Atlanta, 9-12-20, www.state.gov

*Director de *Le Monde diplomatique*.
Traducción: Aldo Giacometti

Piñera y su carrera por la (im)popularidad

por Libio Pérez*

En algunos chats en los que participan equipos de comunicaciones del gobierno celebraron que la caravana -con protección policial- que transportó las primeras cajas de vacunas contra el Covid-19 desde el aeropuerto al centro médico de Concepción haya sido recibida por personas que aplaudían apostadas en algunas calles. Pero también se lamentaban que el presidente Sebastián Piñera no estuviera ahí. A esa ciudad del sur fue asignada la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

Una oportunidad perdida tal vez en el diseño comunicacional de La Moneda, que ha sido trabajado por sus principales asesores y que, desde el 1 de diciembre, cuando fue delineado el plan nacional de vacunación, puso la figura del mandatario como protagonista de la campaña. Escoltado por los ministros de Salud y de Ciencias, Piñera anunció esa tarde las prioridades de lo que llamó la “población crítica” que -dijo- incluiría a “los trabajadores de la salud (como efectivamente sucedió con el primer envío) a las Fuerzas Armadas y de Orden y los empleados del transporte. A estos dos últimos grupos no

volvió a mencionarlos en sus posteriores y sucesivas apariciones diarias ante la prensa durante casi todo el mes.

El alto protagonismo de Piñera obedece -tal como lo apreció la población- a la oportunidad que le ofrecía la campaña para dos objetivos acariciados por el gobernante y sus equipos de prensa: remontar en las encuestas y dejar una marca, un sello, en su último año de gobierno.

El último mes del año encontró al jefe de Estado con sus peores marcas en los sondeos de opinión pública, entre un 5 por ciento (según Cadem) y un 7 por ciento (según Critería), al punto que incluso fue consultado directamente por un periodista acerca de cómo se podía gobernar con indicadores tan bajos. Algo que, por cierto, también se preguntaban incluso muchos de sus partidarios de la alianza oficialista y en el Congreso. Subir en las encuestas se ha transformado en una tarea de primera prioridad en los equipos presidenciales.

En un año marcado por la pandemia viral, con una respuesta gubernamental errática (que obligó el cambio del ministro de Salud en el peor momento de la crisis), con una de-

ficiente conducción política (tuvo tres ministros de Interior en un mismo año), con políticas públicas insuficientes para hacer frente a la crisis económica (destinó una cifra cercana a los 7 mil millones de dólares a ayudar a la población y las empresas, mientras los trabajadores pusieron en circulación unos 35 mil millones de dólares con sus retiros de fondos previsionales, sin sumar sus ahorros de cesantía), las cosas no se han dado bien para el presidente, cuya popularidad cayó en picada y, sobre todo lo dejó sin relato para el último tramo de su mandato.

Su impopularidad también es una derivada menos visible del plebiscito constitucional del 25 de octubre, cuando la población entregó casi un 80 por ciento al “apruebo”, mientras la mayoría de su gabinete y funcionarios de gobierno estaban por la opción contraria. Reducida su adhesión a un puñado de comunas más ricas, el plebiscito terminó por sellar la desconexión entre los gobernantes y los gobernados.

La ansiedad del presidente por ser valorado en los medios y por la población lo lleva a competir con otros países de la región, sin

que ninguno de éstos lo haya desafiado a una carrera de marcas, como asegurar que Chile “desde mayo” ha asegurado contratos con la industria farmacéutica, que ha comprado más ventiladores mecánicos o que Chile es puesto como ejemplo en la prensa mundial.

Capitalizar la campaña de vacunación es casi un prerrequisito para sortear con algún éxito la campaña electoral de abril, cuando sea elegida la Convención Constitucional, las alcaldías, los concejos municipales y los gobiernos regionales. Ello supone una planificación de momentos específicos para una mayor exposición presidencial, como su propia inoculación, el primer millón de vacunados, el inicio de la campaña de abril, sus resultados y así... hasta llegar a las elecciones generales de fin de año. Un proceso complejo durante el cual seguirá perdiendo poder ante la competencia por su sucesión. Pero no hay mucho que perder, total es difícil pensar que su popularidad pueda tener indicadores aún más bajos que los actuales. ■

*Editor general de la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*.

El temor de las élites a la fuerza del sujeto plural y diverso

Sobre la soberanía del Pueblo en la nueva Constitución

por Álvaro Ramis*

El siglo XX se construyó en torno a la idea de “Pueblo”. Con esta palabra se denominó a un sujeto político activo, que se constituye a sí mismo, y que adquiere existencia propia. Pueblo era una noción difusa y en disputa, pero nadie podía negar la existencia del Pueblo y de lo Popular. Las propuestas políticas apelaban a representarlo, ya sea por medio del discurso adulador de Jorge Alessandri Palma, el Frente Popular, la Promoción Popular de Eduardo Frei Montalva o la Unidad Popular. Para todos era evidente lo que no era popular. El humor político recuerda el afiche de un candidato conservador que decía: “Zañartu: puro Pueblo”. Zañartu lucía un traje de huaso. Pero para todo el mundo quedaba claro que esa chilendad formal, de patrón de fundo, no le daba derecho a afirmar su pertenencia al pueblo chileno.

La idea liberal de pueblo es coherente con una tradición que parte con la declaración de Independencia de Estados Unidos: “Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta...”. Ese “Nosotros” supuestamente no hace distinción entre personas. Pero como todas las formas de igualdad formal, es una igualdad hipócrita, ya que el “pueblo” era un grupo de varones, propietarios, blancos, protestantes, que asumieron la representación del Pueblo real, excluyendo a las mujeres, los esclavos, los indígenas, y los varones que no tenían una propiedad declarada.

Llegado el siglo XXI la palabra “pueblo” ha desaparecido, en el sentido en que se entendió durante el siglo pasado. La única forma en la que ha sobrevivido es como falso sinónimo de Nación. Así aparece en el artículo 5° de la actual Constitución: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”. Establece así la distinción entre Nación, esencialmente soberana, y Pueblo, regulado y conducido, que sólo puede ejercer esa soberanía de forma acotada mediante los mecanismos que mandata la ley. El pueblo es una masa que debe ser guiada por los intereses nacionales, definidos en un espacio distinto y diferente al espacio popular. Una nueva Constitución debe devolver al pueblo su papel, señalando que él, sólo en él, reside la soberanía, y que su ejercicio puede ser tanto directo como representativo.

Pueblo como Plebe

La noción más antigua de pueblo la encontramos en Roma, donde acrónimo el SPQR -*Senatus Populusque Romanus*- establecía una clara distinción entre dos cuerpos sociales y políticos constituyentes de la República: el Senado y el Pueblo. El Senado eran las familias aristocráticas o Patricias, fundadoras míticas de la ciudad, mientras el Populus era el resto de la sociedad, esencialmente la Plebe, gente que no tenía antepasado conocido. Esta diferencia explica que el Pueblo sólo se puede entender en el marco de una con-

tradición permanente entre Patricios y Plebeyos. Este último campo engloba una enorme diversidad de actores.

Si Pueblo se identifica con lo Plebeyo, el “Antipueblo” (1), es lo aristocrático-oligárquico. Esta contradicción explica que pueblo no es exactamente una clase social. No se identifica con la clase obrera de la tradición marxista, aunque la clase obrera sea parte del Pueblo y constituya la condición socioeconómica mayoritaria del Pueblo. Pero Pueblo también engloba otros actores, fundamentalmente a los sectores calificados como “pasivos”: jubilados, estudiantes, enfermos crónicos y dependientes, inadaptados sociales, presos, locos, migrantes, niños y niñas, indígenas, campesinos. Aquellos que Eduardo Galeano llamó los “nadie”, aquellos que valen menos que la bala que los mata. Todos estos sectores no están subsumidos por el Capital y son excluidos de sus formas de reproducción. Por eso Dussel afirma que “La clase es la condición social del oprimido como subsumido por el capital (en la totalidad). El “pueblo” es la condición comunitaria del oprimido como exterioridad” (2). Pueblo (como plebe) también incluye sectores que la economía trata de diferenciar y distinguir como “clases medias”: empleados, trabajadores informales, cuentapropistas, especialistas, técnicos, administrativos, pequeños y medianos empresarios, cuadros y funcionarios públicos, militares de bajo y mediano rango, etc. El Pueblo en su sentido original es toda la sociedad plebeya, que no se reconoce en las élites y que choca contra ella. Pueblo y clase son conceptos diferentes pero relacionados, que sirven para analizar niveles distintos de la realidad. La clase expresa la condición social en la que se estructura el Pueblo. Pueblo designa el boque social plebeyo que no participa del poder elitario.

El temor al Pueblo

La desaparición intencional de la noción de Pueblo como plebe, y su reducción a nación, se debe a varios factores, que tienen en común un temor de las élites al poder potencial que implica esta categoría. Si el pueblo es la entera nación, es tan pueblo Andrónico Lukic como el trabajador de su banco. Pero esta idea es contraintuitiva, y por más que se intenta imponer, el sentido común se resiste a

aceptarla. Por eso el artículo 5° de la Constitución de 1980 sostiene que la soberanía reside “esencialmente” en la Nación. En el resto de las Constituciones, europeas y latinoamericanas, se afirma que la soberanía reside en el Pueblo, del cual emanan los poderes públicos. Esto implica que el pueblo ejerce esa soberanía directamente, y secundariamente por medio de sus representantes. No existe la diferencia que instala la Constitución chilena, entre una “soberanía nacional”, bajo la tutela directa de quienes administran el Estado, y una “soberanía popular”, acotada a una función episódica y subalterna.

El “populismo”

Un argumento para reprimir la idea de pueblo se asocia a la repugnancia con la que se pronuncia la palabra “populismo”. Aunque la ciencia política lleva más de cincuenta años tratando de definir lo populista, para las élites la definición es evidente: es el reconocimiento y la puesta en escena de la contradicción entre la plebe y la aristocracia y la oligarquía. Hofstadter señaló por eso “Todo el mundo habla de populismo, pero nadie sabe definirlo” (3). En el saco del populismo cabe de todo, desde Donald Trump hasta Evo Morales, desde la ultraderecha alemana a la izquierda latinoamericana, todo y nada a la vez. Lo único que parece definir el populismo es el temor de la élite a un desborde popular. Eugenio Tironi afirma: “La experiencia de consultoría de Tironi Asociados nos confirma que hemos arribado a un estadio donde lo usual es la ocurrencia de desbordes que siembran la alarma entre la población. Frente a estos los expertos se dividen y carecen de respuestas indubitables” (4). Un “desborde popular” es un proceso en el cual la élite pierde poder y capacidad de control. Puede ser una micro rebelión local, un estallido social, una rebelión sin orientación, o una revolución popular consistente y conducida. Para la lógica de las élites todo cabe en el mismo desborde. De allí que el populismo se haya convertido en el gran demonio de nuestro tiempo. Basta que a un político o a un movimiento se le acuse de “populista” para que se le estigmatice de forma casi irreversible.

Lo que se busca ocultar es la diferencia entre lo popular y lo populista. Si se entiende pueblo como plebe, lo populista es la imposición de lo popular. Cuando el señor Zañartu decía en su afiche que era “puro pueblo” estaba actuando de forma populista porque era evidente que no era un sujeto auténticamente popular. Trump es populista porque manipula las penurias del pueblo, porque él nunca ha vivido en carne propia el desempleo, la lucha por un subsidio o los problemas de los barrios populares. Es un impostor y un manipulador de lo popular.

El problema del “Pueblo Orgánico”

Otro argumento que se esgrime para rechazar la categoría Pueblo nace del rechazo al fascismo. La extrema derecha, en todas sus formas, asume un discurso en que reivindica la representación de lo popular. Hitler usó el lema “Un Pueblo, Un imperio, Un líder”. Para el fascismo el Pueblo marca un territorio, y está unido por una “sangre” común. Los que no comparten esa identidad no caben en el Volk. Ese espacio debe ser un todo homogéneo, que

debe preservarse limpio de toda desemejanza, de toda impureza que rompa su perfecta simetría. El extraño es una mancha en esa homogeneidad y por eso hay que extirparlo, ya sea judío, musulmán, comunista, gitano u homosexual. Lo importante es su condición de diferente. La esfera se mantiene unida porque en el centro hay un líder que dirige al Pueblo. Este liderazgo no es democrático, sino carismático, incuestionable, y demanda obediencia y lealtad total. El rol del líder es mantener la unidad del Pueblo bajo su mandato. Esta concepción “organicista” no es igual a la concepción liberal. El fascismo reconoce y manipula la contradicción entre Elite y Plebe. Sabe que es una fuente de tensión social esencial a toda sociedad. Pero la solución que proponen desemboca en la subordinación de la plebe a un liderazgo autoritario que anula el conflicto, imponiendo un nuevo pacto con la élite. Por eso en el nazismo los grandes capitalistas y directores de los grupos industriales también recibieron el título de Führer, como líderes orgánicos de sus fábricas o compañías, y a los cuales la plebe debía obediencia ciega.

El Pueblo y la diversidad

Pueblo sólo se entiende en el marco de la tensión con la oligarquía y la élite, pero no de una forma orgánica, como en el fascismo. Pueblo es una voluntad de ser colectiva, pero siempre libre y en construcción. Es un sujeto político, que se constituye por una decisión ética de ir más allá del yo y el tú, para construir un nosotros que se vincula en libertad. Por eso el Pueblo nunca está “unido”, pero busca su unidad. Esa búsqueda es siempre imperfecta, precaria, y en construcción. Para ser Pueblo es necesario reconocer y aceptar esta dificultad, porque de otra forma la solidaridad se transforma en obligación, y la cooperación pasa a ser un mandato. Pedro Lemebel decía: “No definiendo a los homosexuales, porque a veces no tengo nada en común con sus posturas conservadoras, reaccionarias o faranduleras... abogo por “las homosexualidades” que están en cada uno o una de nosotros, nosotras” (5). El Pueblo no articula la lucha “del trabajador”, de “la mujer”, del “estudiante”, del “poblador”, “del inmigrante”. En el seno del Pueblo hay diferentes luchas de trabajadores, mujeres, estudiantes, pobladores o inmigrantes que se integran, sin diluir sus divergencias. Esa experiencia compartida de la injusticia es lo único que constituye al Pueblo; un vínculo solidario, leve y sutil en el día a día, pero rabiosamente potente en el momento en que estalla incontenible, como rebeldía. Pueblo es pluralidad insuperable e irreductible. ■

1. Scannone, J. C. (1982). “La teología de la liberación. caracterización, corrientes, etapas”. *Stromata* (38): 3-40.
2. Dussel, E. (1988) “Hacia un Marx desconocido. Un comentario a los manuscritos del 61-63”, p. 372.
3. Hofstadter, R. (1981) “Estados Unidos”, en G. Ionescu y E. Gellner (comps.), pp. 15 y 55.
4. Tironi, E. (2011), “Abierta: Gestión de controversias y justificaciones”. Uqbar editores, Santiago. P. 7.
5. Lemebel, P. Entrevista en *La Segunda*, 2 de noviembre de 2013.

*Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Cómo desarmar esta herencia dictatorial

Justicia de clase y proceso constituyente

por Manuela Royo Letelier* y Felipe Berrios Ayala**

El debate constituyente, que ya es parte importante de la agenda política chilena, trae consigo una discusión de fondo respecto de la cual muy poco se ha hablado hasta ahora: una determinada concepción de la justicia en que se funde el conjunto de definiciones y relaciones que quedarán establecidas en la Carta Fundamental.

En términos generales, sabemos que las ‘concepciones de la justicia’ son resultantes de concepciones más profundas, ancladas en las comprensiones sobre modos de producción (de la sociedad y de la vida), por lo que este debate no supone una mera disposición a acordar definiciones abstractas y nominalmente ‘mayoritarias’; se trata, más bien, de una discusión que trasluce concepciones profundas en cuanto al tipo de sociedad que se perfilará en Chile durante las siguientes cuatro o cinco décadas y a los intereses materiales en que se sostienen tales concepciones.

La común crítica al modelo chileno, expresada con toda su potencia en la revuelta de octubre del 2019, apunta a develar la desigualdad estructural que se deja ver por medio de distintos mecanismos que regulan la vida de todas las chilenas y chilenos, entre los cuales, los ejemplos más recurrentes siguen siendo el denominado sistema de pensiones, la mercantilización de la educación y la salud, la explotación indiscriminada de bienes naturales, la privatización de elementos tan vitales como el agua, entre tantos otros ejemplos. Pero, bien sabemos, que esta desigualdad estructural, no constituye una derivación no deseada o un ‘error no forzado’ del marco jurídico inaugurado por la dictadura pinochetista, sino que expresan el espíritu en que se funda la Constitución de 1980, es decir, manifiestan concreta y claramente el concepto de ‘justicia’ que promovía el gremialismo neoliberal de Jaime Guzmán y que comparten y profundizan una parte importante de la derecha y la Concertación desde los tiempos de la ‘transición política’.

La justicia y la represión

En palabras sencillas, para quienes comprenden de este modo la ‘justicia’, no ha sido injusto que generaciones de trabajadoras y trabajadores reciban pensiones



Fernando Dowling, Re-ordenamiento, 2019

que no alcanzan los 200 mil pesos después de trabajar durante más de cuatro o cinco décadas; no ha resultado injusta la enorme diferencia existente entre el sistema público de salud y el privado (cuya filiación alcanza a poco más del 10% de la población chilena); no es injusta la privatización de recursos como el agua y que de ello se derive el desvío de caudales para uso privado: cuestiones como estas son ‘justas’ en la medida en que el concepto de justicia que hay tras de ello es uno que es compatible con la asignación y mantenimiento de privilegios (en sentido estricto, no metafórico) de un determinado grupo social (aquellos que también es conocido como ‘clase social’).

Esta coincidencia -entre concepto de justicia y asignación de privilegios de un grupo social- bien puede comprenderse como ‘justicia de clase’: la clase social constituida por los actores más favorecidos de la sociedad ha fundado y administrado un modelo de justicia que le resulta ad hoc.

Ahora bien, los ejemplos antes mencionados corresponden a las repercusiones y consecuencias que este concepto de justicia revela en la esfera genérica y asociada a la inexistencia de derechos sociales propiamente tales, sin embargo, es importante resaltar que uno de los ámbitos en que este sello de ‘clase’ de la justicia se ha expresado crudamente en el tiempo posterior al ‘estallido social’ del año recién pasado, es el de la justicia penal.

La desigualdad en los procedimientos a partir de los cuales se busca hacer frente a determinados síntomas de polarización política se ha hecho evidente si se realiza una comparación entre los modos de ‘aplicación de justicia’ cuando se trata de

individuos pertenecientes a los sectores más pobres de la población chilena, versus los casos en que los individuos involucrados pertenecen a los sectores más acomodados o favorecidos.

En términos simples, de acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, desde el 18 de octubre hasta el 20 de febrero del 2020, en el contexto de la protesta social fueron detenidas 27.432 personas (1), de ellas 2.490 estuvieron o están en prisión preventiva. La imposición de esta cantidad de encarcelamientos, se demuestra que en enero del 2020, solo en Santiago, habían aproximadamente 900 presos/as, distribuidos en cárceles de menores, CDP Santiago 1, Cárcel de Alta Seguridad, y centros de reclusión de menores. Incluso en el CDP de Santiago 1, se creó un módulo especial para presos del estallido social, dada la gran cantidad imputados privados de libertad en el contexto de la revuelta popular.

No es menor, el hecho que, si bien el Estado cuenta con un organismo especializado en investigar, como es el Ministerio Público, la intervención política es tal, que sólo en este periodo, el gobierno de Chile, a través de querrelas patrocinadas por el Ministerio del Interior, ha interpuesto 959 querrelas por Ley de Seguridad Interior del Estado y al menos 70 querrelas por delitos de incendio, sin contar las querrelas por delitos por ley de control de armas.

Esta práctica no es nueva, bien sabemos que frente a fenómenos y hechos como estos, los gobiernos post transición en general y el gobierno de Sebastián Piñera en particular, claramente no han sido neutrales, sino que han apostado por

la salida política de la criminalización de la protesta social y los hechos o acontecimientos derivados de ella.

El concepto en debate

Con esto no concurren solamente en acto de defensa corporativa de una institucionalidad jurídica que practica y profundiza lo que niega, la lucha de clases, sino que además desdibuja y finalmente oculta aquello que precisamente debiese abrir el campo de lo político: una comprensión amplia del contexto político real y enfrentar, sobre esa base, las solapadas injusticias que hacen funcionar al modelo.

El problema de un concepto de justicia que no expresa otra cosa que un sello de clase asociado a los sectores más favorecidos es profundo y definitivo. No solo constituye una base para un modelo social en que la democracia no puede tener lugar y todo el ejercicio de lo político se dibuja como un simulacro sin sentido ni finalidad, sino que, además, persiste en la mantención y profundización de condiciones de desigualdad estructural dentro de la sociedad. Una vez instalado este escenario, no existe peor camino que la criminalización de la protesta social.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha definido la criminalización como “la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos” (2). En este sentido, la criminalización de la protesta social se ha desplegado en la imputación de delitos y la imposición de condenas en base a valoraciones político criminales, que obedecen a las decisiones políticas de quienes detentan el poder.

Finalmente, sabemos que términos como ‘individual’ o ‘privado’ constituyen pilares del esquema neoliberal de vida; de lo que se trata ahora, es de comprender que ello -en tanto parámetro ideológico- sostiene una determinada concepción de la ‘justicia’ que es aquello que hemos vivido cada vez más profundamente desde la década del ‘80 y es, frente a esta concepción, que debemos avanzar en responder ¿con qué concepción de la justicia haremos frente a este fondo ideológico que hemos heredado del periodo dictatorial y que ha sido tan bien administrado por las coaliciones de la transición?

Sin duda, el punto de inicio para esa respuesta corresponde a terminar definitivamente con los privilegios corporativos que han puesto a una clase social, minoritaria en número, por encima de todo el resto de chilenas y chilenos, como así también cuestionar la utilización de la herramienta penal para reprimir a quien se levante en contra de sus privilegios. ■

1. <http://ddhh.minjusticia.gob.cl/informacion-sobre-la-situacion-del-pais-desde-el-19-de-octubre>

2. CIDH. Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 49/15. 31 de diciembre de 2015. Párr. 43.

*Manuela Royo Letelier, candidata a Doctora en Derecho, Universidad de Talca. Candidata a constituyente de Modatima por el Distrito 23.

**Felipe Berrios Ayala, Doctor en Filosofía Política y Moral, Universidad de Chile. Director Revista Otro Siglo

Fin de los principios jurídicos del capitalismo y el sistema neoliberal

La justicia de la liberación

por Daniel Urrutia Laubreaux*

La urgencia de los principios jurídicos indígenas latinoamericanos por sobre los principios jurídicos que informa el sistema neoliberal capitalista, es la tesis central del autor de este artículo, Daniel Urrutia Laubreaux, Juez de Garantía, trasladado ilegalmente por la Corte de Apelaciones de Santiago a un Juzgado de Cobranza, por dictar una resolución que cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario a un grupo de presos por la revuelta, a propósito del estado de catástrofe por la pandemia viral. Un caso de 2004 llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la que emitió su sentencia en contra del Estado de Chile por diversas infracciones a los derechos fundamentales del magistrado en el contexto de una investigación disciplinaria. Para la Corte, Chile es “responsable internacionalmente por coartar la libertad de pensamiento y expresión de un Juez”.

En el prefacio de su libro “Extractivismos y Corrupción” (1), Eduardo Gudynas dice que los engranajes del extractivismo, mirados desde los procesos de defensa territorial y el análisis amplio de sus causas y consecuencias, su permanencia en la región, justificación y profundización se producen intrínsecamente unidos a violencia y corrupción, las cuales provienen directamente de las grandes empresas que intentan instalar megaproyectos, como de los mismos gobiernos latinoamericanos que reproducen la lógica de apropiación de la naturaleza, que la asume como un bien de consumo, transable y explotable sin límite. Esto constituye una emergencia de amenaza vital para el planeta.

Desde otra perspectiva, el discurso final de la Quinta Asamblea de la Red Iberoamericana de Jueces, celebrada el 2011 en Bolivia, expresó que una gran tragedia judicial en Latinoamérica es que aquellos jueces “independientes”, entre comillas, lo son ciertamente independientes de la voluntad de los pueblos latinoamericanos, puesto que se encuentran de espaldas a ellos, negando su existencia y son derecha y estructuralmente “dependientes” de la clase dominante, que construyó “la ley” para efectos de defender sus granjerías y privilegios.

Araxilos, Memoria rebelde (pintura y edición digital), 2020 (<https://www.instagram.com/araxilos>)**Mundo de la legalidad**

Y, ¿qué tiene que ver la destrucción y apropiación de la naturaleza permanente en nuestra región con la independencia de unos funcionarios nombrados por “la ley” para dirimir conflictos jurídicos relevantes? Tiene mucho que ver, la conquista y posterior proceso colonial construyó un aparato judicial a su medida, es decir un aparato judicial de represión de los pueblos conquistados. El profesor Alberto Binder (2) reafirma la idea de sumisión de los gobernados al gobernante, dando cuenta que el “trámite”, el expediente, el proceso, se convierte en algo de mayor importancia que el conflicto mismo, creándose la cultura del expediente: a través de este trámite el gobernado se deshumaniza, pasa a ser un número, y se encadena a un proceso que poco entiende y que le atemoriza. De este mundo cerrado nacerá la *cultura inquisitiva*, que es la matriz básica de funcionamiento de nuestros actuales sistemas judiciales latinoamericanos, configurando la imposibilidad del desarrollo de una “práctica social de gestación de la legalidad”, quedando la vida mandatada por el interés inmediato de los grupos de poder y por su arbitrariedad. Se generó, así, lo que Simón Bolívar denominó “Repúblicas Aéreas”: lo artificioso del mundo de la legalidad, se convirtió en el verdadero mundo del entramado judicial. Y esto se conserva en el presente, repitiéndose en un continuo que nos alcanza hasta ahora. De hecho, como afirma Idón Moisés Chivi (3), el Decreto Supremo de 1825, firmado por Bolívar, ordena que: “las antiguas Audiencias y Cabildos se convertirán en Juzgados y Cortes”. No hubo ningún cambio estructural; solamente se cambiaron los letreros de las puertas. Y esto, más o menos, se repitió en gran parte de la región. De hecho, las leyes españolas, como las Siete Partidas, estuvieron vigentes en procesos penales hasta casi 1900.

Una premisa provocadora: La ley en Latinoamérica está construida para mantener las condiciones que benefician a la élite de turno.

Y hay muchos ejemplos de esto, como el sistema de fondos de pensiones actual en Chile. Otro caso demasiado evidente es la construc-

ción del delito de usurpación de tierras (robo de tierras) en el Código Penal chileno, que tiene pena de multa, mientras el robo de animales tiene una pena equivalente al homicidio. ¿Por qué tiene pena de multa?, porque cuando se redactó el Código Penal el Estado chileno avanzaba sobre las tierras de los mapuche en 1874, a través de una guerra de tierra arrasada. Si llegaban a perseguir a los colonos por robar tierra indígena, solo podían ser multados. La norma está vigente al día de hoy.

¿Que la ley sea el escudo de los poderosos ha cambiado?

Élites cómplices

El modelo de desarrollo neoliberal (4) ha cambiado las reglas de las instituciones privadas y públicas y ha exigido una actualización del sistema jurídico para el desarrollo, que asegure condiciones propicias para el comercio, el sistema financiero y la inversión.

Mantener este sistema jurídico es el nuevo papel del Estado. En este sistema, los derechos de los pueblos no son ninguna prioridad y, por tanto, el Estado de Derecho se identifica y caracteriza como un elemento esencial para ese tipo de “desarrollo”. ¿Acaso dentro del sistema judicial se encuentran como objetivos combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, incorporar a los grandes sectores excluidos? Le basta ser eficiente y eficaz para los dueños y propietarios del capital financiero mundial y las élites cómplices en cada país.

La invasión y conquista de Abya Yala, como denominan las naciones originarias a América Latina, no solo significó la derrota militar y el sometimiento de infinidad de naciones sino el advenimiento de un tiempo especial de tribulación para dichos pueblos, donde su forma de vida fue trastocada de una manera absoluta, llegándose a producir un verdadero “epistemicidio” que acabó con muchos de los conocimientos ancestrales de los pueblos. Aun así subsistieron saberes que se fueron transmitiendo generación tras generación, las filosofías y sistemas jurídicos pudieron pervivir en ciertos lugares, mezclándose en una mixtura de conocimientos y fijándose culturalmente en el ADN de los pueblos. Esta carac-

terística situacional se va desarrollando en el Abya Yala y adquiere expresiones por todo el continente, desde la resistencia mapuche, la persistencia maya, la revolución indiana del MAS en Bolivia y tantas otras expresiones de los pueblos indígenas.

La colonización, entonces, se forma desde esta imposición violenta de vencedores sobre vencidos, donde los primeros eliminan, someten y dictan las reglas para controlar al derrotado. La configuración de las instituciones judiciales indianas, por parte del español, responden justamente a ese someter, controlar y dominar. Este mecanismo de dominación colonial no sólo es material, físico y económico, sino también cognitivo, y copa gran parte de las estructuras mentales de los dominados en un proceso de des-identificación progresiva. El Poder Judicial es el ejemplo paradigmático de estructura burocrática jerárquica construida con ese fin, tanto en su faceta más brutal como administrador del poder punitivo del Estado- como en la disciplina de sus propios integrantes, que los modela, forma y convierte en replicadores del pensamiento y conductas de sus superiores jerárquicos.

Razón subalterna

Resumiendo y siguiendo a Boaventura de Sousa Santos (5) la colonización fue impuesta sobre las naciones que existían en esta región, a través de la dominación, y el control militar y político; esto fue fundamentado en un marco categorial epistémico que fue negando sistemáticamente la producción de conocimientos y saberes ancestrales que no fuesen de matriz eurocéntrica. Así las formas iniciales de dominación permanecieron vigentes en las estructuras y especialmente en la perpetuación de una élite blanca que concentró el poder hasta el día de hoy, reprimiendo la potencia plebeya, como afirma Álvaro García Linera (6).

Esto que hemos descrito constituye la matriz colonial del poder que reproduce en “la ley” la defensa de las élites blancas por parte del mismo sistema jurídico latinoamericano.

¿Esta situación permanente de injusticia puede ser cambiada? Creemos que sí y pa-

ra dicho cambio proponemos el concepto de la jurisprudencia de la liberación, dentro del marco teórico de la descolonialidad postulada por Anibal Quijano, Catherine Walsh, Castro Gómez y otros y otros, que enfrenta a la matriz colonial del poder o sistema mundo de Immanuel Wallerstein, y constituye una base categorial que permite levantar un nuevo paradigma rebelde, de desobediencia epistémica, respecto al sistema que se impuso desde la conquista devenido en neoliberal. En este sentido, el pensamiento descolonial es el reconocimiento y la implementación de una episteme fronteriza o razón subalterna, que releva la importancia de los saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas, como medio para eliminar la pretensión de la hegemonía capitalista y pensamiento único y levantar mundos donde quepan muchos mundos, como lo sintetiza la postura de los zapatistas en México.

Hay que reconocer que el dispositivo judicial la mayoría de las veces ha defendido a los poderosos de turno y a la acumulación capitalista de las élites corruptas que gobiernan la región, pues se encuentra aliada desde su creación con los imperialismos y actualmente con el mercado internacional financiero que perpetúa un sistema de exclusión y creación de marginalidad y miseria.

En este escenario, planteamos que debe irrumpir la jurisprudencia de la liberación, que no es otra cosa que la opción por parte de los que toman decisiones jurídicas relevantes de abandonar la defensa irrestricta de la ley como cortapisa a los derechos sociales y por tanto creadora y perpetuadora de marginalidad y pobreza y levantar consistentemente decisiones que doten de contenido de derechos humanos o derechamente superen esa "ley".

Cambiar el horizonte

La jurisprudencia de la liberación tiene dos estados, una versión débil o jurisprudencia autopoética y versión fuerte o jurisprudencia de la liberación propiamente tal.

La primera es aquella que dentro del sistema neoliberal extrema las normas constitucionales y partir del bloque constitucional, es decir, las normas del derecho internacional de los derechos humanos, interpreta la "ley" desde esta perspectiva dotándola de un nuevo contenido desde los derechos. Esto es la interpretación conforme al bloque de constitucionalidad que se ha ido afianzando poco a poco.

Esta faz es débil, puesto que intrasistema y, por tanto, tiene como límite las cláusulas neoliberales que cierran el sistema mundo capitalista. Donde el sistema internacional de los derechos humanos también se encuentra limitado por aquellas cláusulas o principios límites.

La versión fuerte de la jurisprudencia de la liberación parte por reconocer la estructura del sistema mundo capitalista y las consecuencias que éste tiene para los pueblos latinoamericanos, consecuencias que son la explotación, la violencia y la corrupción en la vida como la conocemos en el planeta. Reconoce que dicha forma destructiva se fundamenta en los principios jurídicos impuestos desde la Colonia, que no son sino los romano-canónicos barbarizados por la corrupción de la conquista, como lo denunció Bartolomé de las Casas, desde los primeros días de la colonización genocida.

Una vez puesto de manifiesto el nexo causal directo entre la destrucción capitalista de nuestra región, no solo a nivel de pueblos, sino al grado de poner en duda la continuidad de la vida como la conocemos en el planeta, es urgente cambiar el horizonte epistémico desde donde se deciden los conflictos jurídicos.

Una puerta abierta desde la jurisprudencia de la liberación es la irrupción y defensa de los principios desde la cosmovisión ancestral indígena, proponiendo la irrupción y defensa de lo que hemos llamado "Bloque de Ancestralidad", que significa hacer operativos sus principios, como el concepto de Suma Kawsay o Suma Qamaña o Kume Mogen; Fernando Huanacuni Mamani (7) lo explica: "Nosotros diferenciamos vivir mejor de Vivir Bien. La modernidad, el desarrollo, el progreso occidental, motivan el vivir mejor, que tiene una connotación de tener más, de ahorrar más, de acaparar más bienes materiales... Es un sistema de competencia entre seres, entre pueblos... Nosotros no queremos vivir mejor, no queremos competir con nadie. Para nosotros la premisa de Vivir Bien o Buen Vivir significa vivir en armonía o equilibrio. Ése es el concepto básico de la vida. Para el capitalismo el capital es lo más importante, para el comunismo el hombre es lo más importante, pero para la comunidad, para el pueblo indígena originario, la vida es lo más importante, y en ese contexto se sitúa el Suma Qamaña. Vivir Bien es equilibrio y armonía, y ese equilibrio y armonía tienen

acciones específicas concretas en nuestra familia, nuestra vida y la sociedad. Vivir Bien también significa despertar en el contexto de relacionamiento con la vida, complementándonos con todas las formas de existencia". Esto cambia el eje de decisión en lo que se refiere a los problemas de toda la sociedad y su relación con la continuación de la vida humana y no humana.

Un ejemplo clarificador lo expone la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a través del Caso derecho al agua, sentencia del 2014 (8), que se trata de una acción popular presentada por una comunidad contra otra de la región de Potosí; Alegan los recurrentes que su comunidad fue privada del agua, por la otra comunidad que cerró la salida del agua de las referidas lagunas; incumpliendo un acuerdo previo de 1982.

El Buen Vivir

La sentencia del Plurinacional señala que "A diferencia de lo que ocurría con la Constitución Política abrogada, la importancia que le otorga la Ley Fundamental vigente al agua, se visualiza desde el preámbulo, cuando por una parte establece que la búsqueda del vivir bien implica el acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos, basados en los principios de respeto e igualdad entre todos, soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad, que permiten entre otros el uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables, para preservar la vida no únicamente del ser humano sino del resto de los animales, plantas y otras formas de vida que conforman los diferentes ecosistemas cuyo análisis supera el antropocentrismo que estableció al ser humano como la medida de las cosas y la considera como una especie más de entre las otras, no más importante sino complementario al resto de seres vivos, la tierra y lo que se encuentre adherido a ella y permite resolver las causas sometidas a este Tribunal en base al principio pro natura justamente porque dicha tutela a la larga no sólo busca proteger al ser humano concreto sino el derecho de existir de futuras generaciones".

El tribunal Constitucional Plurinacional al evidenciar el cambio experimentado en la nueva Constitución y señalando específicamente a la búsqueda del "Vivir Bien" como un cambio de paradigma absoluto por el cual los conceptos de acceso al agua, trabajo,

educación y otros se llenan de un contenido "otro", es decir superan la concepción occidental individualista, que se expresa en las constituciones liberales de la región.

El tribunal finalmente decide que las comunidades deben, de acuerdo a sus usos y costumbres, adoptar medidas necesarias para el uso del agua por ambas comunidades y obligarse a realizar lo necesario para la mantención del ciclo del agua para todos.

La versión autopoética de la jurisprudencia de la liberación que radicaliza la aplicación de los derechos humanos para todos no está exento de dificultades, sobre todo para los jueces que no son meramente la boca de la ley. Y claro está se habrá avanzado una enormidad de lograr que las y los jueces apliquen dichas normas en la resolución de los conflictos jurídicos relevantes.

Pero por otro lado el cambio civilizatorio que significa la Jurisprudencia de la Liberación propiamente tal es un imperativo de la continuidad y reproducción de la vida en el planeta, y ya no tenemos mucho tiempo para parar la destrucción neoliberal capitalista. Como dice Gudynas y mi hermano pehuenche David Cayuqueo, hay que pensar y sentir como araucarias. ■

1. Gudynas Eduardo, "Extractivismos y Corrupción" Ed. Quimantú 2018, p. 9

2. Binder, Alberto. La fuerza de la Inquisición y la debilidad de la República, en http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=27

3. Chivi, Idón Moisés. "Perspectivas para la descolonización en Bolivia" en Descolonización en Bolivia, Análisis y Debates, Marcelo Lara, compilador, Centro de Investigaciones y Políticas Sociales CIPS-Oruro, Bolivia, 2011, pág. 58.

4. Urrutia Laubreaux, Daniel, en "¿Justicia Latinoamericana? Crítica al modelo de dominación judicial colonial imperialista" ver en: <https://distintaslatitudes.net/injusticia-latinoamericana-critica-al-modelo-de-dominacion-judicial-colonial-imperialista>

5. De Sousa Santos, Boaventura "Descolonizar el Saber, reinventar el poder" Ed. Trilce, 2010.

6. García Linera, "La Potencia Plebeya" Siglo del Hombre Ed. 2009

7. Huanacuni Mamani, Fernando. Ver en: http://www.economiasolidaria.org/noticias/buen_vivir_complementariedad_con_todas_las_formas_de_existencia

8. Ver en Urrutia Laubreaux, Daniel En "Indios contra Patricios, el contraataque de los guerreros del arco iris" Tesis para optar al grado de maestro en Universidad Alberto Hurtado, 2017, p. 84.

*Juez de Garantía

Los Libros de la Radio que piensa

TESTIMONIO DE UN DESTIERRO
 EDGARDO ENRIQUE FRIEDBERG
 Testimonio de un destierro
 Jorge Gilbert Cabello

CANTO UNIDO EN ENCUENTRO AMERICANO
 CANTO UNIDO EN ENCUENTRO AMERICANO
 David Spence

BUENAS SEÑALES (para un Bello Sino)
 BUENAS SEÑALES (para un Bello Sino)
 Sergio Jara (Sergio Jara)

LA POLICIA Y LA DEMOCRACIA
 LA POLICIA Y LA DEMOCRACIA
 Sebastian Ruiz

EJ
 102.5 FM
 Adquíralos en:
 Miguel Claro 509
 Providencia

Transparencia y probidad para el 2021: ¿Qué aportará la universidad?

por Bernardo Navarrete Yáñez*

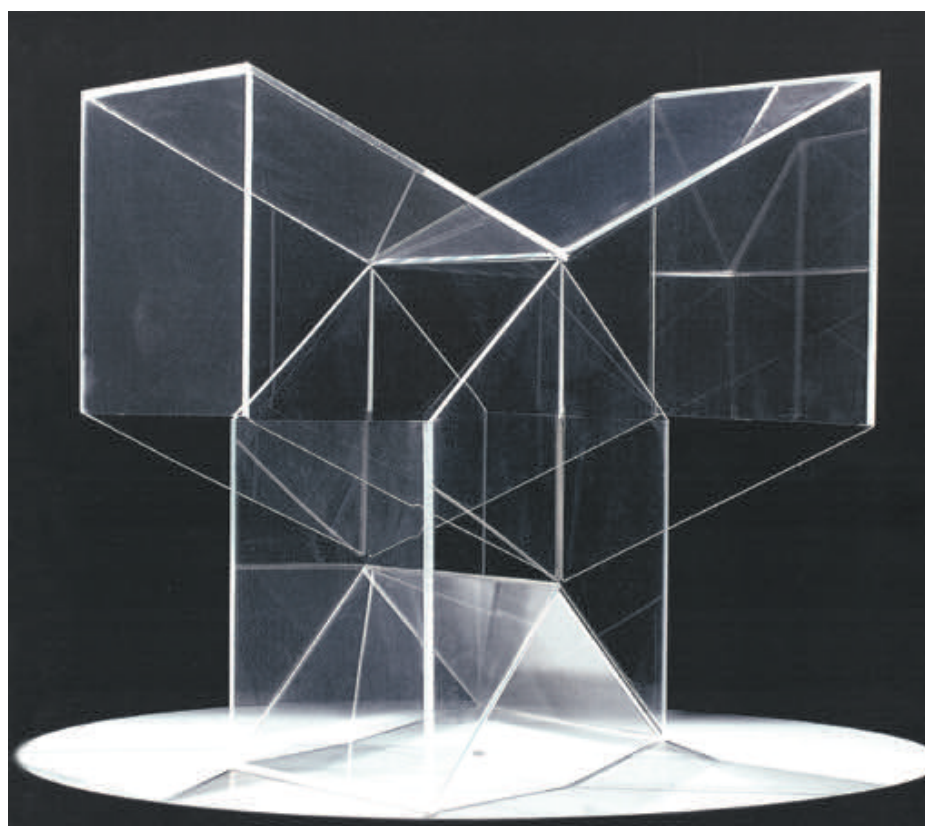
La transparencia es al Estado como la probidad es a la moral pública. Ambos conceptos se sostienen sobre inquietudes especulativas que suponen que la transparencia es “algo bueno”, lo que sería cierto porque la transparencia genera una mayor responsabilidad y legitimidad en la formulación de políticas, enfrentando las persistentes asimetrías de información entre las autoridades públicas y los ciudadanos, incluidas las empresas privadas. A su vez, la probidad es propia de toda la comunidad nacional, no sólo de las instituciones del Estado. Y no es una virtud cívica que esté garantizada por estándares en la vida pública, ya que probidad no es ausencia de corrupción.

Es difícil no compartir con la profesora de Derecho y Ciencia Política, Susan Rose-Ackerman, que la transparencia se ha convertido en una palabra dirigida al ámbito de la lucha contra la corrupción en el gobierno y que no posee mucho valor por sí sola. La transparencia, siguiendo a Carolyn Ball, es un valor público adoptado por la sociedad para contrarrestar la corrupción. Pero son los mecanismos que permiten mayor acceso a la información los relevantes, ya que el control de la información es poder y lo es más en una economía de la información como la actual.

Ese control apunta a la burocracia en general, destacándose el “riesgo moral” que ocurre cuando un funcionario es consciente de que no tendrá que enfrentarse a los efectos de sus decisiones, generando impunidad ante los mismos y consecuencias negativas para los ciudadanos.

La “neurociencia” nos ayuda a entender lo anterior. Siguiendo a Antonio Damasio, no hay lugar al “pienso, luego existo” que defendía Descartes, sino al “siento, luego existo”, ya que “sin emociones no hay toma de decisiones”. Y en este plano, los sesgos cognitivos en la toma de decisiones son relevantes, ya que en palabras del psicólogo y Nobel de Economía Daniel Kahneman, nuestra conducta es mayormente automática, intuitiva y emocional. Sí, detrás de cualquier comportamiento hay una emoción y un hábito que nos impide controlar o modificar una conducta, cuyo precio es demasiado alto -en palabras del sociólogo Zygmunt Bauman-, ya que se “paga con la misma moneda en que suele pagarse el precio de la mala política: el sufrimiento humano”.

El problema con lo anterior es el “sesgo de confirmación”, el cual plantea que nos inclinamos sólo a buscar información que ratifique nuestra creencia previa e ignoramos toda aquella que la contradiga. Para Ball, un esfuerzo en este sentido será convencer que, a medida que aumenta la exigencia de transparencia disminuye la tolerancia ante la corrupción. Y que la transparencia se



Alain Tergny, 4 cubos (acrílico), 1975 (www.alaintergny.com)

entrelaza sutilmente con la responsabilidad, la eficiencia y la eficacia, aunque con la necesaria preocupación por el secreto y la privacidad.

El politólogo norteamericano Samuel P. Huntington sostenía que todas las instituciones políticas tienen dimensiones morales. Un buen ejemplo de ello -y tal vez el más importante- fue el informe Nolan de 1994, que buscó responder a la “creciente inquietud que se estaba produciendo en la sociedad británica ante determinados comportamientos en la Función Pública”. Se planteó “aportar claridad y orientación allá donde se presente la incertidumbre moral” en la forma de siete principios, uno de los cuales fue la transparencia. Ella debía presidir la actuación de toda la Función Pública, ya que la equidad social no podría mejorar mucho si sólo se benefician del proceso de apertura a la información pública los grupos ya privilegiados.

Entonces, ¿a más transparencia más calidad institucional y de derechos? Si bien tenemos la secreta esperanza de un lenguaje moral común, nos enfrentamos a un dilema: todos queremos transparencia desde el Estado, pero no necesariamente estamos dispuestos a usar el “radar ético del cerebro” -tal como lo sugiere Daniel Coleman- que nos lleve a una conducta proba. Un buen ejemplo de esto se observa cuando las personas se unen a un equipo de gobierno na-

cional, regional o local: pueden terminar atrapadas en una matriz moral que condiciona el principio de probidad del funcionario al de la organización, aun cuando ésta sea permisiva respecto de dicho principio.

La probidad es el espejo de la transparencia. El informe Nolan lo relaciona con “Integridad” “Honestidad” y “Ejemplaridad”. La probidad es un principio que obliga a las autoridades y funcionarios de la Administración Pública a observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Ello termina en la intimidad de los candidatos, el reducto último de la personalidad, allí “donde soy lo que soy”, poniendo un límite a la siempre usada afirmación de Thomas Jefferson: “Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”.

¿Cuánta transparencia y probidad estamos dispuestos a aceptar? Esta es una pregunta que debemos responder desde la universidad. Si aceptamos -siguiendo al filósofo vasco Daniel Innerarity-, que la “política es una pequeña rebelión contra el prejuicio de que todo está decidido y resulta inalterable”, entonces, a lo menos tenemos dos preguntas. La primera es la del politólogo Francis Fukuyama: ¿Por qué las reglas de transparencia han aumentado la polarización

y el lobby haciéndolos más efectivos? Y aunque investigaciones recientes han demostrado que la petición de información y su procesamiento responden de manera desproporcionada a los intereses de académicos, tesisistas y ciudadanos que expresan disconformidad con postulaciones a cargos públicos, se sabe poco sobre las demandas de información de las consultoras y empresas que procesan y venden conocimiento.

Esta línea de investigación se abre a un contrapunto que surge de los trabajos de Byung-Chul Han y la “sociedad de la transparencia”, que es a la vez una sociedad de la desconfianza y de la sospecha, sosteniendo la tendencia hacia el control. Para este filósofo, la exigencia de transparencia sólo expresa que la “moral de la sociedad se ha hecho frágil, que los valores morales, como la honradez y la lealtad, pierden cada vez más su significación”. Otro contrapunto es asumir que la transparencia es una forma de hacer frente a la “Tesis de la Perversidad” de Albert Hirschman, que sostiene que toda acción deliberada para mejorar algún aspecto del orden político, social o económico, únicamente sirve para agudizar la situación que se desea remediar.

La segunda pregunta que podríamos abordar: ¿Es la probidad un “problema perverso”, entendiendo que para su solución se requiere que un gran número de personas cambien sus códigos de conducta? Ello nos lleva nuevamente a la relevancia de la integridad, rectitud y honestidad, ya que sabemos poco sobre la forma en que se entiende la probidad en Chile y el peso relativo de la cultura y de los contextos legales, sociales, económicos y políticos.

En este sentido, cabe preguntarse por qué se eligen políticos cuya reputación de probidad no es relevante, a pesar de que sí lo sea para sus electores. En este sentido, el vínculo causal entre la probidad y la confianza política es algo provisional, del mismo modo que los juicios que se emiten sobre el carácter moral de las autoridades políticas. En este sentido, la transparencia como acceso a la información sobre la probidad de las élites políticas es un desafío en el cómo se presenta la información y los estándares con los cuales se miden.

La probidad política aumenta la confianza en el gobierno. Si ello es así, entonces la última pregunta es si, a portas del 2021, es válida la afirmación sostenida hace veinte años por el politólogo estadounidense Peter Siavelis: Chile presenta un modelo de cómo la probidad política y la eficiencia administrativa relativa (en términos latinoamericanos) contribuyeron a la legitimidad de la democracia. ■

*Universidad de Santiago de Chile.

Resultados de las elecciones en el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile

El profesorado en las urnas

por Dante Castillo* y Mario Torres**

En la tarde del 9 de diciembre de 2020, en la sede nacional Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, se entregan los resultados de las elecciones nacionales y regionales. La lista D denominada “Los profesores despertamos, Chile despertó” y liderada por Carlos Díaz, gana holgadamente los comicios de esta relevante organización gremial. Estos resultados representan un triunfo que asegura la continuidad de la gestión del actual presidente del magisterio, Mario Aguilar, quien no se presentó a la reelección.

Carlos Díaz, al igual que Aguilar, es militante del Partido Humanista y comparte su visión sobre la independencia que debe tener el gremio de las y los profesores de Chile, respecto de las presiones que normalmente ejerce el sistema de partidos políticos. De esta manera, es esperable que, bajo esta nueva dirección nacional, el Colegio de Profesoras y Profesores continúe alineado con las organizaciones de la sociedad civil organizada. Junto a ello, Díaz también parece mantener una postura crítica hacia las políticas del Ministerio de Educación. Esto se ha manifestado, por ejemplo, cuando se pronunció sobre el retorno a las clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus, cuando señala que “aquí no hay una preocupación por la educación o por generar mejores condiciones para que los niños y niñas puedan estudiar. El tema de fondo es para reactivar la economía”, dijo a propósito de la fallida apertura de un establecimiento educacional de la comuna de Pirque.

La nueva directiva nacional será liderada por el profesor Carlos Díaz Marchant, actual presidente del Regional Metropolitano, cuyo directorio nacional quedará conformado por Patricia Muñoz (secretaria general), Magdalena Reyes (tesorera), Habnel Castillo (prosecretario) y Carlos Ojeda (protesorero).

Pero más allá del retundo apoyo que recibió la lista de continuidad, los resultados de las elecciones del colegio de profesores trascienden las fronteras del propio gremio y se constituyen en un buen reactivo para analizar el ambiente político nacional en general y profundizar en el análisis de los resultados de las elecciones que promueve el sistema de partidos políticos.

Límites a reelección

Debido a una modificación de los estatutos nacionales del Colegio de Profesoras y Profesores, impulsada por la gestión saliente, en esta elección estaban impedidos de ser candidatos los dirigentes históricos. En otras palabras, no podían postularse quienes han pasado dos períodos siendo parte de la directiva nacional. Es por lo que, por ejemplo, quedaron fuera de este proceso electoral el actual presidente Aguilar y el conocido dirigen-



Enrique Zañartu, Sin título, 1950
(Exposición en D21 Proyectos de Arte hasta el 29 de enero)

te del profesorado, Jaime Gajardo. Sin duda esta normativa impulsada por la gestión de Aguilar y ratificada en una consulta nacional del magisterio, se contradice rotundamente con las propuestas de las direcciones de los partidos políticos o por las propuestas de los congresistas. Este elemento es una primera lección del profesorado en el proceso constante de perfeccionamiento de la democracia, de la representación y de los procesos de electorarios. Pero al mismo tiempo muestra de manera manifiesta, cómo una organización gremial, cuyos dirigentes pueden estar afiliados a un partido político, pueden conciliar una acción y representación gremial.

Alta participación

Una segunda lección que emana del ejercicio democrático realizado por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, tiene que ver con el alto porcentaje de participación de los docentes que, pese a la implementación de un sistema de votación electrónico, superó levemente las tendencias históricas de participación del electorado. Es decir, una cifra que tiende a ubicarse en los 20 mil votos nacionales. Esta cifra es importante, pues no distorsiona la legitimidad del proceso y de los resultados y el respaldo que se obtuvieron las y los candidatos electos a nivel nacional y regional.

Nuevamente esta tendencia gremial se contradice con lo que se observó una semana antes en el proceso de las elecciones primarias a gobernadores regionales y alcaldes, donde se midieron las alianzas y las coaliciones con miras a los comicios de 2021. El domingo 29 de noviembre las y los chilenos volvieron a las urnas, y por partida doble, pues además de las primarias para definir a los candidatos a gobernadores regionales, se realizan elecciones para definir a los candidatos a alcaldes en algunos municipios del país.

En la ocasión, se presentan 87 precandidatos a gobernadores y 103 para alcaldes, los que competirán a nivel nacional y registraron sus nombres en 2.024 los locales de votación habilitados en todas las comunas del país, en un total de 21.281 mesas. Más de 14 millones de chilenos y chilenas estaban habilitados para votar en las elecciones primarias a gobernadores regionales y alcaldes.

Pese a la logística prevista, la participación ha sido muy distintiva a la que días después, se observó en las elecciones nacionales y regionales del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Una vez finalizado el proceso electoral, el Servicio Electoral del país, señaló que fueron 418.685 los votos reportados en las primarias municipales y de gobernadores regionales. Más allá de las habituales explicaciones de contexto, estas cifras sin duda opacan las primarias para gobernador y alcalde. Solo se obtuvo un 5% de participación. Lo más relevante de este proceso está marcado por la baja afluencia de electores, que, desde un análisis electoral objetivo, debiese ser considerado como uno de los principales hitos en las elecciones celebradas en el 2020. Según los registros del Servicio Electoral, hubo mesas con apenas cinco votos y otras con menos. Sin considerar la demora notoria en la constitución de mesas, que nunca llegó al 100% de las mesas instaladas. A las cuatro de la tarde, la cifra de mesa constituidas llegó al 94,97%. En síntesis, los partidos políticos no logran seducir a la ciudadanía, opacando los resultados y la representación de los precandidatos.

Resultados y evaluación

Resulta interesante destacar que, en las elecciones de las direcciones nacionales y regionales del Colegio de Profesores, la lista de continuidad logró imponerse cómodamente, ratificando y evaluando positivamente la

conducción del equipo liderado por Mario Aguilar. Resulta muy significativo y relevante políticamente, que el nuevo presidente del gremio tenga la misma militancia humanista que el actual presidente. Pero a ello se agrega otro resultado que también es importante de consignar. En primer lugar, los tres primeros cargos del directorio nacional pertenecen a la misma lista, pero, en segundo lugar, cinco de los nueve cargos de este directorio, forman parte del mismo conglomerado que dirigirá el profesor Carlos Díaz Marchant. De esta manera, la lista de continuidad de Mario Aguilar gana indiscutiblemente las elecciones del Colegio de Profesores de Chile, en una lista en alianza con el Movimiento por la Refundación y el Frente Radical de Trabajadores de la Educación, superando cómodamente al grupo encabezado por el Partido Comunista que buscaba recuperar el control del magisterio.

Estos resultados también cuestionan el discurso que explica derrotas debido a la falta de renovación de los rostros de los representantes o al agotamiento que naturalmente se daría en los cargos de representación popular. Por el contrario, las elecciones del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile son la manifestación de un electorado que, junto con la convicción y el carisma de los dirigentes, también considera y evalúa el programa, los contenidos y la implementación de los compromisos electorales.

Partidos y sociedad civil

A partir de los resultados de las elecciones del Colegio de Profesores de Chile, es importante procurar espacios de reflexión que profundicen los alcances de ella y su contrapunto con lo que está ocurriendo en los procesos participativos convocados por el sistema de partidos. Cuando quien convoca es la ciudadanía, a través de sus organizaciones e instituciones sociales, pareciera ser que la participación aumenta significativamente. Quizás eso es lo que ha ocurrido con la participación histórica que se vivió el 25 de octubre con el llamado a Plebiscito Nacional por una nueva Constitución Política para el país, y la impronta social que el equipo dirigido por Mario Aguilar le ha otorgado al Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Es este sentido, es probable que los resultados en las convocatorias electorales se midan por la ausencia o presencia de actores sociales. Sujetos reconocidos por su convicción social, más allá de su militancia política, asegurando una conexión con los votantes y sus sensibilidades. Mientras que una convocatoria realizada por los partidos políticos sería permanentemente castigada con la baja participación electoral. Los partidos políticos ya no convocan como antaño. Por lo tanto, nuestra sociedad no enfrentaría una crisis de participación o de representación, lo que está desatendiendo es una crisis del sistema de partidos, no del sistema político.

Para finalizar, sería muy relevante que se iniciara una discusión que, partiendo de estos recientes hechos electorales, se profundizara en su análisis para encontrar claves que permitan socorrer a nuestra democracia acorralada. ■

*Investigador PIIE.

**Vicerrector de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Vinculación con el Medio. UTEM.

Una mirada sobre su diversidad y pluralidad

Evangélicos y política: una relación más allá de los estereotipos

por Nicolás Panotto*

La primera emisión de la franja electoral con miras al plebiscito constitucional del 25 de octubre trajo consigo una serie de controversias. Una de ellas vino de la mano de un representante de “Evangélicos por el rechazo”, quien básicamente planteó que este proceso no estaba aprobado por la Biblia y que, más bien, era inspirado por Satanás. Las reacciones no se dejaron esperar. Rápidamente se levantaron quienes comenzaron a cuestionar la legitimidad de la participación de grupos religiosos en asuntos públicos, solicitando que asuman el lugar que les corresponde como a cualquier creencia de este tipo: el ámbito de lo privado. Este hecho gatilló nuevamente las discusiones sobre la fragilidad de la laicidad chilena, la necesidad de profundizar la separación entre religiones y Estado, así como también un conjunto de advertencias que siempre irrumpen desde conciencias liberales y progresistas frente a este tipo de discursos: el cuidado con el avance de pensamientos retrógrados o anacrónicos, la presencia del medievalismo, la corrosión del fundamentalismo, entre otros epítetos volcados hacia “el evangelismo” (sic). Demás está decir que estos sectores vaticinaron, de entrada, que todo este espectro se inclinara, indudablemente, por el rechazo. Recuerdo durante esos días hablar con dos representantes de un reconocido *think tank* de la izquierda chilena sobre la posibilidad de realizar algunas acciones mediáticas para contrarrestar este tipo de narrativas. Su respuesta fue contundente: “nosotros ni pensamos en los evangélicos. ¿Para qué, si su voto está cantado?”. Los pronósticos fueron lapidarios.

Este suceso también movió el avispero dentro del propio campo evangélico. Se levantó el grupo de “Evangélicos por el apruebo”, recordando que las iglesias protestantes son plurales, y que en su seno conviven muchas cosmovisiones, que no necesariamente se sienten identificadas con las palabras vertidas por Kevin Valenzuela durante la franja electoral (1). En la misma línea, el Concilio de Iglesias Protestantes Históricas de Chile emitió un comunicado donde subrayó uno de los principios fundamentales del campo evangélico, como es su diversidad y autonomía internas, razón por la cual nadie podía osar hablar en representación de algo tan irreal como “LA iglesia evangélica”, sin reconocer su heterogeneidad (2). De forma paralela, muchas voces independientes de diversas denominaciones, movimientos y organizaciones, coparon las redes sociales con debates, enfrentamientos y discusiones sobre estos vaivenes.

En el plebiscito

Pasados los exitosos eventos del 25 de Octubre, donde el Apruebo ganó por un 80%, el monitoreo post-plebiscito del CADEM (3) arrojó un dato llamativo: al indagar dentro del espectro religioso de votantes, el campo evangélico se había inclinado mayoritariamente por el Apruebo (57% vs. 43%). Aunque representó la identificación religiosa que más acompañó al Rechazo (al compararlo con el 26% católico), las estadísticas fueron hacia una dirección hasta ese momento inesperada, al menos por algunos analistas políticos, grupos de activistas y ciertos partidos -especialmente del ala centroizquierda-, que pronosticaron un voto homogéneo y casi “natural” dentro del espectro evangélico. ¿Había ocurrido algo particular para tal desenlace? ¿Alguna variable que no se tuvo en cuenta? ¿Tal vez hubo un movimiento que logró convencer a este sector para actuar de otra manera?

De ninguna manera. Fue un error de lectura que, lamentablemente, es muy común encontrar, especialmente en sectores progresistas. Una mirada que acota el accionar religioso bajo la moderna división entre lo público y lo privado, distinción que el mismo feminismo ha cuestionado férreamente (¿lo privado es político!), y que clausura la legitimidad de otros modos de participación en el espacio público, más allá de la institucionalidad de la “clase política” y su burocracia. Una categorización que recluye lo político y lo público bajo una concepción técnica y racional, que deja de lado otro tipo de performances y apropiaciones como las representadas en la sociedad civil, y dentro de ella, a las espiritualidades y religiones, en su sentido más amplio y plural. Una mirada que tiende a etiquetar lo religioso como sinónimo a fundamentalismo. Tal generalización con respecto al modo de ver la actuación política del campo evangélico -y el religioso en general- responde simplemente a un conjunto de estereotipos que, más allá de responder a elementos socio-históricos válidos (el impacto de la presencia pública de discursos religiosos conservadores sobre el avance en políticas públicas, la incidencia de la matriz cristiana en las dinámicas políticas, entre otros) reflejan más bien una comprensión reduccionista del complejo fenómeno de las creencias (evangélicas en este caso) y lo político.

¿Voto evangélico?

El acontecimiento mencionado al inicio dejó al descubierto dos elementos que siempre han formado parte de las dinámicas dentro del conglomerado evangélico, y que muchas veces son pasados por alto en algunas lecturas superficiales. Primero, que no existe tal cosa como el “voto evangélico”. Pueden existir problemáticas o temas que articulen con mayor fuerza a ciertos sectores, pero ni siquiera ello nos arrojará una foto única sobre los tipos de accionar político, en términos de identificación ideológica o filiación partidaria. Segundo, como base natural de lo anterior, es que el mundo evangélico está habitado por tal diversidad de voces y posturas, que es imposible hacer un correlato unidireccional, como se suele hacer con la ligera etiqueta de “conservadores” o “fundamentalistas”. Una cosa es que el significante “evangélico” haya adquirido una visibilidad más notoria con respecto a ciertos temas sensibles en estos últimos años, que hayan emergido con fuerza sus rostros más conservadores, que veamos una mayor organización política de determinados grupos, o que, inclusive, sea más común que exista una articulación con sectores políticos hegemónicos. Pero algo muy distinto es aplicar estos ejemplos como parámetro para analizar los complicados vericuetos de la relación entre creyentes evangélicos y dinámicas políticas.

La particularidad del campo evangélico reside en su configuración identitaria y socio-religiosa, y no tanto en algún tipo de vinculación ideológica que represente a todo su espectro. En realidad, esto sucede con toda creencia religiosa. Las comunidades evangélicas proponen un tipo de configuración comunitaria dinámica, una apelación a la subjetividad, una apropiación de la dimensión afectiva de la espiritualidad, entre otros elementos, que las han ubicado como una expresión que permite responder de manera contrahegemónica a dos demandas fundamentales en la sociedad hoy: primero, a la necesidad de reconstruir el propio cristianismo, y segundo, a la cri-

sis en las representaciones políticas tradicionales, tan ligadas a sectores de interés corporativo y de matriz católico-céntrica. En otros términos, es importante entender que la dinámica del campo evangélico tiene que ver con la especificidad de su configuración identitaria en términos estrictamente religiosos, de su llegada a sectores postergados por el Estado, a configuraciones rituales y simbólicas que empoderan otros modos de construir subjetividades y relaciones sociales, y no a algún tipo de vinculación política particular (4). Más bien, habría que pensar que es dicha dinámica distintiva la que posibilita diversos tipos de desplazamiento, resignificación y adaptación social, lo cual admite articulaciones muy variadas con ciertos sectores políticos, a diferencia de otras expresiones (incluyendo el catolicismo) que, más allá de su capacidad de movilización, poseen estructuras más rígidas.

Durante estos debates, también hubo quienes intentaron dar una imagen del campo evangélico como “superador” de las izquierdas y las derechas, como si existiera algo así como una especie de posición propia (5). Esto incurre a otro grave reduccionismo. A pesar del cuestionamiento teórico y metodológico que podamos hacer a la misma delimitación derecha-izquierda para encuadrar cualquier fenómeno político, es importante sostener que lo evangélico no posee una línea política particular, sino que, en su seno, conviven todo tipo de identificaciones, sean de izquierda, derecha, centro, conservadoras, progresistas, liberales, comunistas, entre todos los colores que podamos imaginarnos. Esta neutralidad atribuida no es más que un artilugio de sectores conservadores para hegemonizar su posición. La potencialidad política de lo evangélico radica en su capacidad articuladora. Es decir que las tendencias políticas más visibles que podamos asociar a su cosmovisión, dependen de las relaciones específicas con grupos o discursos políticos particulares.

Historia heterogénea

Aquí una advertencia importante: no es “la iglesia evangélica” la que vemos posicionarse públicamente en muchos casos. La diversificación interna del campo evangélico no sólo responde a una configuración denominacional (visiones teológicas) o eclesial (las iglesias locales específicas), sino también a un amplio conjunto de encuadres institucionales que lo componen. En otros términos, cuando hablamos de visiones evangélicas sobre la política, no necesariamente nos referimos a iglesias sino a organizaciones basadas en la fe (OBF), cuerpos pastorales, movimientos sociales (de alcance nacional y regional), redes de organizaciones religiosas, que poseen agendas sociales y políticas muy concretas, y que, más allá de vincularse con una cosmovisión y pertenencia evangélicas, no necesariamente representan a las iglesias. Esto hace del panorama algo aún más complejo.

La historia misma del campo evangélico-protestante chileno es tan heterogénea como su configuración. Podemos retrotraernos a su vinculación con la lucha por los derechos civiles durante la primera mitad del siglo XX, su identificación con sectores marginales a inicios de siglo XX (hasta el presente) o su presencia en todo tipo de expresión política partidaria, partiendo por el liberalismo y siguiendo por el anarquismo, el comunismo y la social democracia. En Chile existen amplios estudios al respecto, como los de Cristian Parker (6), Evguenia Fediakova (7),

Juan Sepúlveda (8), Luis Bahamondes (9), Matías Maldonado (10), Miguel Mansilla y Luis Orellana (11), entre muchos más, que nos ofrecen una mirada profunda y crítica sobre la diversidad de vinculaciones sociales, culturales y políticas existentes, sacándonos de lugares comunes y mostrando, en la misma línea, que el campo evangélico chileno responde a enraizamientos mucho más diversos de los pensados, dentro de los procesos sociopolíticos nacionales.

Lo que estamos planteando en esta columna está lejos de querer mirar por encima ciertos escándalos que han envuelto al mundo evangélico chileno recientemente (de la mano del obispo Durán), y menos aún proclamar un lugar de neutralidad -al decir “no todo es lo que parece”- que obvie la realidad de un neoconservadurismo evangélico que sin lugar a dudas está afectando negativamente el avance para la construcción de un ambiente democrático saludable y la conquista de derechos. Como hemos dicho, no hablamos de neutralidad (una carta muy común dentro del conservadurismo y la derecha) sino de pluralidad de representaciones, identificaciones y activismos. Una diversidad, sin duda, silenciada por muchos análisis. Reconocer los reduccionismos, estereotipos y caricaturas en torno a lo evangélico, implica un llamado a exponer con toda honestidad su heterogeneidad constitutiva, precisamente con el propósito (estratégico, si me permiten) de cuestionar aquellas miradas que por mayoritarias se pretenden hegemónicas, con la misión de legitimar encuadres monopólicos. Dar cuenta de su diversidad, nos permite promover contra-narrativas frente a estas voces que se creen absolutas, y promover articulaciones con otro tipo de voces y posiciones. ■

1. <https://lavozdelosquesobran.cl/evangelicos-por-el-apruebo-la-fraccion-de-los-protestantes-que-se-desmarca-de-la-extrema-derecha/>

2. <https://www.iglesia.luterana.cl/declaracion-del-concilio-de-las-iglesias-protestantes-e-historicas-con-relacion-a-la-franja-electoral-del-plebiscito/>

3. <https://www.cadem.cl/encuestas/estudio-especial-post-plebiscito/>

4. Cfr. Nicolás Panotto, “Lo evangélico como fuerza agonista: disputas hegemónicas frente a la transición política latinoamericana”. *Encartes*, vol. 3, núm. 6, septiembre 2020-febrero 2021, 36-51

5. <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/09/24/la-propuesta-politica-del-mundo-evangelico/>

6. Cristian Parker, *Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista*. Santiago: FCE, 1996

7. Evguenia Fediakova, *Evangelicos, politica y sociedad en Chile*. Santiago: CEEP, 2013

8. Juan Sepúlveda, *Democracia y evangelización*. Santiago: REHUE, 1988

9. Luis Bahamondes, “Ser evangélico no es ser de derecha: las complejidades de un credo usualmente desestimado por la izquierda”. Santiago: CIPER, 2020 <https://www.ciperchile.cl/2020/03/09/ser-evangelico-no-es-ser-de-derecha-las-complejidades-de-un-credo-usualmente-desestimado-por-la-izquierda/>

10. Matías Maldonado Araya, “Evangélicos y política en Chile, 1974-1986. El Consejo de Pastores y la Confraternidad Cristiana de Iglesias.” En Luis Bahamondez González, ed. *Transformaciones y alternativas religiosa en América Latina*. Santiago: CISO, pp.119-151

11. Miguel Mansilla y Luis Orellana, *Evangelicos y politica en Chile 1960-1990*. Santiago: RIL, 2018

*Teólogo, Dr. En Ciencias Sociales y Director de la corporación Otros Cruces.

Una oscura operación desplegada en 1971 para golpear al gobierno de Allende

Una maniobra para hacer bajar el precio del cobre

por Jorge Magasich*

Entre enero y marzo 1971, mientras el Congreso debate el proyecto de reforma constitucional que otorga al Estado el “dominio absoluto” sobre las minas de cobre y autoriza su nacionalización, opera una espectacular maniobra digna de una novela de espionaje destinada a provocar una baja artificial del precio del metal. Implica operadores de siete países, una sociedad basada en Suiza, y un presupuesto considerable.

El anuncio de la nacionalización del cobre provoca, al menos, tres operaciones fuera de Chile para escamotear sus efectos. La primera es la repentina decisión del dictador brasileño, Garrastazu Medici, de invertir cerca de 100 millones de dólares para producir y refinar cobre en Bahía, por el grupo Pignatari. Así la producción de cobre en Brasil pasaría del 10% del cobre consumido al autoabastecimiento (1).

La segunda es un estudio solicitado por la *National Security Agency* (NSA) sobre la posibilidad de hacer bajar el precio del cobre vendiendo la “reserva estratégica”, transmitido por el general George Lincoln a Henry Kissinger el 2 de enero. Observa que el precio de la libra, en 1970, ha caído de 80 centavos de dólar en abril a menos de 50 en diciembre; que hay 380 mil toneladas acumuladas en Gran Bretaña y en Bélgica; y que la reserva estadounidense es de 250 mil toneladas. Su venta no pone en riesgo la seguridad, pero requiere el acuerdo del Congreso, y “no tendría un efecto duradero significativo en los ingresos de exportación de Chile”, ya que Estados Unidos compra sólo un 15% de la producción chilena. “Estamos estudiando otros posibles enfoques relacionados con las exportaciones chilenas de cobre”, concluye (2).

La tercera es fabricar una falsa oferta para hacer bajar artificialmente el precio del metal. En resumen, una sociedad suiza que se presenta como intermediaria entre Chile y los compradores de cobre, intenta comprar una pequeña partida. Enseguida, en base a un documento sin valor, ofrece en los mercados la fabulosa cantidad de 960 mil toneladas. La abundancia imaginaria de cobre hará bajar su precio en unos 7 centavos de la libra, cuando la baja de un centavo implica para Chile una pérdida de 8 millones de dólares (3).

Esta historia comienza en octubre de 1970, con la llegada a Buenos Aires de un individuo portador de un pasaporte mexicano a nombre de Jesús Kado y Morillo y una carta de la empresa italiana *Ferrari* (después se sabrá que es falsa) designándolo como su representante para comprar 15 mil toneladas de cobre. El mexicano forma una sociedad con un uruguayo y cuatro argentinos. Uno de estos, Miguel Aspée, viaja a Chile y, a nombre de la sociedad, se asocia con Aldo Orezzoli. Este solicita 15 mil toneladas a la *Anaconda* y luego a El Teniente. Ambas responden que la producción de 1971 ya ha sido contratada.

Ofertas a la Enami y a Codelco

Se dirige entonces a la Empresa Nacional de Minería (Enami), revendedora del cobre producido por pequeños mineros, que dispone de esa cantidad. Jesús Kado viaja a Chile a concretar, acompañado por el uruguayo Miguel Sanz. Pero la Enami recela algo irregular y exige una carta de Ferrari y una garantía de 5%, unos 500 mil dólares.

Hacia el 20 de diciembre, Jesús Kado conoce en Santiago al comerciante Zvonimir Medovic Spada, un yugoslavo nacionalizado chileno. Cuatro días antes, el 16, este había enviado una carta a la Corporación del Cobre (Codelco), pidiendo la venta de dos partidas de 960 mil toneladas de cobre en un plazo de cuatro años. Cada una representa la producción chilena de un año y medio. El dolo es evidente, ya que Codelco no comercializa el cobre, aún en ma-

nos de las compañías estadounidenses. Pero el objetivo de su carta no es comprar cobre.

Jesús Kado percibe la posibilidad de un “*big deal*”. Retorna a Buenos Aires donde forma una nueva sociedad con Zvonimir Medovic y con los argentinos Santiago Fontanes, Eduardo Dehrs y José Valentín. Su objetivo: “la compra-venta de 960 mil o más toneladas de cobre *wirebars*” en Chile. Obtendrá beneficios aprovechando la diferencia entre la tonelada larga y la tonelada métrica y de baja del precio del cobre en el *London Metal Exchange*, donde se cotiza.

Enseguida el mexicano vuela a Suiza, con el acta de esta nueva sociedad y la carta de Medovic a Codelco pidiendo dos partidas de 960 mil toneladas, acompañado por Miguel Sanz. Sin duda para disponer de algo de cobre, intenta conseguir los 500 mil dólares, la garantía reclamada por la Enami. En Zúrich, un finlandés de apellido Ham le presta una parte y transfiere el dinero a sus gestores en Chile, Orezzoli y Dehrs. Pero la Enami exige el pago total en seis días, a partir del 6 de enero. Sin pago, no hay metal.

Días más tarde, el 1 de febrero, Jesús Kado se entera que la Enami licita 9 mil toneladas de cobre y se propone comprarlas. Consigue en Zurich financiamiento de *Internodia Finance* y en Chile sus gestores contratan a Nazem Keilani, considerado especialista, por una comisión de 63 mil dólares. Pero gana la empresa yugoslava BSE representada por el abogado Nicolás Babarovic (DC), antiguo socio del presidente de la DC, Narciso Irureta.

“Venta” de cobre imaginario

Sin disponer de un gramo de cobre, Jesús Kado inicia su *big deal*: el 24 de enero utiliza la carta de Medovic a Codelco para “vender” las 960 mil toneladas imaginarias a Internodia, que las “revende” a varias compañías europeas a un precio inferior al de Londres. Y comunica que dispone de cobre para vender los próximos 10 años...

Y luego, el 13 de febrero, Jesús Kado ofrece a las sociedades *Asimco* y *Vickers-Foster* 1,92 millón de toneladas a un precio inferior al de la City de 11 a 12 dólares por tonelada, lo que representa el doble de lo “vendido” a Internodia. Impresionada por la descomunal oferta, *Vickers-Foster* ofrece también el metal en Europa y propone un préstamo de 200 millones de dólares a Chile para “que salga la cosa”. Ante tal avalancha de ofertas el precio del metal rojo cae de 52 a 45 centavos de dólar la libra.

Mientras tanto, en Chile, Miguel Aspée y Nazem Keilani, que probablemente desconocen las andanzas de Jesús Kado en Suiza, reclaman el envío de los 500 mil dólares de garantía exigidos por la Enami. Hay un intercambio de notas, cuyo contenido los asusta.

Un télex del 2 de febrero del Banco Popular de Suiza, dirigido al Banco del Estado, dice que ha constituido una garantía de 493 mil dólares para la compra de 9 mil toneladas. Y pide que “Chile conceda monopolio mundial y exclusividad por la cantidad entera de 960 mil toneladas”, los próximos 10 años. Lo que alerta a las autoridades de Codelco que abren una investigación a cargo del fiscal Jaime Faivovich.

A mediados de febrero se presentan ante Allende el abogado Irrarázaval, acompañado por Nazem Kailani, quien le muestra copia de

este télex. Confirmada su veracidad, el Presidente envía una carta pública al ministro de Minería, Orlando Cantuarias, el 16 de febrero. Le pide una investigación a fondo: “Si por desgracia algún funcionario del gobierno está implicado, recibirá castigo implacable del Gobierno Popular” (4). El ministro responde que puede tratarse de una maniobra especulativa internacional contra los intereses de Chile.

A fines de febrero, el vicepresidente de Codelco, Max Norf, precisa en una conferencia de prensa que, en 1970, Chile produjo 116 mil toneladas de cobre menos de las programadas y anuncia el fin del contrato de venta con *Anaconda Sales* a partir del 2 de abril, ya que Codelco venderá directamente el metal chileno en los mercados. Lo que significa que quienes han estado ofreciendo cobre chileno en el extranjero carecen de representación.

Viaje y detenciones

En Suiza, el gerente de Internodia, Alfred Philip Koenig, contacta al financista estadounidense Howard Edwards para conseguir los 500 mil dólares. Se trata de un médico retirado del servicio de inteligencia de la *USAir Force* quien, en 1961, había participado en el desembarco de Bahía Cochinos, donde fue herido. Ambos viajan a Chile.

Son detenidos en el aeropuerto y llevados ante Jaime Faivovich, quien los interroga durante horas. Pese a sus respuestas confusas quedan en libertad, con orden de arraigo. El propio diario *La Prensa* afirma que Edwards es un sobornado profesional multimillonario, ha comerciado con prostíbulos, y en ocasiones se ha hecho pasar por sacerdote (5).

El 1 de marzo son detenidos los chilenos Zvonimir Medovic y Aldo Orezzoli Vinelli; el uruguayo Miguel Alberto Sanz; los argentinos Miguel Aspée y Eduardo Dehrs; el estadounidense Howard Edwards y el suizo Alfred Philip Koenig. El caso pasa a la Corte de Apelaciones que designa ministro sumariante a Abraham Meersohn (había dejado escapar a los autores de atentados dinamiteros en octubre 1970).

El principal estafador Jesús Kado y Morillo abandona su hotel en Zurich el 23 de febrero, sin pagar medio mes de hospedaje. Llega a Quito, donde revalida su pasaporte, luego se pierde su pista. Aunque no hay pruebas rotundas, es altamente probable que esté vinculado a la CIA, igual que el “financista” Howard Edwards.

El escándalo y las detenciones acarrear la anulación de las ofertas de Internodia y *Vickers-Foster*. El abundante cobre imaginario se evapora y su precio retorna a la normalidad: sube de 45 a 52 centavos de la libra.

Debate público

El Senado discute el *affaire* en presencia del ministro Cantuarias el 10 de marzo. El senador y presidente de la DC, Narciso Irureta, insinúa que esto puede ser “una cortina de humo”, “para desviar la atención del público y proteger a los verdaderos responsables”. Duda que el objetivo exclusivo de la oferta de Internodia sea “producir una baja artificial del precio” ya que el aumento de la producción de la Enami, que es actualmente de 60 mil toneladas anuales, permitiría adquirir 960 mil toneladas en 10 años; “están hablando de cosas posibles”, afirma Irureta. Añade que Zvonimir Medovic es un conocido de Allende y “las informaciones coinciden en señalar que en los dos casos tanto en la oferta de la Enami como en la de la Corporación del Cobre se habría ‘sugerido’ a los interesados aportar para la campaña electoral de abril una suma equivalente a dos dólares por tonelada”. Y denuncia que “ni el ministro de Mi-

nería ni los funcionarios de Codelco informaron al Presidente de la República” de la propuesta de Medovic ni de la de Internodia.

El senador DC Juan Hamilton añade, el 16 de marzo, que “ese complot se está realizando claramente en connivencia con funcionarios”; “todo esto tiene un precio: 7 dólares por tonelada; 63 mil dólares que deben depositarse en la cuenta de un tercero, hermano del señor Keilani, en Bruselas”. Los periódicos *La Prensa* y *La Tarde* atacan a Jaime Faivovich acusándolo de falta de ética con “los extranjeros” e insinúan implicaciones del ministro Cantuarias. El embajador Korry ve una oportunidad de perjudicar al gobierno: solicita a la CIA informaciones que refuercen la campaña del PDC de responsabilizar al gobierno, pero la Central no las proporciona (6).

En resumen, voces mayores de la DC niegan el complot y acusan a la UP de la estafa, sin pruebas. Así lo apunta el célebre periodista argentino Rodolfo Walsh en su crónica en *Panorama* de Buenos Aires: “es la DC y no la vieja derecha conservadora la que encabeza la ofensiva contra el gobierno”, concluye (7).

El Mercurio afirma, el 1 de marzo, que Keilani “había buscado conectarse con Allende” y, aunque el Presidente demostró su desvinculación personal con este *affaire*, el gobierno aparece perjudicado por “una lucha política entre los diversos partidos de la UP”, ya que el PC y el PS querían dejar mal parado al ministro Cantuarias (PR) y el Ejecutivo se negó a investigar un posible soborno (8). Un evidente intento de separar al PR de la UP.

Allende responde a Irureta “Se trata de una maniobra farisaica impropia de un senador y presidente de la Democracia Cristiana”. Cantuarias lo acusa de “poco varonil, irresponsable y mentiroso”.

La Cámara designa una comisión investigadora. Dos diputados DC, Héctor Valderrama y José Monares, van a entrevistar al detenido confeso Eduardo Dehrs. Este acusa al ministro Cantuarias de participar en el negocio y al fiscal de Codelco de intentar hacerlo caer. Lo que provoca bofetadas en la Comisión. Los detenidos serán liberados y no habrá funcionarios involucrados.

La estafa transatlántica consiguió bajar el precio del cobre sólo durante dos o tres semanas, ya que el gobierno logra desmantelarla a tiempo. El documental *La Espiral* de Armand Mattelart concluye que: “Es difícil imaginar que el envío de agentes de siete países, el pago de 63 mil dólares de coimas y de 200 mil de comisiones, la compra de 9 mil toneladas de cobre, esté al alcance de una pequeña empresa de Zurich”. La operación fue sin duda montada por una autoridad superior. ■

1. Punto Final, 22/6/1971

2. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v21/d197>

3. Informaciones tomadas del Suplemento de Punto Final del 30/3/01971, de Mario Díaz Barrientos, y de la sesión del Senado del 10/3/1971: www.bcn.cl/laborparlamentaria/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=589591

4. Puro Chile, 31/3/1971, in *Los mil días de Allende* (1997), 78-81

5. Allende, discurso el 14/3/1971, in *Textos de Salvador Allende* (1971), 113

6. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v21/d222>

7. *Panorama*, 23/3/1971; Rodolfo Walsh in <http://concretoazul.cl/chile-la-carrera-contra-el-reloj-electoral/>

8. Breve Historia de la Unidad Popular (1974), 44

*Historiador.

Este texto forma parte de una “Historia de la Unidad Popular” publicado por ediciones LOM en dos volúmenes.

Un país encorsetado por las “reformas” de los noventa

La calesita presidencial peruana

por Romain Migus*

“Voto cerrado”. Apenas pasada la medianoche del 16 de noviembre de 2020, el Congreso peruano cerró la votación parlamentaria con estrepitosos aplausos. Francisco Sagasti –de derecha– acababa de ser elegido por sus pares para asumir la presidencia de la República. El diputado reemplazó a Manuel Merino –también de derecha–, quien había llegado a la cabeza del ejecutivo la semana anterior, cuando su predecesor Martín Vizcarra –igualmente de derecha– había sido destituido en una operación orquestada por parlamentarios tan conservadores como él. Vizcarra había heredado la función suprema dos años antes, luego de que el último presidente elegido por el voto popular (en 2016), Pedro Pablo Kuczynski fuera obligado a renunciar por sus vínculos con un escándalo de sobornos. El banquero Kuczynski era tan poco de izquierda como sus predecesores, Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006).

Un año atrás, Chile, Colombia y Ecuador se veían sacudidos por enormes protestas populares que denunciaban las políticas económicas neoliberales (1). En ese entonces, el diario *Le Monde* celebraba la “excepción peruana”: “Mientras que, durante estos últimos meses, fuertes movilizaciones estallaron en los países de la región [...], los peruanos parecen manifestar cierta moderación ante la decadencia de su clase política” (2). El periódico francés, que proclamó la “caída de la Casa Morales” –en referencia al ex presidente boliviano Evo Morales, víctima de un golpe de Estado en 2019 (3)– dos semanas antes de la aplastante victoria de su partido en las presidenciales de octubre de 2020, no fue más lúcido respecto de la situación en Perú: en efecto, la población no dio muestras de ninguna “moderación” en las gigantescas manifestaciones que llevaron a la renuncia de Merino, el 15 de noviembre de 2020. Ahora bien, ¿qué efecto puede llegar a tener esta movilización, en un marco de debilidad institucional, inestabilidad política permanente y corrupción generalizada? Todos males cuyas raíces remontan a varias décadas atrás.

Un largo eclipse

Durante los años ochenta, Perú debió hacer frente a una serie de crisis estructurales. El país se hundió en el conflicto armado que enfrentó a los gobiernos sucesivos con las guerrillas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. La violencia dejó 69.280 muertos y desaparecidos (4) y una profunda marca en la sociedad. En paralelo, el modelo económico implementado en los años 1960 entró en crisis. La desindustrialización y la hiperinflación que se dispararon en 1988 exacerbaron el descontento popular. El desprestigio de la clase política llevó a que la población se alejara de las estructuras tradicionales (5). Esta crisis de representación se tradujo en la victoria de personajes recién llegados a la política –como Ricardo Belmont Cassinelli, ex periodista y director de prensa, alcalde de Lima entre 1990 y 1995–, quienes destronaron a los representantes de los partidos, incluso cuando no contaban con una base sólida. El rechazo a la política que se expresa hoy en día en las calles peruanas nació en este periodo, pero experimentó un largo eclipse que duró alrededor de diez años.

En efecto, el 10 de junio de 1990, un ingeniero de origen japonés venció al escritor conservador Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales (6). El nuevo jefe

de Estado, Alberto Fujimori, canalizó el rechazo popular a los dirigentes tradicionales a través de un discurso antisistema y logró despertar la esperanza de una salida a la crisis económica. Fujimori prometió construir un gobierno de “gente competente”, sin importar su partido de origen (7), con el objetivo de resolver el conflicto armado, al tiempo que tranquilizaba a los sectores dominantes, preocupados por el avance de las guerrillas. En los días posteriores a su elección, voló a Washington para encontrarse con Michel Camdessus, entonces presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Al volver a Lima, destruyó sus promesas de campaña y administró una violenta terapia de shock económico a un país conmocionado.

Pese a sus tentativas de construir un gobierno de unión nacional, Fujimori no tenía mayoría en el Congreso. Su movimiento, Cambio 90, solo contaba con 32 de los 180 diputados y 14 de los 62 senadores. El Parlamento frenaba sus proyectos de “reforma” y el Senado desarrolló una súbita preocupación por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra contrainsurreccional.

Autogolpe y corrupción

Con la ayuda del ejército, Fujimori orquestó un golpe. El 5 de abril de 1992, disolvió el Congreso, suspendió las garantías constitucionales y convocó a una Asamblea Constituyente. Este episodio, conocido como “autogolpe”, le permitió al “chino” imponer su hoja de ruta mediante una feroz represión. La nueva Carta Magna, aprobada en 1993, refundó la estructura económica de Perú: los artículos 58 y 59, en particular, ciñen el rol del Estado al de promotor del sector privado, en el marco de una “economía social de mercado”. Esta fórmula pertenece al economista alemán Alfred Müller-Armack, quien, en 1948 señalaba: “Su carácter social reside en el hecho de que puede proponer una masa diversificada de bienes de consumo a precios que el consumidor contribuye a determinar mediante la demanda” (8).

El Instituto Peruano de Economía, creado en 1994 con el apoyo financiero del Banco Mundial y de grandes grupos nacionales, garantizó la ósmosis entre la alta función pública y los intereses patronales. Este *think tank* liberal se convirtió en la antesala de la redacción de leyes y reformas. En las bambalinas del poder, el fujimorismo construyó un conglomerado público-privado que institucionalizó la promoción de los intereses de las elites económicas. La desaparición progresiva de la frontera entre la esfera pública y los intereses privados preparó el terreno para los repetidos escándalos de corrupción que aún sacuden al país.

La destitución de Fujimori y su fuga a Japón para escapar a la justicia en 2000 no pusieron fin al sistema que este había erigido. El fuerte crecimiento económico y el alza de los precios de los recursos naturales durante la primera década del siglo XXI enfriaron la voluntad de reforma de un sistema que resultaba muy provechoso para las clases dominantes, e hicieron olvidar, durante un tiempo, la amplitud de la desigualdad.

La crisis de representación, que tiene sus raíces en la década del ochenta, volvió a favorecer la elección de figuras independientes a la cabeza del ejecutivo. Aunque estas no tenían una base social ni implantación territorial similar a la de los partidos tradicionales,

accedieron al poder mediante alianzas electorales frágiles, que no les permitían obtener una mayoría parlamentaria, por lo que quedaron sometidas a los vuelcos de las alianzas para la aplicación de sus políticas. El resultado fue una inestabilidad permanente, agravada por la crisis institucional que provocó la revelación de las redes de corrupción vinculadas con el “modelo Fujimori”.

El 19 de junio de 2015, Marcelo Odebrecht, presidente de la joya industrial brasileña que lleva su nombre, fue arrestado y acusado de corrupción en Brasil (9). El caso cobró notoriedad internacional cuando la empresa negoció con la justicia de Estados Unidos para poner fin a los procedimientos judiciales en ese país. La procuradora general adjunta del Departamento de Justicia estadounidense, Sung-Hee Suh, reveló que, en Odebrecht, “había un departamento que funcionaba a escondidas, pero que era plenamente operacional, un ‘departamento de la corrupción’, que desviaba de forma sistemática cientos de millones de dólares a funcionarios corruptos en todo el mundo” (10). Se hicieron públicos miles de documentos que incriminaban a varias personalidades políticas latinoamericanas por hechos de corrupción, sobornos y blanqueo de dinero en la atribución de contratos públicos a Odebrecht.

El sistema peruano, en el que la connivencia entre lo público y lo privado favorece el mercantilismo, no pudo resistir esa onda expansiva. Entre 2017 y 2019, todos los presidentes de la era post-Fujimori fueron acusados de enriquecimiento ilícito. Tanto Toledo como Humala y Kuczynski tienen que responder ante la justicia por acusaciones de corrupción. El caso del expresidente García cobró un cariz trágico: cuando la policía acudió a su domicilio para detenerlo, tomó su Colt Anaconda y se suicidó.

Traumas de la guerra

En este escenario, emerge una pregunta: si la calle exige “que se vayan todos”, ¿cómo puede ser que la protesta social no haya encontrado una traducción en términos electorales? Varias razones explican esta situación.

Como señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación (11), Fujimori instrumentalizó el conflicto armado para desacreditar o perseguir a sus opositores, a quienes acusó de complicidad o apología del terrorismo. En una sociedad traumatizada por la guerra, ese estigma llevó a la izquierda “radical” a la marginalidad en la opinión pública, siempre y cuando sus representantes no fueran directamente encarcelados.

Al mismo tiempo, Fujimori consolidó el clientelismo de Estado a través del Ministerio de la Presidencia. Nutrida por el dinero de las privatizaciones, esa estructura se encargaba de repartir subsidios a las familias pobres sin pasar por los canales institucionales del Estado. Ese dispositivo le aseguró a Fujimori un importante apoyo de las clases populares.

El antropólogo Ramón Pajuelo señala otro factor. “El régimen político militar de Fujimori instauró una suerte de hegemonía cultural neoliberal. La gente dejó de pensar que la posibilidad de cambiar su situación dependía de la organización colectiva y de la representación política popular. La mirada optimista del futuro comenzó a asociarse con el esfuerzo individual, y el éxito se empezó a percibir como el resultado del espíritu de empresa individual”, nos explica este investigador del Instituto de Estudios Peruanos.

La construcción de ese “sentido común neoliberal” silenció el discurso de la izquierda tradicional. La candidata del Frente Amplio (coalición de izquierda) para las elecciones presidenciales de abril de 2016, Verónica Mendoza, sorprendió al obtener el 18,74% de los votos y quedar muy cerca de la segunda vuelta. Sus ideas van en el mismo sentido: “La izquierda abandonó el territorio y se refugió en las ONG [organizaciones no gubernamentales] o en las universidades. Renunció al principio que constituía su esencia: estar junto al pueblo, en los barrios populares, y acompañar sus luchas de manera concreta, en lo cotidiano. Es a partir de esa lucha que se puede articular un programa político nacional. Y no al revés” (12). En sintonía con el hartazgo general de la población, Mendoza, que representará a Juntos por el Perú en las presidenciales de abril de 2021, propone una segunda urna para preguntar a los peruanos si quieren cambiar la Constitución –como hicieron sus vecinos chilenos– y volver a barajar las cartas del sistema que llevó a Perú a una crisis permanente.

Esta idea comienza a abrirse paso en la sociedad. Incluso la están tomando en serio en los niveles más altos del Estado: el nuevo presidente Sagasti consideró necesario declarar que de ningún modo se pensaba cambiar la Constitución en este momento (13). Por su parte, el economista Hernando de Soto, portavoz histórico del neoliberalismo peruano, invitó a Mendoza a un debate público sobre el tema (14). Si la propuesta fuera tan incongruente, no hubiese suscitado en los seguidores del sistema un cierre de filas tan generalizado. Quizás la “excepción peruana” no sea tal... ■

1. Véase Renaud Lambert, “La droite latino-américaine dans l'impasse”, *Le Monde diplomatique*, París, marzo de 2020.

2. Amanda Chaparro, “Amérique latine : l'exception péruvienne”, *Le Monde*, París, 27-12-19.

3. Véase Anne-Dominique Correa, “Bolivie, chronique d'un fiasco médiatique”, *Le Monde diplomatique*, París, octubre de 2020.

4. “Informe final”, “Anexo 2”, Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, 28-8-03, www.cverdad.org.pe

5. Véase Michel Chossudovsky, “Pérou ‘ajusté’, Péruviens écrasés”, *Le Monde diplomatique*, París, octubre de 1991.

6. Véase Ignacio Ramonet, “Dos Vargas Llosa”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, noviembre de 2010.

7. José Comas, “Alberto Fujimori quiere renegociar con el FMI la deuda externa peruana”, *El País*, Madrid, 13-6-90.

8. Citado por François Denord, Rachel Knaebel y Pierre Rimbart en “La Biblia económica alemana”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, agosto de 2015.

9. Anne Vigna, “Corrupción sin fronteras”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, septiembre de 2017.

10. “Odebrecht and Braskem plead guilty and agree to pay at least \$3.5 billion in global penalties to resolve largest foreign bribery case in History”, comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Washington, DC, 21-12-16.

11. “Conclusiones generales del informe final de la CVR”, párrafo 103, Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, 2003.

12. “Verónica Mendoza: ‘Il faut ouvrir un débat politique avec la population, mais à partir de ses propres réalités et de son propre langage’”, Venezuela en Vivo, 21-10-16, www.romainmigus.info

13. Marco Aquino y Marcelo Rochabrún, “Presidente interino de Perú dice ‘no es el momento’ de plantear una nueva Constitución”, Reuters, 20-11-20.

14. Hernando de Soto, “#DebateConstitución - Verónica Mendoza y Hernando De Soto”, YouTube, 21-11-20.

*Periodista, fundador del sitio de información sobre América Latina Les Deux Rives (les2rives.info). Traducción: Georgina Fraser

Un sistema que les deja un importante margen de maniobra a los gobiernos locales

Estados desunidos de América

por Richard Keiser*

En noviembre de 2020, mientras una buena parte del mundo tenía los ojos puestos en la carrera a la presidencia entre Joseph Biden y Donald Trump, los estadounidenses, por su parte, sabían que las distintas elecciones (congreso, condados, referendos, etc.) que se desarrollaban al mismo tiempo en cada uno de los cincuenta estados de la federación para determinar la coloración del poder local tenían una importancia política igual de grande. Cuando las instituciones nacionales están divididas -es decir que la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia no están controladas por el mismo partido-, como es el caso desde hace varios años, la máquina legislativa federal se encuentra bloqueada: es difícil, si no imposible, adoptar leyes sobre temas que dividen a demócratas y republicanos. Los estados entonces llenan el vacío que deja Washington -al menos en las cuestiones que no atañen a la defensa o a la política exterior-.

En los estados de mayor vanguardia en materia de innovaciones legislativas, el gabinete del gobernador, la Cámara de Representantes y el Senado locales están generalmente del mismo lado -una situación conocida como "trifecta"- . En la actualidad, hay treinta y ocho: veintitrés de los republicanos y quince de los demócratas. Los doce restantes corren el riesgo, al igual que el poder federal, de atravesar una parálisis política. Este paisaje ofrece un contraste sorprendente con el del siglo pasado. En 1992, solo diecinueve miembros de la Unión se encontraban en situación de "trifecta". En los treinta y uno restantes, el gobernador tenía que enfrentar al menos una legislatura controlada por el bando contrario. Desde entonces, la polarización se acentuó considerablemente: tanto los demócratas como los republicanos se fortalecieron aun más allí donde ya dominaban, favoreciendo la parálisis a nivel federal.

Frente a la imposibilidad de hacer aprobar leyes en Washington, los partidos y quienes los apoyan movilizan su dinero y sus ideas a nivel local. Según la décima enmienda de la Constitución, todos los poderes que no están específicamente atribuidos al escalón federal recaen en los estados. Dado que estos últimos en teoría no pueden tomar medidas que infrinjan la legislación nacional, los textos que adoptan corren el riesgo de ser invalidados. Pero, en los hechos, gozan de un amplio margen de interpretación, sobre todo en cuestiones en las que el Congreso y la Casa Blanca no son del todo precisos. Muchos así se pronunciaron acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya sea para autorizarlo o para prohibirlo. Entre 2009 y 2015, unos quince estados (Iowa, Vermont, Maryland, Nueva Jersey...) decidieron legalizarlo, antes que la Corte Suprema decidiera hacer lo mismo para todo el país (fallo *Obergefell v. Hodges*, del 26 de junio de 2015).

Aborto y cambio climático

Desde hace unos cincuenta años, el poder federal también fracasó en la legislación del uso del cannabis. No se resolvió acerca de temas que pudieron emerger a partir de la ley de 1970 (Controlled Substance Act), como el cannabis medicinal, que California, seguida al poco tiempo por otros (Oregón, Alaska, Nevada, Florida...), decidió autorizar a partir de 1996 (proposición 215) -una disposición vigente hoy en día en treinta y seis de los cincuenta estados estadounidenses-. Desde 2012, otros quince autorizaron el uso recreativo de esta sustancia, que sin embargo sigue siendo técnicamente ilegal por el bloqueo de Washington (1).



Adriana Asenjo, de la serie Maniquí (xilografía)

Otro expediente: el aborto. Después de ser legalizado por la Corte Suprema en 1973 (fallo *Roe v. Wade*), el debate se desplazó hacia temas conectados y no resueltos a nivel federal, como la utilización de fondos públicos. Unos diez gobiernos republicanos (Luisiana, Utah, Arkansas...) prohíben hoy en día el financiamiento público de Family Planning (Planificación Familiar), el primer prestador de servicios de salud reproductiva -anticonceptivos, interrupción voluntaria del embarazo y prevención de la infertilidad- para personas sin seguro médico (2). A la inversa, siete estados sólidamente demócratas autorizan el financiamiento de abortos a través de Medicaid (la ayuda federal destinada a los más pobres). Una medida que otros nueve estados tuvieron que resolver mediante la decisión de los tribunales (3).

Por otra parte, mientras Washington arrastra los pies en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, catorce legislaturas de estado se armaron con leyes para limitar las emisiones de gas con efecto invernadero, sobrepasando los objetivos fijados por el gobierno federal. Y, mientras que las tentativas republicanas para debilitar a los sindicatos han sido regularmente frenadas por los demócratas en Washington, seis miembros de la Unión adoptaron desde el año 2000 textos que les facilitan a las empresas herramientas eficaces para dificultar las tentativas de organización de los trabajadores.

¿Tenemos que considerar estas instancias de poder, a nivel estatal, como la expresión de la democracia? A la luz de la incapacidad de Washington para votar un presupuesto, nos veríamos tentados de responder de manera afirmativa. Pero el margen de maniobra que se les deja a los cincuenta miembros de la Federación contribuye en cambio a silenciar las voces disidentes y a debilitar la representa-

ción democrática. En efecto, las instituciones en manos de los republicanos ignoran ampliamente a los habitantes de las grandes ciudades. Estos, menos religiosos, más educados y más a favor de la diversidad que sus homólogos de las zonas rurales (sea cual sea el partido al poder en su estado), depositan entonces sus esperanzas en los consejos municipales, habilitados para actuar en temas como el salario mínimo, la defensa de los inmigrantes, la lucha contra el racismo, la protección del medioambiente, etc. Pero si el gobierno de un estado está en desacuerdo con una ley adoptada por una ciudad, puede votar otra, que la anula: a eso se lo conoce como el "derecho preferente".

Ciudad santuario

Hoy en día hay centenares de leyes municipales abrogadas por legislaturas republicanas. Mucho más raras, en cambio, son las ciudades conservadoras censuradas porque habían elegido impedir la contratación de indocumentados, prohibir la residencia de ex delincuentes sexuales o prohibir de manera local el uso medicinal de marihuana.

En 2017, Arkansas le aplicó el "derecho preferente" a una medida adoptada por Fayetteville para impedir la discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer (LGBTQ). Carolina del Norte y Texas por su parte anularon leyes votadas por Charlotte y Houston para obligar a las empresas a que tuvieran baños no discriminatorios para las personas transgénero (4). Texas también les apuntó a los dispositivos de ayuda para extranjeros sin documentos puestos en práctica por los municipios de Austin, Dallas, San Antonio y Houston, exigiéndoles incluso a las policías municipales que ayuden a las aduanas y a la policía de la inmigración a hacer aplicar las disposiciones federales (5). Al igual que Georgia en 2010 o la Florida en 2019, nueve estados

decidieron prohibir el estatuto de "ciudad santuario" adoptado por algunas municipalidades para proteger a los inmigrantes clandestinos contra los arrestos y las expulsiones. Ocho miembros de la Unión, de los cuales siete controlados por los republicanos, también anularon medidas que apuntaban a limitar el uso de bolsas de plástico. Desde 2016, Alabama les prohíbe a las ciudades fijar en el territorio un salario mínimo que exceda el monto vigente fijado por las autoridades de Montgomery, la capital (7,25 dólares por hora) -una respuesta al consejo municipal de Birmingham, que había decidido llevarlo a 10,10 dólares-. Alabama se cuenta así entre los veinticuatro estados (de los cuales veintidós dirigidos por republicanos) que prohíben cualquier aumento local del salario mínimo (6).

Lobbys activos

Esa clase de derechos preferentes pueden también golpear las tentativas de enmarcar la portación de armas, aumentar los impuestos, reglamentar las plataformas digitales Uber y Airbnb, forzar a los empleadores a otorgar licencias por enfermedad y licencias parentales, o incluso regular el ancho de banda digital y la televisión por cable (7). Más recientemente algunos estados redujeron a la nada medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus Sars-CoV-2, particularmente el cierre de comercios no esenciales, como los salones de manicura y las armerías, o lugares como los campos de golf y las playas (8). Los lobbys patronales se muestran muy activos a nivel estatal. Es el caso, en particular, del American Legislative Exchange Council (ALEC). Esta organización sin fines de lucro agrupa a políticos conservadores y representantes del sector privado que redactan directamente proyectos de ley y se los proponen a los gobiernos locales.

La multiplicación de derechos preferentes, en particular en los estados republicanos que cuentan con ciudades grandes, derribó el mito estadounidense de la autonomía local, un valor profundamente anclado en la historia y el imaginario nacionales. Desde entonces, estos grandes centros urbanos desearios de conservar un margen de autonomía no tienen más que esperar que el gobierno federal intervenga para protegerlos. ■

1. "Marijuana legalization and regulation", The Drug Policy Alliance, Drugpolicy.org
2. Leah Jessen, "A 10th State defunded planned parenthood. Why there's so much momentum now", *The Daily Signal*, 23-2-16, www.dailysignal.com
3. "Medicaid funding of abortion", Guttmacher Institute, enero de 2020, www.guttmacher.org
4. Ben Kessler, "Gay-friendly towns in red states draw LGBTQ tourists: 'We're here to be normal for a weekend'", *NBC News*, 26-4-19, nbcnews.com; Manny Fernandez y Dave Montgomery, "Texas moves to limit transgender bathroom access", *The New York Times*, 5-1-17.
5. Maggie Astor, "Texas' ban on 'sanctuary cities' can begin, appeals court rules", *The New York Times*, 13-3-18.
6. Kim Chandler, "Appeal filed in lawsuit over Alabama minimum wage law", *The Montgomery Advertiser*, 3-3-17.
7. Henry Grabar, "The shackling of the American city", *Slate*, 9-9-16, www.slate.com; Nicole DuPuis et al., "City rights in an era of preemption: a state-by-state analysis", *National League of Cities*, 2018, www.nlc.org
8. Alan Greenblatt, "Will state preemption leave cities more vulnerable?", *Governing*, 3-4-20, www.governing.com

*Profesor de Estudios Estadounidenses y de Ciencias Políticas en el Carleton College (Northfield, Minnesota).

Traducción: Aldo Giacometti

La revolución tiene 10 años

En Túnez, persisten las brasas del espíritu de revuelta

por Olfa Lamloum*

Noviembre de 2020. A un mes del 10º aniversario del estallido de la revolución tunecina, que provocó la caída del régimen de Zine El Abidine Ben Ali, el 14 de enero de 2011, el descontento popular que se venía expresando hace ya varios meses se amplifica. En Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Jendouba, Gabes y otras localidades de esas gobernaciones olvidadas por el poder y duramente golpeadas por la inédita recesión económica debida a la pandemia de Covid-19, las movilizaciones se propagan. Precarizados y excluidos protestan, cortan rutas, implementan coordinaciones. En todas partes, reclaman empleos y desarrollo, y exigen la apertura de negociaciones con representantes del gobierno central, para presentar sus males y sus propuestas. Al cabo de una década, la constatación es inapelable: quienes reemplazaron al dictador derrocado traicionaron la promesa de dignidad que la revolución encarnó. Las autoridades la rebautizaron incluso como “transición democrática”, una forma sutil de negar toda legitimidad política a aquellos que lideraron la protesta.

Esa “transición” está en crisis. Sus conquistas, particularmente en materia de libertades individuales y derecho a la expresión, están cada vez más amenazadas. Desde 2018, unos cuarenta blogueros y usuarios de la red Facebook fueron procesados por la justicia (1). El Ministerio del Interior, blanco de recurrentes críticas, advirtió en octubre de 2019 que iniciaría acciones judiciales “contra todas las personas que intencionalmente ofendieron, pusieron en duda o acusaron falsamente a sus servicios”. Al mismo tiempo, cuando se creía que la revolución renovaría a las elites en el poder, se está produciendo un retorno de las figuras del antiguo régimen, seguras de su impunidad.

Las intrigas de los partidos mayoritarios y la omnipresencia del dinero privado –a veces oculto, o proveniente del exterior– en el financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales, pervirtieron el juego político competitivo que consagró la nueva Constitución, adoptada en 2014 (2).

Persisten desigualdades

La efervescencia contestataria actual no hace más que evidenciar la naturaleza estructural –o “de hegemonía”, para retomar la expresión de Antonio Gramsci (3)– de la crisis que atraviesa el país. Como en el gobierno Ben Ali, el nuevo poder, acoplado a la alianza entre islamistas y el antiguo régimen, se muestra incapaz de reducir las desigualdades territoriales (4). Desde 2011, la aplicación de políticas de austeridad (congelación de la contratación en la función pública, reducción de subsidios...) y el avance, así sea mínimo, en las “grandes reformas económicas” (privatizaciones, independencia del Banco Central, apertura del mercado...) no hicieron otra cosa que despojar aun más al Estado de su poder de regulación social. A ello se añade el mantenimiento de un régimen fiscal muy inequitativo, que grava sobre todo los bajos ingresos, en un país donde el 10% de los más ricos tienen el 40% del ingreso nacional y donde la evasión fiscal es muy elevada (5). El reverso de esta política



Benito Rojo, Sedimentos en rojo (óleo y tinta sobre papel), 2010-2011 (Gentileza Galería A. M. Stagno)

fue el sobreendeudamiento y el aumento de la dependencia de las instituciones financieras internacionales. La deuda exterior asciende al 75% del Producto Interno Bruto (PIB), y podría alcanzar el 90% en 2021, debiendo Túnez multiplicar sus peticiones a los acreedores, para hacer frente a múltiples vencimientos de pago. Durante el primer mandato parlamentario (noviembre 2014 – agosto 2019), el 43% de las leyes aprobadas por los diputados trataron sobre acuerdos de préstamos del exterior destinados en parte a pagar la deuda contraída por el régimen de Ben Ali. Y según la Instancia de justicia transicional de la Verdad y la Dignidad (IVD), entre 2011 y 2016, más del 80% de esos préstamos se utilizaron para pagar la deuda (6).

Durante diez años, mientras los once gobiernos sucesivos reivindicaron ritualmente el “desarrollo regional” como prioridad nacional, las disparidades entre ciudades costeras y ciudades interiores, en términos de acceso a los recursos y servicios públicos se agravaron. El Centro-Oeste, que agrupa a las gobernaciones (departamentos) de Sidi Bouzid, Kasserine (las dos cunas de la revolución) y Kairuán, sigue expresando los índices de pobreza más altos del país (29,3% en promedio, contra 6,1% en Túnez) (7). Kasserine, que tiene el récord trágico del mayor número de “mártires” de la revolución, sigue albergando

a las tres delegaciones (distritos administrativos) más desfavorecidas, con un índice de pobreza del 50%. Entre 2016 y 2020, se concretaron apenas la mitad de los pocos proyectos concedidos a las regiones del interior, para compensar su retraso de desarrollo. Peor aun, diez años después de la revolución “de la juventud”, el desempleo de los jóvenes sigue siendo estructural y masivo. En la ciudad de Kasserine, este afecta a más del 43% de la franja entre 18 y 34 años (8). Agravado por la pandemia de Covid-19, actualmente golpea al 35,7% de la franja entre 15 y 24 años (9). Por su parte, el índice de inactividad de los egresados de la universidad se mantiene por encima del 30%, confirmando dramáticamente el “disfuncionamiento” de la instrucción como elevador social. En un país que largamente alabó la democratización de su sistema educativo, el sector informal emplea actualmente al 53% de la población activa.

La constatación es clara: desde 2011, la política social de los sucesivos gobiernos no se diferenció mucho de la de Ben Ali. Desplegada con opacidad, en una lógica preventiva de mantenimiento del orden dentro de los límites urbanos y rurales, se redujo a dispositivos de asistencia y empleos precarios. Su consecuencia política tangible fue la reactivación de los lazos de dependencia clientelistas con las “poblaciones vulnerables”, en provecho del

partido islamista Ennahda y de antiguas redes de la Agrupación Constitucional Democrática (RCD), partido de Ben Ali, disuelto en 2011.

Impunidad a corruptos

No sorprende que el impasse en cuestiones sociales haya favorecido la reactivación de la gestión securitaria de las clases populares y, especialmente, de la juventud: en 2019, en Kasserine, Tataouine y Douar Hicher –tres ciudades geográficamente distantes, que solo tienen en común su relegación–, al menos uno de cada cinco jóvenes declaró haber sido arrestado o encarcelado (10). Desde 2013, el “restablecimiento del orden” y las redes de seguridad se reforzaron, frente a las dos formas de radicalización juvenil que se manifestaban en los barrios populares y las regiones del interior: el salafismo, principalmente encarnado por el partido Ansar al Sharia, clasificado en agosto de ese mismo año como organización terrorista, y la protesta social. Poderosos sindicatos policiales, legalizados bajo el gobierno provisorio de Béji Caïd Essebsi (febrero a diciembre de 2011), exigieron entonces una ley –elaborada en 2015– que penaliza los ataques a las fuerzas del orden. Su campo de acción debe ser suficientemente amplio para permitir procesar judicialmente a organizaciones de la sociedad civil que critiquen las violencias y arbitrariedades poli-

ciales. En octubre de 2020, tras una gran movilización popular, el Parlamento aplazó una vez más el tratamiento de ese texto. El móvil es claramente político: se trata de deslegitimar la exigencia de reforma de los servicios de seguridad, y más ampliamente del Ministerio del Interior, principal agente del régimen autoritario de Ben Ali. La estabilidad del país y la seguridad de sus fronteras se convierten en palabras clave. El presupuesto del Ministerio del Interior se incrementa (+7,4% en 2019, +4,8% en 2020), mientras el sector de la Defensa recibe un volumen creciente de asistencia militar extranjera en materia de lucha contra el terrorismo y contra-insurgente (11).

Creada por una ley en diciembre de 2013, la IVD se instaló recién en junio de 2014. Su misión fue obstaculizada por los recurrentes ataques de las redes del antiguo régimen, y luego por la adopción, en 2017, de una ley de amnistía financiera favorable a los funcionarios corruptos de la era Ben Ali, para ser posteriormente abandonada por la dirección de Ennahda. En octubre de 2020, Rachid Ghannouchi, presidente de la Asamblea de representantes del pueblo y hombre fuerte del partido islamista, llegó a tomar como consejero a cargo de la cuestión de la justicia de transición y la reconciliación nacional a Mohamed Ghariani, último secretario general del RCD antes de su disolución. Un cacique, cuya responsabilidad penal en la sangrienta represión de la insurrección de enero de 2011 quedó sin embargo comprobada por la IVD.

Revolución aislada

A decir verdad, desde 2013, todas estas evoluciones parecían cada vez más ineluctables, en la medida en que las nuevas relaciones de fuerza políticas permitieron una transición pactada, sellada por la reconciliación entre Ennahda y Nidaa Tounes, un partido creado en 2012 por Essebsi, ex ministro del Interior de Habib Burguiba, para federar a los ex integrantes del RCD y figuras del movimiento democrático contrarias a los islamistas.

Este giro, consagrado por el resultado de las elecciones legislativas y presidencial de 2014, es resultado de la concordancia de dos hechos cargados de consecuencias. En primer lugar, la derrota, desde 2013, de los sublevamientos en Egipto, Yemen, Siria y Bahrein, que aisló a la revolución tunecina y exacerbó las estrategias de tensión implementadas con la excusa de contener el peligro islamista. Horrorizado por la evicción sangrienta de los Hermanos Musulmanes en Egipto, en la estela del golpe de Estado del general Abdel Fattah al-Sissi en 2013, temiendo ser blanco de acusaciones luego de los asesinatos de dos dirigentes de izquierda, Ennahda decidió negociar su participación en el poder a cambio del abandono de toda aspiración de ruptura con el antiguo sistema. Y de absolver a sus representantes más comprometidos.

El segundo hecho importante tiene que ver con los límites de las movilizaciones sociales. Por más que estas se hayan impuesto, desde la caída de Ben Ali, como la principal forma de participación política de las clases populares y la juventud marginada, estas siguen fragmentadas, desorganizadas, sin un horizonte común y sobre todo, sin un correlato político capaz de actuar sobre la relación de fuerzas establecidas. Ciertamente, la represión de que son objeto desde 2011 y el escaso apoyo recibido de la directiva de la central sindical –la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT)–, explican en parte esas limitaciones. Pero por otro lado, deben subrayarse las múltiples restricciones inherentes a la movilización popular, en un contexto de precariedad y desempleo masivo. La desintegración del vínculo salarial y la filiación sindical en los márgenes relegados dieron preponderancia al anclaje local, en la afirmación de la identidad social de las movilizaciones. Por eso, e inversamente a la dinámica que existía al principio de la revolución, estas redujeron su visibilidad nacional y su capacidad de establecer alianzas amplias.

Resistir la represión

¿Qué queda hoy, entonces, de la revolución? Sin duda, un impulso de resistencia, que la intensificación de la protesta de noviembre de 2020 vino a avivar, así como la lucha victoriosa de El Kamour, pequeña localidad cercana a una zona desértica bajo control militar, que alberga los más importantes yacimientos de petróleo del país (12). Esa larga y pacífica sentada que, a partir de 2017, movilizó a miles de jóvenes que exigían empleos y desarrollo se volvió emblemática, por varias razones. Primero, planteó legítima y frontalmente la cuestión de la distribución de la riqueza. Segundo, su sólido anclaje en las solidaridades locales le permitió resistir a la represión y desbaratar las tentativas del poder de presentarla como delictiva. Por último, logró desarrollar formas de auto-organización democráticas y autónomas que la protegieron de las apropiaciones partidarias. Luego de ciento diecisiete días de interrupción de la producción petrolera, el gobierno firmó un acuerdo que respondió favorablemente a la mayor parte de las reivindicaciones de los manifestantes.

Es decir que la exigencia de dignidad y justicia conservó todo su potencial movilizador, lo cual vuelve incierto el dudoso desenlace de la crisis estructural que hoy vive el país. Ennahda, que mostró ser perfectamente soluble en el neoliberalismo, perdió parte de su base social, sin lograr convencer a las franjas dominantes de la burguesía. Kaïs Saïed, el presidente de la República, quien quería aparecer como el “benefactor patriarcal” de los pobres sin tener un proyecto organizacional o político, no tuvo más opción que apoyarse en la burocracia o el ejército. La UGTT, contrapeso relativo de las políticas neoliberales, quedó debilitada por las maniobras de su directiva burocrática, decidida a prolongar su mandato. La izquierda, por su parte, se desgastó en los conflictos de ambiciones de sus dirigentes, luego de haber recuperado sus reflejos erradicadores y aportado su apoyo a Essebsi contra el “islamismo oscurantista”. ■

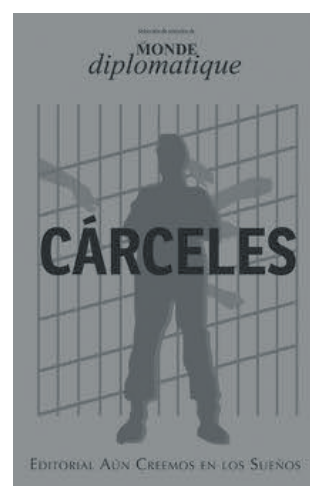
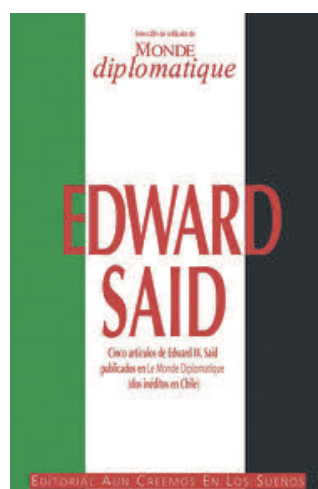
Notas:

1. Véase particularmente “Túnez. Peligra la libertad de expresión a medida que aumentan los procesamientos”, Amnesty International, 9-11-20, www.amnesty.org
2. Véase el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el control del financiamiento de los partidos políticos y de las elecciones presidencial anticipada y legislativas de 2019 que da cuenta de la magnitud del fenómeno.
3. En los *Cuadernos de la cárcel*, Antonio Gramsci define una “crisis de hegemonía” o una “crisis del Estado en su conjunto” como la extensión de una tensión inicial a todas las esferas sociales: la política, la cultura, la moral e incluso la esfera íntima.
4. Véase Thierry Brésillon, “Une Tunisie contre l'autre”, *Le Monde diplomatique*, París, noviembre de 2018.
5. “La justice fiscale en Tunisie: un vaccin contre l'austérité”, Oxfam, 17-6-2020.
6. “Mémorandum relatif à la réparation due aux victimes tunisiennes des violations massives de droits de l'Homme et des droits économiques et sociaux dont l'État français porte une part de responsabilité”, Instancia Verdad y Dignidad, Túnez, 16-7-19.
7. “Carte de la pauvreté en Tunisie”, Instituto Nacional de Estadística, Túnez, septiembre de 2020, www.ins.tn
8. “Des jeunes dans les marges. Perceptions des risques, du politique et de la religion à Tataouine Nord, Kasserine Nord et Douar Hicher”, International Alert, noviembre de 2020.
9. “Indicateurs de l'emploi et du chômage, troisième trimestre 2020”, Instituto Nacional de Estadística, www.ins.tn
10. “Des jeunes dans les marges”, *op. cit.*
11. Hijab Shah y Melissa Dalton, “The evolution of Tunisia's military and the role of foreign security sector assistance”, Carnegie Middle East Center, 29-4-20, <https://carnegie-mec.org>
12. Sabine Hamouda, “Tunisie: sur les pas d'Al-Kamour, des protestataires stoppent la production au groupe chimique de Gabes”, *Tunisie numérique*, 13-11-20, www.tunisienumerique.com

*Directora de la oficina de la organización no gubernamental International Alert, Túnez. Directora, junto a Michel Tabet, del documental *Voices from Kasserine*, 2017.

Traducción: Patricia Minarrieta

Libros impresos (\$3.950) y digitales (\$2.950)



Bomba librecambista en Asia

El mayor acuerdo comercial del mundo

por Martine Bulard*

Se dice que está dividida, que es débil, ineficaz e incluso inexistente. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla en inglés) forma parte de esas organizaciones regionales que parecen estar fuera de los radares diplomáticos, aun cuando reúne a diez países (Birmania, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) y 652 millones de personas. De hecho, su 37ª Cumbre se inauguró el pasado 12 de noviembre en Hanoi en medio de la indiferencia. Sin embargo, tres días después, culminó con un golpe de efecto: la firma de un acuerdo de libre comercio, la Asociación Económica Integral Regional (o RCEP, por su sigla en inglés: Regional Comprehensive Economic Partnership), con Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda.

En una época en que la relocalización de la producción, el “consumo local” y la protección de los mercados deberían servir de base para un nuevo modelo de desarrollo, los principales países de Asia (excluyendo a India, que se retiró de las negociaciones por temor a la competencia de sus vecinos) siguen apostando a la extensión de la esfera de la globalización. “Una victoria del multilateralismo y el libre comercio”, se congratuló el primer ministro chino, el comunista Li Keqiang, mientras que, haciéndose eco, su homólogo japonés, el liberal Suga Yoshihide, celebraba ese “día histórico, después de ocho años de negociaciones”, y llamaba a implementar el acuerdo “lo antes posible” (1). ¡Librecambistas de todo el mundo, unámonos!

Con el 30% de las riquezas producidas en el planeta, el 28% del comercio mundial y 2.200 millones de individuos, el RCEP es el mayor acuerdo de este tipo que jamás se haya firmado. ¡Y sin Washington! Ver a China reinando con majestuosidad en este Sudeste Asiático antaño tan hostil supone un singular giro de la historia.

La ASEAN, en efecto, fue fundada en 1967, en plena Guerra Fría, con el objetivo explícito de contener el comunismo. En ese entonces, un núcleo de “países seguros”, que a menudo perseguían a los “rojos” (o presuntos “rojos”) en su propio territorio (2), y de aliados firmes de Estados Unidos, integrado por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, se reunió para contener el “mal”. Pero, con el tiempo y la caída de la Unión Soviética, las disputas ideológicas desaparecieron. La crisis asiática de 1997-1998, que destruyó la región mientras que la economía china levantaba vuelo, se encargó del resto: los enemigos de otros tiempos negociaron y la ASEAN se consolidó. Luego, se amplió con la creación de la llamada ASEAN+3, que incorporó a los tres gigantes asiáticos (China, Corea del Sur y Japón), así como a una serie de organizaciones de geometría variable, como el Foro Regional de la ASEAN, que cuenta con 27 miembros (entre ellos los de la ASEAN+3, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, India y la Unión Europea), y la Reunión ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (Asean Defense Ministers Meeting Plus), que reúne a 18 países (los de la ASEAN+3, Australia, Estados Unidos, India, Nueva Zelanda y Rusia).

De manera sigilosa, la ASEAN tejió así una enorme red diplomática que, aunque no logró resolverlos, probablemente impidió que los conflictos territoriales en el Mar de China escalaran. En 2018, esbozó con Pekín un código de conducta (CoC) que sirviera de base para las negociaciones entre todos aquellos que reivindican la soberanía de las islas Paracelso

y Spratley: China, que no da tregua, reclama ambas; Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei e Indonesia son menos exigentes, pero, aun así, las reivindicaciones nacionales se entrecruzan (3). Dos años después, el CoC está en punto muerto, los incidentes proliferan y los rencores se acumulan.

Sin productos agrícolas

No obstante, estas tensiones no impidieron la firma del RCEP, que reúne en un mismo texto a la segunda y tercera potencias económicas del mundo: China y Japón. Este contrato de 521 páginas (en inglés), 20 capítulos, 17 anexos y un calendario de acceso a los mercados nacionales tiene por objetivo “eliminar los aranceles y las cuotas sobre las mercancías”, como indica el sitio de la ASEAN. También cubre determinados obstáculos no arancelarios (relativos a las normas), una parte del comercio de servicios, el comercio electrónico y cuestiones de propiedad intelectual, pero deja de lado la mayor parte de los productos agrícolas.

A decir verdad, las reglas parecen poco restrictivas: un bien fabricado con materias originarias de uno de los quince países firmantes será admitido automáticamente en los demás. Esto, por cierto, tendrá consecuencias para la Unión Europea, que firmó acuerdos de libre comercio con varios de los países que forman parte del RCEP (Vietnam, Corea del Sur, Japón). Como será más difícil, por no decir imposible, rastrear el origen de los productos, estos podrán, por ende, acceder al tratamiento especial europeo.

El RCEP no incluye ningún criterio medioambiental, sanitario o social. No obstante, los acuerdos auspiciados por Estados Unidos o la UE, a pesar de sus elegantes palabras, no son mucho mejores al respecto (si se exceptúan las cláusulas sociales, como el salario mínimo o el derecho a huelga, introducidas en 2018 en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) (4). En cambio, el RCEP no contiene ninguna cláusula que le de poder a las multinacionales para arremeter contra los Estados en caso de que les disguste alguna medida. De este modo, no se le atribuye ninguna función al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ese tribunal especial que está por encima de las leyes nacionales (5).

En general, la firma de un acuerdo de libre comercio da lugar a un exceso de promesas (que nunca se cumplen) sobre el crecimiento, el empleo o el comercio. Esta vez, incluso los expertos en economía más liberales se muestran prudentes y prevén, como mucho, una recuperación del crecimiento de entre el 0,2% y el 0,4% en promedio. De hecho, la mayoría de los países interesados ya tienen acuerdos bilaterales de libre comercio, curiosamente con los tres gigantes, y, además, las zonas económicas especiales (exentas de impuestos) abundan en la región: existen unas 700 en el Sudeste Asiático y más de 2.500 en China (6).

Aunque oficialmente el RCEP está destinado a promover la “integración económica asiática”, los cambios esperados son limitados y no serán idénticos ni rentables para todos.

La ASEAN sigue siendo un conjunto heteróclito de países con niveles de riquezas muy diferentes. A la cabeza de la lista, Singapur, con un ingreso per cápita por habitante de 64.567 dólares, deja muy atrás a Birmania y sus 1.440 dólares (7). En Brunei, el 78% de la población vive en ciudades, mientras que en Camboya esa cifra se reduce a un 23%. Sus necesidades y capacidades de recuperación no son del mismo orden. Por su parte, las multinacionales de la región y del resto del mundo que estén en la búsqueda de nuevos países con salarios bajos se van a hacer un festín. Vietnam ya está beneficiándose de la relocalización de fábricas que solían estar situadas en territorio chino. Tokio adoptó un plan de separación de China para ayudar a los grupos nipones a trasladarse a la isla o a invertir en Vietnam, Birmania o Tailandia (8). Japón, cuya economía figura entre las más extrovertidas, es el principal proveedor de fondos de Asia: es responsable del 13,7% de las inversiones extranjeras directas (IED) que entran en la ASEAN, mientras que China lo es del 7%. El RCEP debería conducir a una redistribución de las cartas dentro de la zona, pero definitivamente no a un cambio radical.

Dimensiones estratégicas

El interés fundamental de este acuerdo está en sus dimensiones estratégicas, ya que consagra la centralidad geopolítica de China. El RCEP fue lanzado originalmente por Pekín en respuesta al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), concebido por Barack Obama cuando era pre-



Raisa Bosich, Serie Despliegue y otras maneras de constituir un espacio, 2014 (Gentileza Galería NAC)

sidente de Estados Unidos para frenar el ascenso chino (y luego abandonado por Donald Trump), pero estuvo estancado durante ocho años. Finalmente, la “diplomacia de cooperación” de la ASEAN, según la expresión consagrada, y la voluntad china de alcanzar el acuerdo llevaron a su firma.

No cabe duda de que se trata de un “acuerdo comercial de bajo nivel”, como reconoce el ex diplomático singapurense y profesor de políticas públicas, Kishore Mahbubani (9). Sin embargo, según él, no deja de marcar un “punto de inflexión en la historia del mundo, que sería un error subestimar”. Hasta el presente, dice, “había al menos tres configuraciones posibles de cooperación en Asia: el Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico y el Asia Oriental. El RCEP muestra que la configuración dominante será la del Asia Oriental. El Asia-Pacífico, impulsada por Estados Unidos, primero en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y luego en el marco del TPP, fue aniquilada por Trump. En cuanto al Indo-Pacífico, está suspendida, ya que India se retiró”.

De abajo hacia arriba

La salida de India y Estados Unidos de estos acuerdos no es más que temporal, por lo que China no estará sola por mucho tiempo. Pero no quedará aislada, que era lo que le preocupaba sobremedida. “El RCEP [le] asegura la extensión de su poder económico”, explica el economista y politólogo estadounidense David P. Goldman, quien hace hincapié en que la capacidad de China “para atraer a los países del Sur con su modelo económico, a través de la tecnología y la organización comercial, no guarda relación con la exportación de su modelo político. Por el contrario, la fuerza del enfoque chino del mundo radica en que bus-

ca transformar la economía por capilaridad, de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo” (10).

Los países occidentales juegan más bien la carta política y militar. Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos relanzó el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (también conocido como QUAD), que reúne a Japón, India, Australia y Estados Unidos con el objetivo claro y expreso de formar una coalición antichina; restableció vínculos militares más estrechos con Filipinas e Indonesia, cuyo ministro de Defensa recibió con bombos y platillos a su homólogo estadounidense (11), y también se acercó a Vietnam y Taiwán... Todo esto acompañado de ventas de armas a un ritmo sostenido y una “profusión de muestras de fuerza estadounidenses y chinas en el Mar de China” (12). Con todos los riesgos que ello implica en términos de errores y malentendidos que podrían conducir a lo peor.

Doble chantaje

Así, la confrontación toma la forma de un doble chantaje: mientras que uno dice que no proporcionará protección de seguridad si no se muestra lealtad a Washington, el otro advierte que no habrá (o más bien, que habrá menos) intercambios económicos si no se aceptan las reglas chinas. Cada país participante es conminado a elegir un bando o, en todo caso, a no elegir el bando contrario. A Australia, que se alineó abiertamente con Estados Unidos para reclamar una comisión de investigación sobre el origen del Covid-19 y rechazar los acuerdos con Huawei sobre el 5G, Pekín le envió una lista de “catorce agravios” con esta advertencia: “Si hacen de China un enemigo, China será su enemigo” (13). Razón por la cual los vinos fueron fuertemente

gravados, seguidos por el carbón, la carne, la cebada... Las diferencias se resolverán en la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero mientras tanto los productores australianos ya sufren las consecuencias.

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos asiáticos rechazan este discurso de las grandes potencias. Mahbubani advierte contra una mala interpretación de la situación: “La preocupación de sus vecinos por el ascenso de China no significa que se opongan a este ascenso”. Algunos, como Singapur o Corea del Sur, ven en él cierto equilibrio; todos buscan ser respetados por los dos gigantes.

Como resume muy bien Wendy Cutler, vicepresidente del Asia Society Policy Institute con sede en Nueva York, “los quince países decidieron unirse, independientemente de sus diferencias y discrepancias”. Y sobre todo, agrega, este acuerdo recuerda que “nuestros socios comerciales asiáticos adquirieron la confianza necesaria para trabajar juntos sin Estados Unidos” (14). ¿Tendrá esto consecuencias geopolíticas a largo plazo? Todavía es demasiado pronto para saberlo.

Mientras tanto, fortalecido por su éxito, Xi Jinping se dio el lujo de anunciar que China está dispuesta a unirse al TPP-11, la nueva versión del tratado transpacífico impulsado por Japón luego de la retirada de Trump. Una jugada política más que un compromiso económico. El presidente chino quiere ser el campeón del libre comercio, pero con la condición de que el Estado mantenga el control del juego. Lo que no es seguro es que todos estén de acuerdo. ■

1. Las citas fueron extraídas, respectivamente, de *China Daily*, Pekín, 16-11-20, y del sitio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Tokio, noviembre de 2020.

2. Véanse Jean Guilvout, “Indonésie : comment le

régime militaire règne par la terre”, y Patrice De Beer, “Démocratie d’exception à Singapour”, *Le Monde diplomatique*, París, respectivamente febrero de 1977 y octubre de 1971.

3. Véase Didier Cormorand, “Agua revueltas”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, julio de 2016.

4. Véase Lori M. Wallach, “El NAFTA revisado”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, diciembre de 2018.

5. Véase Benoît Bréville y Martine Bulard, “Tribunales ligados a los privados”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena junio de 2014.

6. “World Investment Report 2019 - Special Economic Zones”, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés), Ginebra, junio de 2019, www.unctad.org

7. Todas las estadísticas de la ASEAN provienen del *Asean Statistical Yearbook 2019*, Yakarta.

8. “Japan starts paying firms to cut reliance on Chinese factories”, *Bloomberg News*, 18-7-20.

9. Véase Kishore Mahbubani, *Has China Won?*, PublicAffairs, Nueva York, 2020.

10. David P. Goldman, “The State Department’s wrong telegram”, *Asia Times*, Hong Kong, 18-11-20.

11. Aristyo Rizka Darmawan, “Prabowo redeemed in Washington’s eye amid China-US rivalry”, *The Interpreter*, 20-10-20, www.lowyinstitute.org

12. Daniel Schaeffer, “Chine - États-Unis - Mer de Chine du Sud et riverains : en attendant Biden”, *Asie21*, septiembre de 2020, www.asie21.com

13. Jonathan Kearsley, Eryk Bagshaw y Anthony Galloway, “If you make China the enemy, China will be the enemy: Beijing’s fresh threat to Australia”, *The Sydney Morning Herald*, 18-11-20.

14. Wendy Cutler, “PERG Agreement: Another wake-up call for the United States on trade”, *Asia Society Policy Institute*, Nueva York, 15-11-20.

*De la redacción de Le Monde diplomatique, París.

Traducción: Andrea Romero

La inasible estrategia del nuevo líder Keir Starmer

Purga laborista en el Reino Unido

por Owen Hatherley*

“Debes pensar que soy muy ingenuo”, canta Edwyn Collins en la apertura del álbum favorito del líder laborista británico Keir Starmer, *You Can’t Hide Your Love Forever*. “Es cierto que sólo veo lo que quiero ver”. El año 2020, en el que Starmer no sólo logró alcanzar el liderazgo del Partido Laborista, sino también llevar a cabo una purga interna que no perdonó ni a sus propios partidarios, fue un caso de manual respecto de los beneficios de la falsa ingenuidad.

Las propuestas de Starmer durante su campaña de candidato a la dirección del partido parecían casi demasiado buenas para ser verdad: tras un trauma colectivo, cumplían con todas las demandas de las bases. La mayoría de los afiliados habían apoyado a Jeremy Corbyn y sufrido los numerosos vaivenes que marcaron su mandato, desde su breve derrota en las elecciones generales de junio de 2017 hasta la humillante debacle de diciembre de 2019, cuando fue objeto de una campaña conservadora divulgada en la prensa por transfugas del laborismo. A los miembros y militantes que sufrieron esa experiencia, Starmer aportaba una plataforma de “Diez Promesas”, que retomaba lo esencial del socialismo al estilo Corbyn: la renacionalización de los ferrocarriles y de los antiguos servicios públicos, un “New Green Deal”, la abolición de las tasas universitarias, el control de los alquileres y un ambicioso programa de viviendas sociales. Todo ello bajo el liderazgo de una personalidad más homogénea: ya no un antiimperialista convencido, sino una figura prominente de la buena sociedad, el fundador de un bufete de abogados especiali-

zados en defender los derechos humanos, ex fiscal general nombrado caballero por la Reina. Esta síntesis providencial parecía capaz de reunificar el partido y poner en marcha la máquina ganadora para las próximas elecciones.

Starmer no tuvo ninguna dificultad en superar a sus dos rivales, una de las cuales, Rebecca Long-Bailey, representaba el ala más a la izquierda del partido, y la otra, Lisa Nandy, su ala (cada vez más) a la derecha. En las elecciones internas de abril de 2020, cosechó cerca de la mitad de los votos que obtuviera su predecesor en las elecciones de 2015 y 2016. Pesos pesados corbynistas como Laura Parker, fundadora de Momentum, la corriente pro-Corbyn del laborismo, se habían unido a su candidatura. Pero nueve meses después, esta prometedora síntesis ya se ha desintegrado.

Promesas pendientes

La crisis resurgió, más grave que nunca. Haciendo propias las acusaciones de antisemitismo contra su predecesor, Starmer llegó hasta a prohibir que Corbyn ejerciera su mandato como diputado en el Parlamento; el secretario general del partido, David Evans, impide cualquier discusión sobre este desalojo en las células locales; y se desechó el programa que le permitió a la actual dirección acceder al poder. Las “diez Promesas” que anunciaban un nuevo amanecer para el laborismo han sido borradas de su página web.

Desde un principio era indudable que la estrategia de Starmer implicaba algo de oportunismo y manipulación. Por ejemplo, en un mitín en Li-

verpool, la ciudad más izquierdista del país, proclamó que durante la campaña no hablaría más con *The Sun*, el reaccionario tabloide del magnate Rupert Murdoch; una resolución que fue muy aplaudida por las bases, que boicoteaban a ese periódico desde su tendenciosa cobertura de la tragedia de Hillsborough en 1989 (1). Dicho esto, tan pronto como resultó electo se apresuró a concederle una entrevista.

En su primer video de campaña, difundido poco después de la estrepitosa derrota electoral de diciembre de 2019, Starmer era presentado como un heraldo de las luchas de los años 1980 y 1990 –período en el que gran parte de la envejecida izquierda del partido comenzó su carrera política–. Las movilizaciones en las que participó, como la huelga anti-Murdoch de las imprentas Wapping (1986), o la demanda de McDonald’s contra dos defensores de los derechos de los animales (en los años 1990), eran documentadas con borrosas imágenes de viejos archivos. Pero nada a partir de 2003. Ni una sola imagen, en particular, del período posterior a 2008, cuando Starmer se quitó la toga de abogado comprometido con la defensa de causas nobles para ponerse la prestigiosa vestimenta de director del Ministerio Público de Inglaterra y Gales (Director of Public Prosecutions). En este cargo, el hijo de la clase obrera –su padre era maquinista, su madre enfermera– brindaba plena satisfacción al orden dominante con sus posiciones a menudo duras y raramente progresistas. En cierto modo, los pocos meses que acaba de pasar al frente del laborismo reproducen, de forma acelerada, el

proceso de mutación o adaptación realizado tras su nombramiento como fiscal, bajo la égida del primer ministro laborista Gordon Brown.

El escándalo

En 2015 fue elegido por primera vez miembro del Parlamento, en una circunscripción electoral londinense adecuada al laborismo, y un año más tarde se convirtió en ministro del Brexit en el gabinete en las sombras del partido, donde muchos afiliados querían mantener al Reino Unido en Europa, pero muchos votantes se inclinaban en cambio por la salida, como lo demostraron las elecciones de 2019 (2). De hecho, en parte como resultado de su propia posición sobre el tema, los laboristas militaron en la votación por un segundo referéndum, una reivindicación tibia y torpe que no despertó el entusiasmo de los votantes y que Starmer se apresuró a enterrar tan pronto como devino en líder del partido. Sabía cuánto le podía costar políticamente la etiqueta “pro-europeo” y la desechó con la misma determinación que en 2008, cuando tuvo que convencer de que no sería un “fiscal humanista” –acusación infamante en un país cuyos tabloides consideran absurdo el concepto mismo de derechos humanos–.

El escándalo del antisemitismo que –según la prensa que le era hostil– habría avalado Corbyn cuando era líder del partido (3), jugó tan sólo un rol menor en la campaña interna de Starmer. Ante las preguntas y acusaciones que presentaron –entre otros– el Jewish Labour Movement (Movimiento Laborista Judío), sus rivales, Long-Bailey y Nand, dieron el sor-

prendente paso de declararse sionistas, lo que Starmer se negó a hacer. Sin embargo, una vez elegido, dedicó su primera declaración pública –un extraño mensaje de video grabado frente a un ropero, en el que aparecía con el rostro rojo y signos de pánico– a tan sólo dos temas: el Covid-19 y la “mancha del antisemitismo”, temas que hasta ahora son los que definen lo esencial de su mandato. Respecto al Covid, se atuvo a la política inicial de no criticar al gobierno por su desastroso manejo de la pandemia. De vez en cuando, usa un tono sentencioso y gerencial para “hacer una advertencia” a las autoridades.

Bajo sospecha

En un contexto en el que la oposición a la política de Boris Johnson está fuera de juego, los ataques contra la izquierda adquieren una importancia aun mayor. Long-Bailey fue el primer objetivo. En junio de 2020 renunció a su cargo de Ministra de Educación en el gabinete laborista en las sombras, después de haber compartido en Twitter una entrevista con la actriz Maxine Peake en la que se equiparaba la técnica policial estadounidense de “rodilla sobre el cuello” con una especialidad del ejército israelí –una acusación plausible, pero no probada, que ocupaba medio renglón en una entrevista consagrada en lo esencial a su apoyo al laborismo–. Denunciando una “teoría de conspiración antisemita”, de inmediato Starmer decidió sancionar a su antigua rival, quien sin embargo ofreció retractarse en público. De repente, toda la izquierda laborista se encontraba bajo sospecha. Además, el líder había prometido despedir a cualquier funcionario acusado de antisemitismo, independientemente de que la acusación fuera fundada. No obstante, esta regla no se aplicaba a otros de sus aliados, como Rachel Reeves, que proclamó su admiración por la ex diputada pro-nazi Nancy Astor, o Steve Reed, quien en julio de 2020, en Twitter, calificó a un empresario judío de “titiritero” que manipulaba al gobierno conservador. Tras la dimisión de Long-Bailey, las comunicaciones internas revelaron que su conflicto con Starmer estaba motivado en gran parte por su apoyo, considerado excesivo, a los sindicatos docentes, entonces en plena oposición a un plan para reabrir las escuelas.

En octubre, siguió la escalada con la suspensión de Corbyn, tras la presentación de un informe de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, en inglés) sobre el antisemitismo dentro del partido, que seguía a otro informe interno, filtrado a la prensa, que la dirección de Corbyn había pedido que se presentara a la EHRC para su evaluación. Este último documento contenía extractos de emails e intercambios de WhatsApp que indicaban que varios funcionarios del Partido Laborista reputados por su intransigencia con el antisemitismo en realidad no habían actuado ante varios reclamos sobre ese tema. El informe de la EHRC corroboró esos elementos y cuestionó a la dirección en tres aspectos: su pasividad frente a los comentarios juzgados antisemitas del ex alcalde de Londres Ken Livingstone y un oscuro asesor de Lancashire; sus intervenciones para bloquear procedimientos internos (una relacionada con los comentarios dejados en la página de Facebook de Corbyn sobre las caricaturas antisemitas, la otra destinada a acelerar la exclusión de Livingstone); su incapacidad para capacitar adecuadamente a los funcionarios del partido para manejar los casos de antisemitismo. Estas denuncias suscitaron pocas objeciones dentro del partido, incluso en su ala izquierda. A pesar de su severidad hacia la dirección, la EHRC se abstenía de transmitir las escandalosas acusaciones difundidas por la prensa, demasiado contenta de explotar esta crisis para darle su merecido a Corbyn, equiparándolo con una “amenaza existencial” para los judíos –el editorialista conservador Simon Heffer llegó a acusarlo de querer ‘reabrir Auschwitz’ (LBC, julio de 2019)–.



Cristián Salineros, Objeto agradable -Homenaje a Giacometti (Alerce, Ciprés de las Guaitecas), 2002 - Foto: Álvaro Mardones

Suspenden a exlíder

Corbyn recibió con beneplácito el informe de la EHRC, aunque observó, como era de esperar pero no sin torpeza, que el problema había sido “considerablemente exagerado” por los medios de comunicación, así como por sus “opponentes dentro y fuera del partido”. Una declaración que Starmer difícilmente podía refutar, a menos que concluyera que había servido en un gabinete en las sombras encabezado por un antisemita, pero que sin embargo usó como pretexto para suspender a Corbyn como miembro del Partido Laborista.

Siguen sin estar claras las razones de la suspensión. ¿Se castigaba a Corbyn por restar importancia a los actos de antisemitismo o por “desacreditar al partido”, según la frase deliberadamente vaga que utilizara Evans? Un panel de miembros del Comité Nacional Ejecutivo (CNE), representando a todas las tendencias del partido, decidió por unanimidad devolverle a Corbyn la condición de miembro, pero Starmer sigue negándose a que ocupe su escaño como diputado laborista. Decenas de grupos afiliados al laborismo –en particular los sindicatos y movimientos de jóvenes– han expresado su apoyo al ex líder del partido; Evans anunció su intención de suspenderlos a su vez, antes de indicar que la cuestión no está abierta a debate, lo que ha llevado a algunos miembros del CNE a declararse en huelga.

La espiral es infernal. Varios sindicatos tardaron apenas unos meses en considerar su desafiliación del Partido Laborista, mientras que les había llevado años resolverse a hacerlo bajo el mandato de Anthony Blair. Dada la aprobación general que recibió el informe de la EHRC, la cuestión no es si existe un problema de antisemitismo en el seno del laborismo, sino más bien si el enfoque de calificar de antisemita cualquier crítica a la purga en curso facilita o complica la aplicación de las recomendaciones del informe.

Apoyo a la policía

¿Cuáles serían hoy las condiciones para renunciar el partido? Un informe interno sobre el desastre electoral de 2019, “Labour together” (“El Laborismo unido”), brin-

da varias pistas. Aunque están de acuerdo en que la confusa demanda de un segundo referéndum sobre el Brexit es, de lejos, la principal causa de la derrota, sus autores recomiendan remediar la crisis con más “profesionalismo” y “patriotismo” para apaciguar a la derecha, pero también con más apoyo a las luchas sociales y más audacia programática, a fin de no condenar al ostracismo a los jóvenes socialistas de Momentum. Sin embargo, la dirección del partido parece haber interpretado mal estas propuestas aparentemente equilibradas: en cuestiones de orden y seguridad sigue confiando en los Tories, mientras que en el plano social y económico persiste en sus posiciones centradas, encarnadas por la insulsa Anneliese Dodds, ministra de Finanzas en el gabinete en las sombras. Dada la política fiscal del gobierno de Johnson, marcada por el aumento del gasto público y del salario mínimo, los matices entre laboristas y tories son cada vez más difíciles de discernir.

Esta negativa a adoptar una línea aunque sea un tanto progresista es la que causó la mayor agitación después de la llegada de Starmer. El nuevo líder laborista comenzó haciendo comentarios despectivos sobre el movimiento estadounidense Black Lives Matter, reduciéndolo a una “peripección”, antes de oponerse a denunciar la violencia policial en Estados Unidos: “Como Director del Ministerio Público, trabajé durante cinco años con la policía de Inglaterra y Gales, contribuyendo a llevar a miles de personas ante la justicia. Así que todo el mundo puede ver que mi apoyo a las fuerzas policiales es muy, muy fuerte, como lo demuestran las acciones que he tenido la oportunidad de llevar a cabo con ellas” (4). Las tensiones se intensificaron cuando un grupo de socialistas del gabinete en las sombras de Starmer se vio obligado a renunciar tras votar contra dos proyectos de ley de la administración Johnson que pretendían garantizar la impunidad de los militares y agentes de inteligencia si cometían actos delictivos durante sus operaciones. La línea oficial del laborismo era abstenerse, no votar en contra; una posición sorprendente

para un partido liderado por un ex gran abogado de derechos humanos.

En el plano económico, los laboristas pueden argumentar que las tímidas medidas sociales acordadas por el ministro de Finanzas Rishi Sunak son el resultado de las amables presiones de Dodds. Pero si esto es lo mejor que el partido puede ofrecer a los partidarios de Corbyn a cambio de una ración extra de hu-millación pública, puede que no sea suficiente.

Hasta ahora, Starmer se ha limitado al rol de auxiliar muy moderadamente crítico del gobierno. En lo interno, sus acciones han llevado a trabar la prospección militante puerta a puerta, a hartar a sus activistas más comprometidos y a enemistarse con los sindicatos. Pero el objetivo de estos rechazos sigue siendo misterioso, en especial viniendo de un líder tan políticamente indefinible. El defensor de los derechos humanos que se niega a votar contra la absolución otorgada a los crímenes de guerra, el pro-europeísta devenido en ferviente partidario del Brexit, el candidato de la unión que organiza purgas en su partido: aunque estas metamorfosis parecen producir pocos resultados en las encuestas, la prensa las aplaudió con fervor. ¿Acaso la verdadera ingenuidad de Starmer sea creer que esta bendición alcanzará a llevarlo al poder? ■

1. Véase Quentin Guillon, “Liverpool FC, el fútbol como crisol de la identidad”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, noviembre de 2020.

2. Véase Chris Bickerton, “La histórica derrota del Partido Laborista”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, febrero de 2020.

3. Véase Daniel Finn, “El ‘antisemitismo’ de Jeremy Corbyn”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, junio de 2019.

4. Citado por Elliot Chappel, “Starmer says he regrets calling Black Lives Matter movement a ‘moment’”, *LabourList*, 2-7-20, <https://labourlist.org>

*Autor de *Red Metropolis: Socialism and the Government of London* (Repeater Books, Londres, 2020).

La “victoria irreversible” de los rebeldes hutíes

En Yemen, una coalición minada por las divisiones

por Pierre Bernin*

A pesar de la intervención militar de la coalición dirigida por Arabia Saudita y apoyada por las potencias occidentales, la rebelión hutí avanza en Yemen. Más allá de los aspectos locales del conflicto, sus implicancias regionales, principalmente la rivalidad irano-saudita y la emergencia de los Emiratos Árabes Unidos como potencia militar, transforman los equilibrios en Medio Oriente y el Golfo.

Durante la noche del 25 al 26 de marzo de 2015, las fuerzas aéreas saudíes lanzaban las primeras bombas sobre las posiciones hutíes en Saná, la capital de Yemen. De este modo, actuaban como el brazo armado autoproclamado de la “comunidad internacional”, que deseaba restablecer la presidencia de Abd Rabbuh Mansur Hadi, derrocado *de facto* por la rebelión del 21 de septiembre de 2014. La campaña, bautizada “Tempestad decisiva”, apuntaba a un movimiento armado no estatal que reivindica una identidad religiosa minoritaria, el zaidismo –una rama del chiismo con frecuencia considerada como la más cercana al sunnismo, e incluso como su quinta escuela jurídica–. Parecía entonces destinada a durar sólo algunas semanas.

Con la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptada el 14 de abril de 2015, la coalición, que comprendía a Arabia Saudita y a una decena de países árabes y musulmanes (Egipto, Jordania, Sudán, Marruecos y las monarquías del Golfo, a excepción de Omán), recibía una carta blanca de manera retrospectiva. Su acción militar se veía, de este modo, legalizada, al igual que su control de las entradas y salidas de Yemen, incluso a través de una forma de bloqueo cuyo costo humano se volvió chocante rápidamente. Este cierre favoreció lo que se suele describir como la “peor crisis en décadas”, una crisis a la cual la respuesta de urgencia sigue siendo estructuralmente deficitaria. Desde ese momento, y mientras las agencias de la ONU estiman en 250.000 el número de víctimas de los combates y de la catástrofe humanitaria, el estancamiento político sigue siendo patente (1). Las potencias occidentales, implicadas principalmente por sus contratos de venta de armas, vuelven a estar asociadas a una iniciativa guerrera tan deshonrosa como ineficaz (2).

Como Alemania nazi

La derrota, al menos simbólica, de la coalición y de sus diversos aliados en este conflicto asimétrico, provocó un refuerzo del bando hutí y una fragmentación del amplio espectro de sus opositores. En marzo de 2020, el politólogo yemení Abdulghani al Iryani llamaba a los beligerantes y a los observadores a reconocer la “victoria irreversible” de los hutíes, para poder seguir adelante e iniciar la reconstrucción (3). Los objetivos de los opositores yemeníes a los hutíes no son compatibles, lo que suele desembocar en enfrentamientos armados. El control del poder considerado legítimo y reconocido por la “comunidad internacional” se limita a una porción exigua del país. Hadi –que sigue refugiado en Riad debido a su afianzamiento aún incierto en todas partes y a su salud endeble– se ve confrontado al movimiento separatista sudista que,

por su parte, está representado entre otros por el Consejo de Transición Sudista (CTS). La latitud del presidente también está minada por el lugar que ocupan los partidarios del ex presidente Ali Abdullah Saleh, asesinado por los hutíes en diciembre de 2017 tras haberse puesto en contra de estos últimos, luego de que en 2014 se había aliado a ellos para provocar la caída de Hadi.

De este modo, los altercados regionales no agotan la complejidad del conflicto. Muchas dinámicas militares, pero también políticas y sociales, escapan en gran parte a las injerencias de los vecinos de Yemen: los mecanismos de corrupción, pero también las estrategias individuales de adaptación a la terrible crisis económica. Algunos funcionarios se ven privados de sus sueldos desde hace cuatro años, y el 70% de los yemeníes depende de la ayuda humanitaria. Los problemas regionales, que suelen ser sobrestimados, son ciertamente un prisma necesario, pero insuficiente para la comprensión del conflicto.

Ahora bien, las acusaciones realizadas contra Irán, que apoyaría a los hutíes, obligan a evocar el rol desempeñado por Teherán. Este rol es claramente la razón primera de la iniciativa militar de la coalición (cuya geometría es variable, Marruecos, por ejemplo, la abandonó en 2019 mientras que Paquistán, miembro inicial, salió rápidamente de ella, antes de volver a ingresar siguiendo el ritmo de las alternancias políticas). El conjunto de sus miembros considera a Yemen como el escenario de una tentativa de expansión de la República Islámica. En 2018, Mohammed Ben Salman, el príncipe heredero saudí y regente de facto, comparaba a la política regional de este país con la de la Alemania nazi al evocar las supuestas ambiciones del ayatolá y guía espiritual Ali Khomeini: “Quiere promover su propio proyecto en Medio Oriente, de la misma manera que Hitler buscaba la expansión en su época” (4).

Sin embargo, existe un consenso entre los especialistas tanto de Yemen como de Irán para subrayar la dimensión, al fin y al cabo, secundaria del apoyo de la República Islámica a los hutíes, cuyos orígenes ideológicos al igual que su capacidad de movilización siguen siendo principalmente locales (5). A pesar de los repetidos alegatos, ningún formador militar iraní o representante de los guardianes de la revolución fue identificado sobre el suelo yemení –bastante lejos de sus intervenciones en Irak o en Siria, por ejemplo–.

El factor Biden

Pero aunque el apoyo de Teherán aún es limitado, va en aumento, lo que muestra claramente el carácter contraproducente de la intervención de Arabia Saudita y de sus aliados. En octubre de 2020, la infiltración de un embajador iraní enviado a los hutíes en Saná produjo el efecto de una burla a la coalición, que supuestamente controlaba las fronteras de Yemen. Las similitudes técnicas entre los misiles tierra-tierra hutíes disparados regularmente hacia el territorio saudita en represalia a los bombardeos y aquellos de los que dispone el ejército de la República Islámica consolidan a posteriori la lectura saudita del conflicto. No obstante, la intervención de Irán sigue siendo el fruto de una dosificación sutil: sus estrategias parecen tener una aguda consciencia de los límites que no hay que transgredir y dejan que los saudíes y sus aliados se enreden solos.

El fracaso militar y político de la coalición puede imputarse en primer lugar a Arabia Saudita, cuya capacidad para manejar el caso yemení ha sido bastante sobreestimada por los tomadores de decisiones occidentales en 2015. Sin puerta de salida ni lectura precisa de la si-

tuación, culpable de probables crímenes de guerra de manera repetida (6), el reino arruinó su imagen a escala internacional, pero también a ojos de muchos yemeníes. Desde 2017, la expulsión de decenas de millones de trabajadores, entre los cuales algunos habían inmigrado a las ciudades saudíes mucho antes del comienzo de las hostilidades, acentuó un resentimiento popular que los saudíes, con el príncipe heredero a la cabeza, tendrán muchas dificultades para hacer olvidar.

A escala internacional, la llegada al poder de Joseph Biden en Estados Unidos podría hacer aun más frágil la posición de Riad. Durante la campaña, el Presidente electo estadounidense anunció su oposición a la guerra en Yemen y realizó declaraciones muy críticas sobre la actitud de los saudíes amenazando con transformarlos en “parias” de la “comunidad internacional” (7). Independientemente de cómo se repartan las bancas en el Congreso tras la elección senatorial en Georgia, la Casa Blanca podría verse tentada a ejercer presiones sobre Riad para apurar el final del conflicto o, al menos, para obligar a la monarquía a un mayor respeto de las poblaciones civiles yemeníes. En efecto, durante el transcurso del mandato precedente, los representantes de la minoría demócrata en el Senado, dirigidos principalmente por Bernie Sanders, habían apoyado varios textos susceptibles de complicar el apoyo estadounidense a la coalición en Yemen. La tentativa de último minuto de Donald Trump (votada tras su derrota) de clasificar al movimiento hutí como organización terrorista podría, sin embargo, entorpecer semejante reorientación diplomática y jurídica.

Oposición fragmentada

A tientas, el poder saudita acepta a partir de ahora negociar con los hutíes, que se encuentran en una posición favorable, avanzando incluso hacia la ciudad de Marib, el último bastión de Hadi, su protegido (8). Paralelamente a los esfuerzos del representante especial de la ONU, el británico Martin Griffiths, los diplomáticos saudíes discuten un estatuto de la frontera común entre ambos países, implorando a los hutíes que acepten una zona desmilitarizada y su retiro de los pueblos saudíes que ocupan. La incapacidad del reino para hacer aplicar el texto firmado en noviembre de 2019 en Riad, que debía poner fin al enfrentamiento entre los partidarios de Hadi y el CTS, demuestra una vez más la fragilidad de su posición. Lamentablemente, esto deja pensar que la firma de un acuerdo de paz entre la coalición y los hutíes no lograría poner fin al conflicto en Yemen.

Frente a Omán, que se distingue por su neutralidad diplomática tanto en Yemen como en Irán, los saudíes tampoco reconfiguraron la región para su beneficio. La crisis económica que causa estragos en el sultanado, acentuada por la pandemia de Covid-19, así como las tentativas de Riad para desestabilizar la región yemení fronteriza con Mahra, no lograron poner en vereda al poder de Omán (9). Haytham ben Tariq, que sucedió a su primo, el sultán Qabous ibn Saïd, fallecido en enero de 2020, optó por una continuidad diplomática que no les sienta bien a las ambiciones hegemónicas sauditas, al mismo tiempo que evidencia la fragmentación de las opciones políticas y de las rivalidades entre las monarquías del Golfo (10).

En el seno mismo de la coalición anti-hutí, el poder de Riad se encuentra, de hecho, cuestionada. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) desarrollaron, a través de su intervención militar en las regiones meridionales de Yemen y su apoyo directo al CTS, una política que pone en dificultad las opciones defendidas por la monarquía wahabita. Las vistas de Abu Dabi sobre la

isla de Socotra o sobre los puertos del Mar Rojo, acentúan la competencia entre los dos supuestos aliados. Las relaciones de clientela establecidas por los emiratíes con grupos armados, la represión feroz que alientan contra los representantes locales de los Hermanos Musulmanes representados por el Congreso Yemení para la Reforma (también denominado Al-Islah), de los cuales, una parte de los dirigentes siguen refugiados en la capital saudita, simbolizan la ausencia de orden regional o de lectura compartida de las implicancias, de las prioridades y de las amenazas entre los miembros de la coalición.

Impacto de la pandemia

Por otra parte, la alianza establecida localmente por las fuerzas de Abu Dabi con las milicias salafistas denota claramente una política poco clara y a corto plazo. Sin embargo, esta política ha sido a veces descrita (en particular por dirigentes europeos) como integrada en un gran proyecto geopolítico emiratí fundado sobre la integración económica y la tolerancia. En su estado actual, esta estrategia, que carece singularmente de matices, se construye enemigos acusándolos de manera maniquea de ser espías de Turquía o de Qatar y no engendra más que resentimiento y violencia. Además, la persistencia de disensiones en el seno de la coalición interviene cuando tanto Estados Unidos como Rusia, China y la Unión Europea, que perciben la urgencia de no pronunciarse, parecen negarse a adoptar un rol de árbitro en este conflicto y en las recomposiciones regionales.

Las estrategias de los monarcas saudíes y emiratíes hacen poco caso a los civiles. Pero los treinta millones de yemeníes impondrán su presencia, por su propia existencia, ya sea por la emigración o por la llamada violencia yihadista. El desmoronamiento económico y sanitario de la sociedad yemení, acentuado por la pandemia de Covid-19 –la cual provocó, según nuestras informaciones, la muerte de más de setenta médicos entre abril y noviembre de 2020–, no dejará indemne a la península arábiga. A las monarquías del Golfo, maltratadas ya por los sobresaltos de la renta petrolera, las nuevas expectativas de sus sujetos y el desafío climático, les convendría sacar conclusiones sobre la relación de interdependencia que mantienen con Yemen imaginando un horizonte que no sea belicoso. ■

1. Véase Laurent Bonnefoy, “Yemen, protagonista de un conflicto olvidado”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, diciembre de 2017.

2. “Ventes d’armes : comment mettre fin à la complicité de la France au Yémen”, Amnesty International, París, 16-11-20.

3. “So now that the Houthis have won...’ – Q&A with Abdulghani Al-Iryani”, Sanaa Center for Strategic Studies, Saná, 10-3-20.

4. “60 Minutes”, CBS News, 19-3-18.

5. Thomas Juneau, “Iran’s policy towards the Houthis in Yemen: A limited return on a modest investment”, *International Affairs*, Vol. 92, N° 3, Londres, mayo de 2016.

6. Véase particularmente “A pandemic of impunity in a tortured land”, Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y Regionales sobre Yemen de la ONU, Ginebra-Beirut, 9-9-20.

7. Derek Davison, “Will Joe Biden end the brutal war in Yemen?”, *Jacobin*, Nueva York, 16-11-20, <https://jacobinmag.com>

8. Ali Al-Sakani y Casey Coombs, “Marib: A Yemeni government stronghold increasingly vulnerable to Houthi advances”, Sanaa Center for Strategic Studies, 22-10-20.

9. Véase Sebastian Castelier y Quentin Müller, “Charité omanaise pour le Yémen”, *Le Monde diplomatique*, París, junio de 2020.

10. Fatima Dazi-Héni, “Le Golfe et Israël après les accords Abraham”, Arab Reform Initiative, 6-11-20, www.arab-reform.net

*Investigador.
Traducción: María Julia Zaparart

Los insulares, las minorías religiosas y los migrantes, juguetes de una rivalidad secular

En la frontera greco-turca, epicentro de las tensiones

por Élis Perriguer*, enviada especial

Los europeos temen la política cada vez más expansionista de Turquía, que reaviva en Grecia el recuerdo de los conflictos del pasado. Línea de ruptura, pero también de intercambios entre Oriente y Occidente, la frontera greco-turca ya no respira desde la crisis sanitaria. De Kastellorizo a Tracia pasando por Lesbos, ambos países tienen sin embargo muchas cosas en común, en torno a esta demarcación que ha sido cambiante y rara vez estanca.

Pequeña isla en los confines orientales de Grecia, Kastellorizo casi roza Turquía. El tiempo transcurre lentamente en el único pueblo, ubicado en una profunda bahía. Estamos a fines de septiembre: unos viejos pescadores juegan a las cartas cerca de niños que intentan atraer tortugas en las aguas cristalinas. Frente a su café frío, Konstantinos Papoutsis observa, plácido, la inmensa costa turca, a poco más de dos kilómetros, y la ciudad de Kas, su único horizonte. “Somos una isla turística tranquila –asegura este hombre afable que dirige una agencia de viajes–. Se lo he repetido a los turistas todo el verano”. En las mesas cercanas, un puñado de representantes electos de esta comuna de quinientas almas retoma sus dichos con un aire bonachón: “¿No existe ningún peligro en Kastellorizo?”.

Un imponente ferry, que parece gigantesco en este pequeño puerto mediterráneo, viene a animar el paisaje. Tras haber partido de Atenas veinticuatro horas antes, maniobra con dificultad para desembarcar a sus pasajeros, entre ellos, unos cincuenta hombres con ropa de fajina y sombreros camuflados. Los soldados atraviesan la bahía a paso firme antes de alcanzar los acantilados deshabitados que la dominan. “Es un simple relevo, como los que hay todos los meses”, comenta Papoutsis, acostumbrado a esta presencia.

Según el Tratado de París de febrero de 1947 (artículo 14), y como consecuencia de la cesión por parte de Italia a Grecia del Dodecaneso, las islas que forman parte de Kastellorizo están supuestamente desmilitarizadas. En los hechos, las tropas helenas acechan allí la ribera turca desde la ocupación por parte de Ankara de la parte norte de Chipre, en 1974, precisan varios historiadores (1). Esta defensa fue reforzada tras la crisis greco-turca en torno a los islotes disputados de Imia, en 1996. La municipalidad de Kastellorizo se niega a revelar el número de hombres apostados en las alturas. Y si bien los lugareños se muestran relajados para no asustar a los visitantes –escasos en estas épocas de Covid-19–, no ignoran la sombra que acecha en su pequeño paraíso.

Kastellorizo se encuentra en primera línea frente a las amenazas del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que quiere rediseñar los mapas y redefinir la distribución de las aguas. Desde los años 1970, las islas del Dodecaneso



son objeto de un conflicto larvado entre estos dos países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Turquía cuestiona la soberanía griega en varias islas, islotes y peñascos a lo largo de su costa. Sobre todo, es uno de los pocos países, junto con Estados Unidos entre otros, que no firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (llamada Convención de Montego Bay, que entró en vigor en 1994), y no reconoce el reclamo por parte de Grecia de una plataforma continental en torno a sus islas. Atenas justifica pues su militarización en nombre de la legítima defensa (2), en particular desde la ocupación turca de Chipre y debido a una importante presencia militar en la zona: la marina y la fuerza aérea turcas del Egeo tienen base en Izmir, en la costa occidental del Asia Menor.

Hidrocarburos en la mira

Tan cerca de Turquía, Kastellorizo se encuentra a 120 kilómetros de otra importante isla griega –Rodas– y a más de 520 kilómetros del continente griego. Mientras que la mayor parte del Mar Egeo ya está ubicada en la zona económica exclusiva (ZEE) (3) de Grecia, este lejano islote de nueve kilómetros cuadrados le permite gozar de una amplia extensión de varios cientos de kilómetros cuadrados en el Mediterráneo Oriental. Ahora bien, a falta de un acuerdo bilateral, esta ZEE no está formalmente establecida para Ankara, que reclama acceder allí libremente, sobre todo desde el descubrimiento, hace una decena de años, de un yacimiento de hidrocarburos potencialmente explotable. En varias oportunidades estos últimos meses, Turquía envió a la zona un barco de investiga-

ción sísmica bautizado *Oruc Reis*, por el nombre de un corsario otomano del siglo XV –apodado Barbarroja– nacido en Lesbos y devenido sultán de Argel.

Estas maniobras navales se hacen eco de la ideología de la “patria azul” (*Mavi Vatan*). Defendida por los nacionalistas y los islamistas, esta doctrina, concebida por el ex almirante Cem Gürdeniz, alienta a Turquía a imponer su soberanía en zonas disputadas en el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mediterráneo. Estos últimos meses, Erdogan multiplicó los discursos marciales. El 26 de agosto, en ocasión del aniversario de la Batalla de Manzikert, en 1071, en el este de Turquía, donde los turcos selyúcidas derrotaron al ejército bizantino, advertía a Grecia que cualquier “error” conduciría a su “ruina”. Unas semanas más tarde, el 21 de octubre, durante un encuentro con los presidentes chipriota y egipcio en Nicosia, Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro griego conservador, acusaba a Turquía de “fantasías imperialistas combinadas con acciones agresivas”.

Nacionalismo griego

Bajo presión en agosto último, Atenas pudo contar con el apoyo de la República de Chipre, Italia y Francia, con las cuales organizó maniobras conjuntas. O incluso de Egipto, con el que acaba de firmar un acuerdo de distribución de las aguas marítimas. Ya en conflicto abierto con su homólogo turco sobre Siria, Libia y el Cáucaso, el presidente francés Emmanuel Macron se puso decididamente del lado de Atenas. “Es un valioso aliado al que quisiéramos invitar a nuestra isla”, declaraba el alcalde adjunto de la Municipalidad de Kastellorizo, Stratos Amygdalos,

miembro de Nueva Democracia, el partido en el poder. A mediados de septiembre de 2020, Grecia anunciaba la adquisición de dieciocho Rafale, el avión de combate de Dassault Aviation.

“Erdogan se cree Solimán el Magnífico. Pero pierde credibilidad en su país; la lira turca se derrumba. Entonces, intenta recuperar su imagen con ideas de conquistas, de sueño nacional...”, se queja por su parte Konstantinos Raftis, guía turístico en Kastellorizo. Esta comparación entre el sultán de la Sublime Puerta y el actual presidente turco vuelve con frecuencia en este país que fue parte del Imperio Otomano durante cuatro siglos (de 1430, fecha de la caída de Tesalónica, a la independencia de 1830). La resistencia helena forjó la identidad del Estado griego moderno, donde persiste una profunda suspicacia respecto de un vecino molesto, cuatro veces más rico, seis veces más grande y ocho veces más poblado. Esta desconfianza trasciende los clivajes políticos, ya que el nacionalismo irriga a todos los partidos griegos. Atenas ve actualmente en la doctrina de la “patria azul” una política expansionista neo-otomana, que se hace eco del imperialismo pasado.

Banderas azul y blanco

En la desembocadura del puerto de Kastellorizo, la silueta de una mezquita transformada en museo –raro vestigio de la presencia otomana– le hace sombra a un bar de copas. El edificio se destaca frente a las veintiséis iglesias ortodoxas. La Constitución precisa que la ortodoxia es la “religión dominante” en el país, y, hasta el 2000, la confesión figuraba en los documentos nacionales de identidad. La eliminación de esta mención, a pedido del gobierno socialista, provocó la ira de la poderosa Iglesia Ortodoxa, ya que más del 95% de los griegos se considera que entonces de esta religión. “Durante todo el período del yugo otomano, seguíamos siendo griegos. Nuestros ancestros defendieron Kastellorizo para que mantuviera su identidad. Nosotros lucharemos también para que la conserve”, se entusiasma repentinamente Raftis.

Su isla debió resistir mucho tiempo más que el resto del país, insiste el sexagenario. Tras la partida de los otomanos, Kastellorizo, codiciada por las naciones extranjeras por su ubicación geográfica a las puertas de Oriente, fue ocupada o anexada por los franceses (1915-1921), los italianos (1921-1944), los británicos (1944-1945)... El islote recién devino completamente griego en 1948, al igual que el conjunto de las islas del Dodecaneso. Desde entonces, enarbola orgullosamente sus colores. En la bahía de Kastellorizo, varias banderas azul y blanco flamean en los balcones orientados hacia la ciudad turca de Kas (ocho mil habitantes). El número de banderas aumenta cuando la tensión crece.

Otros tres grandes estandartes nacionales fueron pintados en los acantilados por los militares. Apretando los puños, Raftis cuenta un episodio que “puso a todos con los nervios de punta”. A fines de septiembre de 2020, un dron de origen desconocido difundió cánticos militares turcos antes de rociar estos estandartes con pintura roja brillante, que evoca el color de la bandera turca. “Fue un ataque imperdonable, que será castigado”, se queja un niño de la isla, escrutando los pocos rostros desconocidos en el paseo. Teme que haya espías de Turquía. “Las

tensiones existen desde hace cuarenta años; todo terminó siempre resolviéndose. Hay que dejar que Turquía y Grecia dialoguen entre sí”, relativiza por su parte Tsikos Magiatis, el amable dueño de una taberna construida en un peñasco deshabitado, con una vista fantástica a Kas. “Las disputas son asunto de diplomáticos. Los habitantes de esa ciudad son nuestros hermanos, crecimos juntos”, asegura este treintañero casado con una turca oriunda de esa ciudad balnearia. Siendo adolescente, ya abandonaba los bares de Kastellorizo para disfrutar del bazar de Kas, ir al dentista o a médicos especialistas que no abundan en el pueblo. Los turcos, por su parte, figuraban entre los principales turistas de Kastellorizo, antes de que la frontera se cerrara totalmente en marzo de 2020, debido al Covid-19.

Los refugiados como arma diplomática

A unos 450 kilómetros más al noroeste, frente a las costas de la isla de Lesbos, no son los buques de búsqueda de hidrocarburos enviados por Ankara los que acechan a los griegos, sino los frágiles botes inflables provenientes de la costa turca, a apenas una decena de kilómetros. Esta isla montañosa del tamaño de Guadalupe, que posee 85.000 habitantes, constituye otro punto de fricción, cuyo instrumento son los migrantes.

Desde hace una década, Lesbos es una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea para cientos de miles de exiliados. Afganos, sirios, iraquíes o incluso congoleños transitan por Turquía, que recibe por su parte a aproximadamente cuatro millones de refugiados. Enfrente, la ribera turca se compone de playas poco turísticas y desiertas, apreciadas por pasadores, ya que permiten partidas discretas. Los migrantes permanecen sin embargo bloqueados en Lesbos, durante el tiempo de tratamiento de su pedido de asilo en Grecia y con la esperanza de llegar a otros países del espacio Schengen por caminos legales. El principal campamento de refugiados, Moria, se incendió en circunstancias poco claras el 8 de septiembre, sin que se produjeran víctimas graves entre sus trece mil ocupantes.

Para Konstantinos Moutzouris, el gobernador de las islas egeas del Norte, estas llegadas son producto de un cálculo estratégico de Ankara. “Erdogan utiliza a los refugiados como arma diplomática, los envía cuando quiere negociar. Tiene una actitud muy agresiva, como ningún otro dirigente turco antes que él”, acusa esta figura conservadora local, conocida por sus posiciones categóricas sobre los migrantes, a los que desea “disuadir de venir”.

Prueba de ello es el episodio de tensión de marzo de 2020. Descontento por las críticas de la Unión Europea durante su ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria, el presidente turco anunció la apertura de sus fronteras a los migrantes que quieren llegar a Europa, a pesar del acuerdo sobre el control de la inmigración que celebró con Bruselas en marzo de 2016. Varios miles de personas se concentraron a las puertas de Grecia, en la frontera terrestre del noreste, suscitando un refuerzo de las tropas militares griegas en ese sector. Al mismo tiempo, en Lesbos, una decena de barcos cargados de refugiados alcanzaban las costas en pocos días, desatando la furia de extremistas locales. “Desde entonces, no mantenemos ninguna comunicación con las autoridades turcas”, afirma Moutzouris.

Atenas asume actualmente una línea dura, incluso a costa de cerrar una parte de su frontera común con Turquía a los solicitantes de asilo, a pesar de las convenciones internacionales firmadas por Grecia. Así, a mediados de octubre, el gobierno anunció la construcción de un nuevo muro de veintisiete kilómetros en la frontera terrestre. A comienzos del año 2020, ya había manifestado su intención de construir una barrera flotante de 2,7 kilómetros frente a las costas de Lesbos. Una obra muy criticada y considerada ilegal por las organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los de-

rechos humanos. Un proyecto “absurdo”, considera Georgios Pallis, farmacéutico de la isla y ex diputado de Syriza (izquierda). Varias fuentes locales mencionan una suspensión de la construcción de esta barrera. El gobierno, por su parte, nada informa al respecto.

“Los refugiados pagan la ruptura del diálogo greco-turco”, lamenta Pallis entre dos mezes acompañados por el ouzo local, cerca del ruidoso puerto de Mitilene, en el sur de la isla. “Los guardacostas griegos organizan regresos forzados de migrantes”. En septiembre, en una conferencia de prensa, el ministro de la Marina se jactaba de haber “impedido” la entrada de unos diez mil migrantes en 2020. Un mes más tarde, el ministro de Inmigración intentaba por su parte corregir la situación negando todo regreso forzado. En Lesbos, estas imágenes de refugiados rechazados reavivan un doloroso recuerdo, analiza Pallis: “El del exilio de los refugiados de Asia Menor”. Llamado también en Grecia la “gran catástrofe”, este acontecimiento sentó las bases de la actual relación greco-turca.

Tras la caída del Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial, y luego de la guerra greco-turca (1919-1922), los griegos de Asia Menor fueron objeto de persecuciones y masacres que, según muchos historiadores, constituyen un genocidio (4). En 1923, ambos países firmaron el Tratado de Lausana, que fijaba las fronteras casi definitivas de la Turquía moderna y ponía fin a la administración por parte de Grecia de la región de Izmir-Esmirna, tal como lo había decidido el Tratado de Sèvres de 1920 (5). Este acuerdo impuso también un brutal intercambio de poblaciones, basado en criterios religiosos, en nombre de la “homogeneidad nacional”. Más de 500.000 musulmanes de Grecia emprendieron así el camino del Asia Menor –es decir, el 6,5% de los residentes de Lesbos, según un censo de 1920 (6)–. Paralelamente, el tratado causó el desarraigo de más de 1,2 millones de cristianos ortodoxos, enviados a Grecia. En total, más de 30.000 llegaron a la isla. Fueron bautizados entonces peyorativamente “semillas de turcos”.

“Eran cristianos ortodoxos, hablaban griego, pero eran muy mal vistos por los insulares. A las mujeres exiliadas de la gran ciudad de Izmir las apodaban ‘las prostitutas’. Hubo que esperar dos generaciones para que las relaciones se calmaran”, cuenta Pallis, el mismo descendiente de refugiados de Asia Menor. “Mi abuela llegó aquí a los 8 años. Para integrarse, debió aprender a detestar a los turcos. No tenía que ser amiga de los ‘del otro lado’. No volvió a poner los pies en Turquía antes de sus 80 años.”

Montado en su Vespa bajo un calor agobiante, Pallis se detiene frente a unas ruinas que surgen en las calles de Mitilene: antiguas mezquitas abandonadas. Una no es más que un edificio desmantelado donde deambulan gatos famélicos; otra fue transformada en una florería. “Las autoridades no asumen ese pasado otomano –lamenta el ex diputado–. El Estado debería financiar la reconstrucción de estos monumentos y el desarrollo del turismo con Turquía. Este tipo de inversiones tornaría a la región más segura que la compra de Rafales.”

Una minoría sacudida

En el noreste del país, cerca de la frontera con Turquía y Bulgaria, ese pasado otomano sigue siendo tangible. En Tracia Occidental, las mezquitas en actividad dominan los pueblos que se elevan en medio de los campos de algodón, girasoles y tabaco. La minoría musulmana de Grecia vive cerca del macizo montañoso de Ródope, cuyas cumbres culminan en Bulgaria. Estimada entre 100.000 y 150.000 personas por las autoridades, se compone de romanías, pomacos –una población de origen eslavo y lengua búlgara convertida al islam bajo la dominación otomana– y, mayoritariamente, de habitantes con raíces turcas.

“Somos ciudadanos griegos, pero también somos turcos. Lo éramos incluso antes de que existiera la Turquía moderna. Hablamos turco y tenemos la misma religión”, explica Moustafa Moustafa, biólogo y ex diputado de Syriza. En

pocas palabras, expresa toda la complejidad de una identidad moldeada, una vez más, por el pasado imperial regional. Y que también se encuentra en el corazón de una batalla de influencia entre Atenas y Ankara.

Sobreviviente del Imperio Otomano, la minoría musulmana vio cómo se trazaban las fronteras de la Grecia moderna en torno a ella en el siglo XX. Se libró del intercambio forzado de poblaciones del Tratado de Lausana, a cambio del mantenimiento de un Patriarcado ecuménico en Estambul, así como de una diáspora griega ortodoxa en Turquía. Musulmana y principalmente turcófona, se desarrolla en un Estado-nación cuyos pilares son la lengua griega y la religión ortodoxa.

Tiene derecho a practicar su religión y utilizar el idioma turco en la enseñanza primaria. La región cuenta con un centenar de escuelas minoritarias bilingües. “Vivimos juntos, cristianos y musulmanes, sin enfrentamientos. Pero los matrimonios mixtos aún no se toleran”, agrega Moustafa, en su laboratorio de la ciudad de Komotini –también llamada Gümülcine en turco. Los aproximadamente 55.000 habitantes viven aquí en barrios cristianos y musulmanes construidos alrededor de un sinuoso río, hoy sepultado bajo el hormigón. Moustafa casi nunca abandonó Tracia Occidental. “Nuestra minoría no es cosmopolita, somos aldeanos aferrados a esta región. Sólo queremos que nuestros descendientes vivan en paz aquí”, explica. Al igual que muchos musulmanes de la región, sólo hizo sus estudios superiores en Turquía, antes de regresar, atraído por la tierra de sus ancestros.

A cien kilómetros de Komotini, Turquía sigue siendo el “Estado padrino” de estos musulmanes, según el Tratado de Lausana. Pero la influencia de la que algunos llaman la “madre patria” no siempre es bien recibida por Grecia. Los más nacionalistas temen que la minoría musulmana se acerque demasiado a su vecino turco y manifieste veleidades de independencia. Su estatuto está en el centro de la discordia. Turquía aboga por el reconocimiento de una “minoría turca”. Grecia, en cambio, rechaza toda referencia étnica ligada a una pertenencia religiosa.

La batalla se libra en dos terrenos: la educación y la religión. A fines de los años 1990, Atenas quiso integrar a la minoría en el sistema de educación pública griega, aplicando particularmente una política de discriminación positiva y facilitando el acceso a la universidad. Los musulmanes proturcos, en cambio, abogan por la creación de más establecimientos minoritarios bilingües. En el plano religioso, cada parte designa muftíes, que no se reconocen mutuamente. Tres representantes oficiales son designados por Grecia para la región. Otros dos, oficiosos, lo son por los musulmanes de Tracia Occidental apoyados por Ankara, que se opone a que un Estado cristiano designe religiosos.

“Sufrimos siempre las consecuencias de las crisis diplomáticas. Somos los peones de su juego de ajedrez”, lamenta con voz cansina Moustafa. El sexagenario evoca el período que siguió al pogromo dirigido principalmente contra los griegos de Estambul, que causó una quinceña de muertos en 1955. Luego, los años que siguieron a la ocupación del norte de Chipre por parte de Turquía, en 1974. “Nuestra minoría sufrió entonces una violación de sus derechos por parte del Estado griego –denuncia–. Ya no podíamos obtener el permiso de conducir. Nos impedían comprar tierras.” Paralelamente, del otro lado de la frontera, el temor empujó progresivamente a la comunidad griega de Turquía al exilio. Actualmente, los griegos son apenas unos miles en Estambul.

Estos conflictos siguen incidiendo en la evolución de Tracia Occidental. “La situación mejoró en los años 1990. Pero, maltratados por el pasado en Grecia, algunos miembros de la minoría musulmana se acercaron a Turquía, alimentando una desconfianza en el imaginario nacional griego. Muchos cristianos los consideran agentes del país vecino”, señala Georgios

Mavrommatis, especialista en minorías y profesor asociado de la Universidad Demócrito de Tracia, en Komotini.

Un clima de desconfianza sobrevuela esta ciudad, bajo la influencia de dos discursos nacionalistas opuestos. “La gente de la extrema derecha griega nos percibe como jenizaros [soldados del Imperio Otomano]. Erdogan, por su parte, nos califica de soydas [‘parientes’, en turco]”, describe en voz alta Pervin Hayrullah, en la mesa de un animado café. Directora de la Fundación para la Cultura y la Educación en Tracia Occidental, recuerda también la visita del presidente turco a la región, a fines de 2017. Erdogan había denunciado las “discriminaciones” practicadas por el Estado griego respecto de esta comunidad de origen turco.

Una cristiana que desea mantenerse en el anonimato murmura, por su parte, que “las autoridades griegas están desbordadas. Turquía, que está mucho más presente en el terreno, tiene más poder. Ankara cuenta con miles de espías en la región y otorga millones de euros de presupuesto cada año al consulado turco de Komotini”. Para Hayrullah, ligada a esta institución, “el consulado no hace más que ejercer una misión diplomática, del mismo modo que el consulado griego de Edirne [ciudad turca a unos 200 kilómetros, en la frontera]”. El aspecto del consulado turco contrasta con las fachadas deterioradas de Komotini. Vigilado por cámaras y guardias vestidos de negro, el edificio está rodeado de un alto cerco verde.

“Grecia nos trata bien. Se interesa por el desarrollo de nuestra comunidad y nos deja profesar nuestra religión”, elogia por su parte Selim Isa, en su tranquila oficina. El presidente del Comité de Gestión de los bienes musulmanes –designado por el Estado griego– está orgulloso de mostrar las bellas arañas y los luminosos y renovados salones de una de las veinte mezquitas de Komotini. “Pero cuanto más se deterioran las relaciones con Turquía y más el consulado extiende su influencia, más reivindica el reconocimiento de una minoría turca”, agrega Isa, con la mirada alerta, mientras el llamado del muecín resuena en la ciudad.

En un videomensaje enviado el 7 de diciembre al seminario sobre el Mediterráneo Oriental organizado por el Consejo de Universidades Internacionales y la Universidad Akdeniz, en Antalya, Erdogan, decidido a rediseñar los mapas en el Mediterráneo Oriental, denunció la “mentalidad pirata que quiere robarnos nuestros derechos”. El presidente turco exhortó además a la Unión Europea a dejar de mostrarse “injusta con los chipriotas turcos y Turquía”, en nombre de la “solidaridad de la Unión”. ■

1. Véase Gilles Bertrand, *Le Conflit helléno-turc*, Maisonneuve et Larose - Instituto Francés de Estudios Anatolianos, París - Estambul, 2004; y Georges Prévélakis, *Géopolitique de la Grèce*, Éditions Complexe, Bruselas, 2005.

2. Carta de las Naciones Unidas, capítulo VII, artículo 51: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas”.

3. Zona marítima en la cual un Estado ejerce derechos soberanos.

4. Véase Colin Martin Tatz, *With Intent to Destroy: Reflecting on Genocide*, Verso, Londres - Nueva York, 2003; Kostas Faltats, *The Genocide of the Greeks in Turkey: Survivor Testimonies from the Nicomedia (Izmit) Massacres of 1920-1921*, Cosmos Publishing - Attica Editions, Atenas, 2016; y Olivier Delorme, “Aux origines de la Grande Catastrophe”, *Desmos/Le Lien*, N° 21, Atenas, 2005.

5. Artículos 65 a 83 del Tratado de Sèvres, 10 de agosto de 1920. “El gobierno helénico será responsable de la administración de la ciudad de Esmirna y del territorio descrito en el artículo 66” (art. 70), que siguen estando sin embargo “bajo soberanía otomana” (art. 69).

6. Émile Kolodny y Régis Darques, “Turcs, Grecs et réfugiés dans l’île de Lesbos au XXe siècle”, *Méditerranée*, N° 103, París, 2004.

*Periodista, Atenas.

Traducción: Gustavo Recalde

El Kremlin busca recuperar influencia

Rusia en África, ¿un regreso ilusorio?

por Arnaud Dubien*

Octubre de 2019. Cerca de cuarenta jefes de Estado deambulaban por los pasillos de la antigua villa olímpica de Sochi, la ciudad balnearia ubicada al borde del Mar Negro donde se habían realizado los Juegos de Invierno en 2014. Promovida por el presidente Vladimir Putin, la primera Cumbre ruso-africana finalizó con la proclamación de objetivos ambiciosos –el Kremlin apuntaba a duplicar los intercambios comerciales en cinco años– y con la promesa de una nueva cita, probablemente en Adís Abeba (Etiopía), sede de la Unión Africana, en 2022.

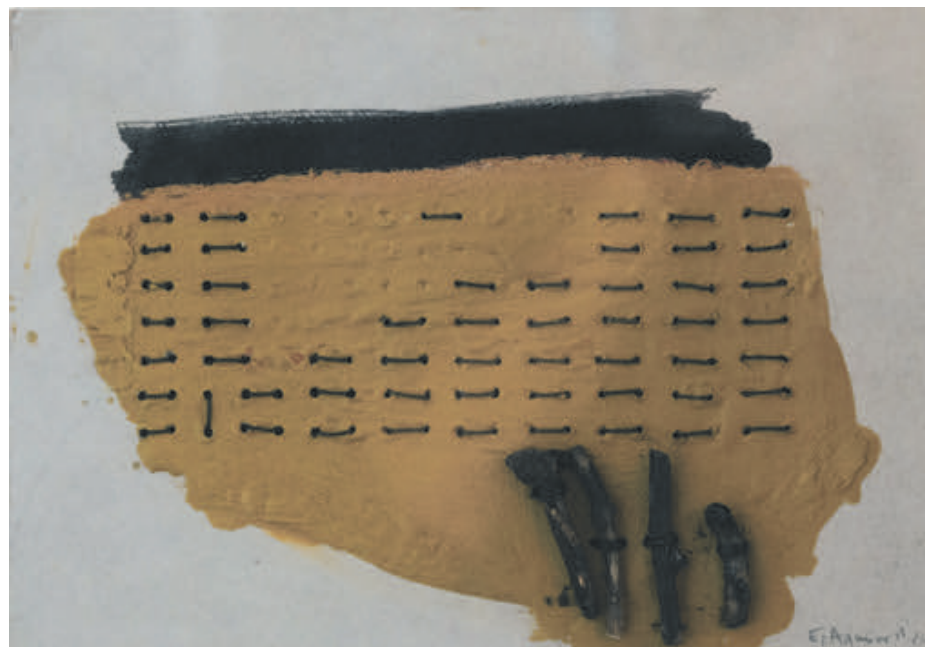
Esa gran misa diplomática fue percibida en Occidente como la concreción del regreso de Moscú al continente africano, la traducción de un interés renovado por la región que se inscribe en una estrategia global. Un análisis más atento revela que en realidad este proceso comenzó hace unos quince años. Desde entonces evolucionó notablemente, tanto por la geografía de los países implicados como por los vectores de influencia utilizados, sin que se defina sin embargo un acercamiento coherente a escala africana.

La topografía de la influencia de Moscú en África durante mucho tiempo estuvo ligada a los vaivenes de la descolonización y de la lucha anti apartheid. Aunque este continente ya estaba presente en las reflexiones de Lenin desde los inicios de la década de 1920, será recién tres décadas más tarde, en el contexto de la caída de los imperios franceses y británicos, que se convertirá en un tema de política exterior para el Kremlin. Tras su explosiva irrupción en la crisis de Suez, en octubre de 1956, la Unión Soviética aportó apoyo económico y militar masivo al Egipto del presidente Gamal Abdel Nasser, al tiempo que se vinculaba cada vez más activamente con diferentes movimientos de liberación nacional. La China maoísta, que denunciaba la tibieza revolucionaria de su antiguo hermano mayor soviético, corría a Moscú por izquierda. A partir de 1956, la URSS tejió lazos privilegiados con el Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino. La base rusa de Perevalnoe, en Crimea, recibía combatientes anti apartheid del Congreso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela, de la Unión del Pueblo Africano de Zimbabue (ZAPU) o del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO).

Influencia blanda

Esa ayuda militar estaba acompañada por una política de influencia “blanda”, como por ejemplo la apertura en 1961, en Moscú, de la Universidad de la amistad de los pueblos Patrice Lumumba, que recibiría dos décadas más tarde unos 26.500 estudiantes provenientes de Asia, América Latina y África (1). Moscú también enviaba importantes contingentes diplomáticos a los países africanos, al igual que al resto del Tercer Mundo: los nuevos Estados independientes enviaban a Moscú dos o tres diplomáticos, la URSS les mandaba de a centenas. En Togo, en 1960, había un diplomático soviético cada 18.000 habitantes (2)...

Durante los años 1970-1980, el continente africano se transformó en un escenario significativo –aunque periférico– del enfrentamiento Este-Oeste. El Kremlin trató de mover sus peones en Somalia, luego en Etiopía, hasta que decidió apuntar hacia el África austral bajo el impulso del desman-



Elisa Aguirre, Apuntes 7 (técnicas mixtas), 2010 (Gentileza Galería P. Ready)

telamiento del Imperio portugués y la aceleración de la lucha anti apartheid. El compromiso soviético se hizo especialmente fuerte en Angola, donde enviaron más de 10.000 militares en misión a partir de 1975; allí jugaron un papel decisivo –junto a las tropas cubanas– durante el invierno de 1988, en la batalla de Cuito Cuanavale, que despejó el camino para la independencia de Namibia y debilitó irremediabilmente al régimen de Pretoria.

A pesar de todo, África fue la región del mundo en la que el retiro estratégico decidido hacia fines de los años 1980 por el último secretario general del Partido Comunista, Mijaíl Gorbachov, en nombre de la normalización de las relaciones con Occidente, fue más rápido y más visible. Sucedió tras la caída de la URSS. Para Boris Yeltsin y los dirigentes rusos de la época, África pasó a ser sinónimo de atraso económico y de aventuras geopolíticas vanas y ruinosas. Así, a partir de 1992, Rusia anunció el cierre de nueve embajadas, cuatro consulados, y trece de sus veinte centros culturales (3). Ante la falta de financiamiento y de interés por parte de las nuevas autoridades, la mayoría de las sedes de las agencias de prensa de la ex Unión Soviética –a menudo utilizadas como cobertura para los servicios de inteligencia exterior durante la Guerra Fría– cerraron sus puertas. En 1993, los intercambios comerciales con África no llegaban al 2% del comercio exterior del país. En unos pocos meses, Rusia prácticamente desapareció del paisaje africano y sacrificó así varias décadas de inversiones económicas y políticas. Paradójicamente, esta desaparición se dio cuando África “despegaba” y cuando varios actores internacionales comenzaban a implantarse allí. El retraso que debería recuperar Moscú a partir de los años 2000 terminaría siendo aun más importante.

Los primeros signos del interés renovado por África se remontan al año 2001. El ex ministro de Relaciones Exteriores (1996-1998) y Presidente del gobierno (1998-1999) Yevgeni Primakov, nombrado por Putin en la dirección de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, realizó aquel año una gira por Angola, Namibia, Tanzania y Sudáfri-

ca (4). Pasarían cinco años antes de que se produjera la primera incursión rusa de este siglo en el continente. En marzo de 2006, Putin visitó Argelia, y le propuso la condonación de su deuda –4.700 millones de dólares– a cambio de la firma de contratos de venta de armas por unos 6.000 millones de dólares. Para Moscú era una forma de movilizar sus contactos de la época de la Guerra Fría y convertir viejas afinidades ideológicas en flujos de negocios clásicos.

Acuerdos con Libia

Ese mismo tipo de acercamiento sería implementado luego en Libia, otro ex Estado cliente de la URSS. Durante la primavera de 2008, unas pocas semanas antes de ceder su lugar en el Kremlin a Dimitri Medvedev, Putin se reunió con Muamar Gadafi. Moscú borró de un plumazo los 4.600 millones de dólares de una deuda contraída por Libia en la época de la Unión Soviética, y Trípoli se comprometió a comprar 3.000 millones dólares en equipos militares, sobre todo aviones de combate, tanques y sistemas antiaéreos. También concluyeron un acuerdo para la participación de los Ferrocarriles Rusos (RJD) en la construcción de una línea entre Sirte y Bengasi. La visita de Gadafi a Moscú en octubre de 2008 –la primera desde 1986– pondría en evidencia la dificultad del Kremlin para concretar esas negociaciones, ante la voluntad del dirigente libio de seguir regateando.

Esta primera fase del regreso a África de los rusos estuvo también marcada por importantes inversiones de grupos industriales privados. Rusal, el primer productor mundial de aluminio, se implantó en Guinea, otro país que había mantenido estrechas relaciones con el “campo socialista”. Con posterioridad a la visita de Putin a Pretoria en septiembre de 2006, dos grandes grupos metalúrgicos y mineros, Evraz y Renova –controlados respectivamente por los oligarcas Roman Abramovich y Viktor Vekselberg–, compraron Highveld Steel and Vanadium Ltd y asumieron el 49% de participación en el capital de la United Manganese of Kalahari. El fuerte componente minero de las inversiones rusas se confirmó en 2010 cuan-

do ARMZ, filial de Rosatom, el gigante público de la energía nuclear, adquirió un gran yacimiento de uranio en Tanzania. Alrosa, el campeón nacional ruso de la producción de diamantes, invirtió por su parte en Angola y, un poco después, en Zimbabue.

Giro en los juegos de poder

Hacia el fin del mandato de Medvedev (2008-2012), la política rusa en África comenzó a institucionalizarse. En marzo de 2011, el Presidente nombró un representante especial para la cooperación con África. Eligió a Mijaíl Marguelov, quien hablaba árabe y, en ese entonces, presidía la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento, y ocuparía esas funciones hasta octubre de 2014. En diciembre de 2011 organizó el primer foro de negocios ruso-africano y contribuyó a estructurar la política de Moscú en el continente.

En 2011 se produjo también el único entredicho público durante los cuatro años de extraña cohabitación entre el presidente ruso y su primer ministro, Putin. Este último le reprochó a Medvedev no haber utilizado su derecho a veto a propósito de la intervención militar occidental contra Gadafi –una decisión que le arrancó su homólogo francés Nicolás Sarkozy– y advirtió sobre la posibilidad de un cambio de régimen en Trípoli. Este episodio –poco conocido en Occidente– marcó un giro en los juegos de poder en Moscú. Tras su regreso al Kremlin, en la primavera de 2012, Putin podría en el centro de su discurso sobre política exterior la condena a las injerencias occidentales; el “precedente libio” y, de manera general, las “primaveras árabes” le servirían para tomar distancia.

Tradicionalmente, Rusia diferenciaba al África subsahariana del norte árabe parlante del continente, donde desplegaba las herramientas esenciales de sus esfuerzos diplomáticos y económicos. Esta tendencia se reforzó después del “reencuentro” con Egipto en 2013, tras el golpe militar del mariscal Abdel Fatah Al Sisi, y gracias al fortalecimiento de lazos, desde 2014, con Marruecos. La venta de armas y la cooperación militar fueron las primeras manifestaciones del acercamiento con El Cairo. Entre 2013 y 2017, los militares egipcios recibieron cuarenta y seis aviones del combate MiG-29M, sistemas antiaéreos Buk-M1-2 y S-300VM, así como cuarenta y seis aparatos de ataque Ka-52. Originalmente destinados al porta-helicópteros Mistral, que Francia iba a venderle a Rusia, finalmente se los terminaron vendiendo a Egipto en 2015. Este proceso debía continuar con el envío de cazadores bombarderos Su-35, a pesar de las amenazas de represalias estadounidenses contra El Cairo. Más allá de esto, las marinas de guerra rusas y egipcias realizaron en octubre de 2020 ejercicios conjuntos en el Mar Negro, mientras que las tropas aéreas de los dos países se reunirán desde ahora todos los años para realizar maniobras conjuntas.

Los lazos comerciales entre los dos países se profundizaron, el volumen de intercambios bilaterales pasó de 2.800 millones de dólares en 2011 a cerca de 8.000 millones en 2018. Rusia aumentó notablemente sus exportaciones de cereales a Egipto –primer importador mundial–, que se aprovisionó en un 85% de trigo ruso durante la campaña 2017-2018. Además, a raíz de un tratado

firmado en 2015, Rosatom construirá en Al Dabaa, al oeste de Alejandría, la primera central nuclear del país. La obra, estimada en 25.000 millones de dólares, debería finalizarse en 2029. En un 85% se financiará con un préstamo del Estado ruso.

El factor Marruecos

Las tensiones crecientes con Occidente tras la crisis ucraniana y la participación de Moscú en Medio Oriente, tras la intervención militar en Siria, también facilitaron el florecimiento de las relaciones –hasta hace poco modestas– con Marruecos. En marzo de 2016, catorce años después de una primera visita, el rey Mohammed VI, acompañado de una decena de ministros, fue recibido en el Kremlin por Putin. Marruecos es uno de los principales beneficiarios de las contra-sanciones instauradas por Moscú en agosto de 2014 a los productos europeos. También apunta a atraer a los turistas rusos gracias a la apertura de una ruta aérea directa –antes de la pandemia de Covid-19, Casablanca era una de las pocas ciudades africanas unida directamente a Moscú–. El volumen de los intercambios bilaterales dejó de ser marginal, puesto que alcanzó los 1.470 millones de dólares en 2018.

Desde hace poco, las relaciones ruso-marroquíes cobraron importancia en materia de seguridad. En diciembre de 2016, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolai Patrushev, realizó una visita de dos días a Marruecos que replicaba la que, en abril del mismo año, había realizado a Moscú Abdellatif Hammouchi, el jefe de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST). Las diferencias –sutilmente disimuladas en público– sobre el Sahara Occidental no impidieron que Rusia y el reino desarrollaran relaciones pragmáticas y ambiciosas en todos los terrenos, o casi.

En términos más generales, desde 2014, el lugar de la seguridad en la política de Rusia en África es preponderante. Durante los últimos cinco años, firmó acuerdos con una veintena de países, los más recientes con Malí (junio de 2019), Congo (mayo de 2019) y Madagascar (octubre de 2018). Globalmente prevén la formación de oficiales en Moscú, el envío de materiales militares nuevos y/o el mantenimiento de equipos preexistentes, ejercicios conjuntos, lucha contra el terrorismo y la piratería marítima –los detalles varían en función de la situación de los países y sus prioridades. En cambio, la apertura de bases militares permanentes, demasiado onerosas y poco útiles en términos operacionales, no parece estar a la orden del día, incluso a pesar de las demandas insistentes de algunos dirigentes de la región: durante su visita a Moscú, en noviembre de 2017, el presidente sudanés Omar Al Bashir había por ejemplo invitado a sus interlocutores a construir una base naval en el Mar Rojo. Propuesta reiterada en 2018, pero a la cual el Kremlin no accedió.

Además de los representantes del ministerio de Defensa, hay otro actor que se destaca en materia de cooperación en seguridad: Patrushev. Es a través suyo que los servicios de inteligencia discuten oficialmente con sus homólogos africanos, en especial en el marco de su conferencia anual sobre cuestiones de seguridad, a la cual invita a representantes de agencias de inteligencia de todo el mundo. La última, realizada en mayo de 2019 en Ufá, en el oeste de Rusia, contó con entrevistas con el jefe de los servicios de Namibia, Philemon Malima, así como con representantes de las agencias de inteligencia de Burundi, Túnez, Uganda, Egipto y Congo (5). La ciberseguridad y la lucha contra las “revoluciones de color” –un tema que preocupa a varios dirigentes africanos– fueron temas centrales de estas conversaciones.

La lucha antiterrorista y la contrainsurgencia constituyen temas relativamente recientes de esta cooperación en seguridad. Suelen tratarse en el marco bilateral oficial, pero a veces también de manera oficiosa, a través de actores privados cooptados. La relación entre Rusia y Nigeria hoy tiene como objetivo principal el combate contra el grupo yihadista Boko Haram. Así, militares nigerianos son enviados a Rusia para entrenarse, mientras que la agencia rusa encargada de las exportaciones de armas envió en 2016, y luego en 2018, una docena de helicópteros de ataque Mi-35M (en cambio, las informaciones que circularon sobre la posible venta de cazadores-bombarderos Su-30 no pueden ser confirmadas al día de hoy). En mayo de 2017, el ministro ruso de defensa Serguéi Shoigú mantuvo largas conversaciones en Moscú con su homólogo nigeriano Mansur Mohammed Dan Ali.

Mercenarios rusos

En Libia, en República Centroafricana, en Mozambique y en Sudán, en cambio, el Estado ruso –que no quiere enviar tropas regulares ni fuerzas especiales– delega la lucha antiinsurreccional en compañías militares privadas. Aunque es algo que preocupa especialmente a París, los “consejeros militares” privados que fueron enviados en apoyo a las autoridades oficiales de Bangui no combaten. En cambio, mercenarios rusos habrían participado a fines de 2018, en procedimientos con fuerzas de seguridad locales, en la represión del levantamiento sudanés que buscaba remover al presidente Al Bashir (6). En Mozambique –cuyo presidente, Filipe Jacinto Nyusi, viajó dos veces a Rusia en el otoño de 2019–, las fuerzas militares privadas tenían por misión contrarrestar a los grupos islamistas en la provincia de Cabo Delgado, una región clave para la ambiciosa estrategia de explotación gasífera del gobierno de Maputo (7).

En todos estos frentes, el balance es globalmente negativo. Los combatientes del grupo Wagner, que acompañaron al mariscal libio Khalifa Haftar no pudieron impedir la derrota de este último en la batalla de Trípoli. También sufrieron pérdidas sensibles en Mozambique y se habrían retirado de las zonas de combate apenas unas semanas después de su llegada. Su presunto rol en Jartum estuvo a punto de costarle caro políticamente a Moscú tras el cambio de régimen en 2019. En lo que respecta a la República Centroafricana, parecería que el Kremlin decidió institucionalizar allí la cooperación en aspectos de seguridad al abrir en Bangui una oficina de representación del ministerio de Defensa, lo cual, a mediano plazo, podría significar un nuevo equilibrio de la presencia rusa en desmedro de las empresas militares privadas.

En definitiva, el mayor éxito de Rusia en África es haber mejorado la percepción de su rol y de su influencia. Los países del continente la consideran nuevamente como un actor de primer plano que, como mínimo, puede ofrecerles cooperación económica y, eventualmente, contribuir a la seguridad interior y exterior, o representar una suerte de “tercera vía” diplomática entre los occidentales –generalmente percibidos como intrusivos en cuestiones de derechos humanos– y los chinos –ya que muchos en la región desearían reducir su influencia–. Visto desde Moscú, África constituye también un reservorio de votos en la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las sesiones en las que se discuten temas sensibles, como Donbás y Crimea. Así, varios Estados africanos votaron en contra (Sudán, Zimbabue) de la resolución de marzo de 2014 que denunciaba la anexión de la península por parte de Moscú, otros se abstuvieron (Argelia, Sudáfrica, Mali, Ruanda, Senegal...). La recepción temerosa reservada al texto sobrepasó

ampliamente la docena de países que votan tradicionalmente en contra de las resoluciones occidentales. Y el aislamiento diplomático de Rusia que pretendían generar Washington y sus aliados parece ser menos severo de lo previsto.

A contramano de una idea muy difundida, Rusia ya no es un “enano” económico en África. En 2018, sus intercambios comerciales con el continente pasaron la barrera de los 20.000 millones de dólares: una cifra desde ya inferior a la de China (204.000 millones) o a la de Francia (51.300 millones de euros), pero comparable a la de Brasil o a la de Turquía. Rusia busca diversificar la estructura de sus intercambios y privilegia a los sectores de las tecnologías de punta. Se posiciona en el mercado de los lanzamientos de satélites, como en el caso de Angola en 2017, pero también en Túnez, a partir de 2020. En el terreno nuclear civil, Rosatom multiplicó los acuerdos con países sin antecedentes para la instalación de filiales, por ejemplo en Zambia, Sudán o Ruanda –país con el que los contactos se incrementaron después de la visita del presidente Paul Kagame a Moscú, en junio de 2018. El proveedor de soluciones de seguridad informática Kaspersky Lab inauguró en mayo de 2019 una oficina de representación en Kigali, desde donde espera desarrollar su presencia en África oriental.

Cooperación sanitaria

Rusia apuesta cada vez más abiertamente al *hard power*, pero también sigue desplegando en África instrumentos de influencia de largo plazo orientados a las sociedades locales. Algunos medios de Estado (RT, Sputnik) en lengua francesa, inglesa, pero también portuguesa, se imponen como fuentes de audiencias significativas en muchos países (8). Su línea editorial insiste en la ausencia de pasado colonial ruso en la región y en la contribución de Moscú en las luchas antiimperialistas; un discurso con tonos por momentos anti francés que encuentra cierto eco en Malí, por ejemplo. Rusia también es muy activa en el campo de la cooperación sanitaria. Sudáfrica recientemente hizo pedidos de Avifavir, un tratamiento contra el Covid-19 propuesto para la exportación (9). En cambio, Egipto prefirió la vacuna china a la Sputnik V, a pesar de la insistencia de las autoridades rusas (10). Hace algunos años, el ministerio de Salud ruso y Rusal habían organizado una campaña de vacunación contra el virus del Ébola en Guinea.

Otro pilar del *soft power* (“poder blando”) ruso: la educación y la formación. En 2013, el número de estudiantes africanos que viajaban a hacer cursos universitarios civiles se estimaba en cerca de ocho mil (11). El nuevo director de la Agencia para la Cooperación, Evgueni Primakov –nieto del ex jefe del gobierno–, pretende aumentar el número de plazas gratuitas reservadas a estudiantes africanos, que hoy es de cerca de 1.800, y desarrollar un sistema de becas en el marco de un acuerdo con las empresas rusas activas en África (12). Hoy, Rusia sigue siendo un destino de estudios menos prestigioso que Europa o Estados Unidos, tanto por razones climáticas como a causa de las agresiones racistas que se difundieron en la prensa estos últimos años.

No obstante, el “gran regreso” de Rusia a África no tiene nada que ver con una marcha triunfal ni mucho menos. Muchos anuncios no fueron concretados: en 2017, Rostec abandonó la construcción de una refinería en Uganda, lo cual debilitó las perspectivas económicas rusas en África del Este. Otros, como el proyecto gasífero de Rosneft en Mozambique, tardan en concretarse. El programa nuclear civil en Sudáfrica, en el que Rosatom tenía grandes esperanzas, ha sido puesto entre paréntesis. La salida del presidente Jacob Zuma –que como

responsable de inteligencia de la ANC había tenido contactos estrechos con la KGB durante los años de lucha contra el apartheid– reveló la fragilidad de algunos puntos de apoyo de Rusia en el continente. Lo mismo puede decirse tras el derrocamiento del presidente sudanés Al Bashir y la renuncia del jefe de Estado argelino Abdelaziz Bouteflika, aunque hasta ahora esto no haya debilitado realmente las posiciones de Moscú en Jartum y Argel: los rusos pueden apoyarse en varios oficiales del ejército y de los servicios de seguridad formados en sus academias militares y de inteligencia desde la época soviética.

Moscú suele actuar a partir de las oportunidades, y no según una hipotética “gran estrategia” a escala continental. La coordinación entre los diversos actores de la política rusa tampoco es algo simple de lograr. Así, Shoigú y Patrushev tienen un peso político que en principio los dispensa de acordar con Mijail Bogdanov, vice ministro de Relaciones Exteriores y nuevo “Señor África” en Moscú. La articulación entre las compañías militares privadas y los servicios de inteligencia militar parece variar según los teatros de operaciones: es evidente en República Centroafricana o en Libia, parece ser más complicada en Sudán; esto puede impactar en los márgenes de maniobra que tienen quienes la politóloga Tatiana Stanovaia denomina “empresarios geopolíticos”. Al trabajar en general bajo influencia de estos últimos, los diversos asesores en imagen y en estrategia electoral rusos activos estos últimos años –por ejemplo en Madagascar– no consiguieron brillar por sus resultados debido a la falta de conocimiento de las realidades locales (13).

De ahora en más, la influencia estratégica de Rusia en África no debería aumentar de manera notable. El efecto de recuperación que siguió a su desaparición durante los años 1990 tiende a agotarse. Visto desde Moscú, el continente africano sigue siendo un teatro periférico –de hecho, figura último en el orden de prioridades regionales definidas por la concepción de política exterior desarrollada en noviembre de 2016–. Desde luego la cumbre de Sochi generó movimientos y permitió movilizar a la máquina del Estado al más alto nivel. Pero, ante las primeras dudas, y cuando la crisis económica hace prever que se reducirán los recursos a disposición, la clave para los actores de la relación ruso-africana será convencer al Kremlin de la pertinencia de esta inversión a largo plazo. ■

1. Joseph L. Nogee y Robert H. Donaldson, *Soviet Foreign Policy Since World War II*, Pergamon Press, Nueva York, 1981.

2. *Ibid.*

3. Arnaud Dubien, “La Russie et l’Afrique: mythes et réalités”, *L’Observatoire franco-russe*, N°19, Moscú, octubre de 2019.

4. Arnaud Kalika, “Le ‘grand retour’ de la Russie en Afrique?”, *Russie. Nei.Visions*, N° 114, Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), París, abril de 2019.

5. *Kommersant*, Moscú, 20-6-19 (en ruso).

6. “Russian military firm working with Sudan security service: sources”, *Sudan Tribune*, París, 8-1-19, <https://sudantribune.com>

7. Tristan Coloma, “La stratégie économique-sécuritaire russe au Mozambique”, *Notes de l’IFRI*, mayo de 2020.

8. Kevin Limonier, “Diffusion de l’information russe en Afrique. Essai de cartographie générale”, Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar, París, 13-11-18.

9. “Russia’s coronavirus drug to be sold in 23 countries”, *The Moscow Times*, 24-9-20.

10. “Why Egypt chose Chinese Covid-19 vaccine over Russian one”, *Al-Monitor*, 17-9-20, www.al-monitor.com

11. Alexandra Arkhangelskaya y Vladimir Shubin, “Russia’s Africa Policy”, *Occasional Paper*, N° 157, South African Institute of International Affairs, Johannesburgo, septiembre de 2013.

12. *Kommersant*, 9-9-20 (en ruso).

13. “How Russia meddles abroad for profit: cash, trolls and a cult leader”, *The New York Times*, 11-11-19.

*Director del Observatorio franco-ruso, Moscú.

Traducción: Heber Ostroviesky

La capital rusa quiere limpiar su imagen

Moscú quiere ser una “ciudad global”

por Vladimir Pawlotsky*

Desde hace diez años, la capital rusa cuida su comunicación. Adepta al marketing urbano de moda, la municipalidad de Moscú busca atraer a inversores y ejecutivos de multinacionales, al igual que las otras grandes metrópolis mundiales. Pero esta política no logra disimular el control que ejerce el Kremlin, al servicio de mayores brechas territoriales.

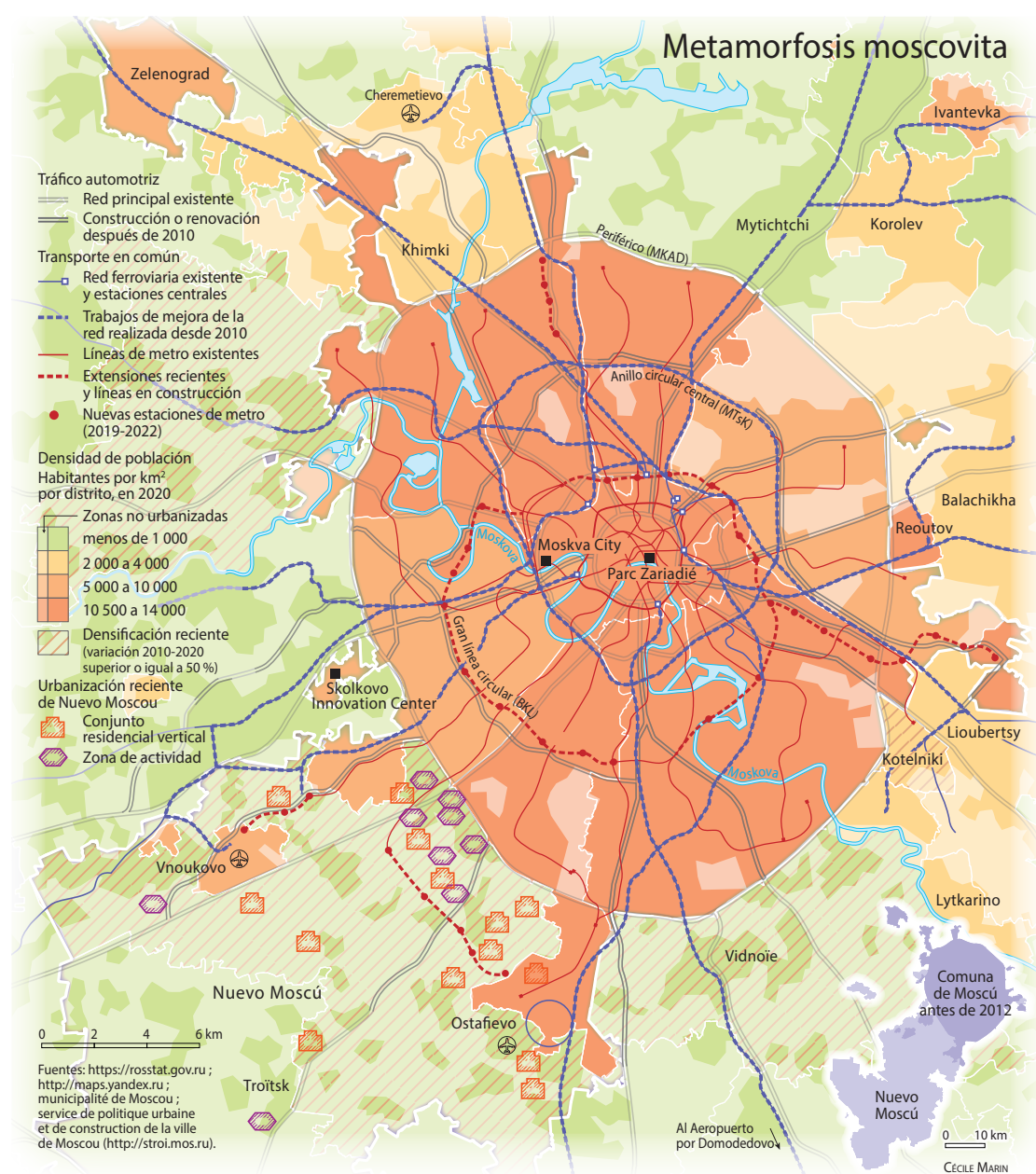
Al pie del Kremlin, los turistas –rusos o extranjeros–, armados con palos telescópicos para sacarse fotos, se amontonan sobre el puente flotante del nuevo parque Zaryadye, que sobrevuela el río Moscova. En una síntesis de la flora rusa, este parque integra paisajes de estepa, tundra, bosque y humedal. También tiene una cueva de hielo, un museo arqueológico, restaurantes gourmet, un centro multimedia donde se llevan a cabo proyecciones de películas y exposiciones, un auditorio para 1.600 personas y un anfiteatro al aire libre con una capacidad similar, en el que se realizan, desde la inauguración del parque el 9 de septiembre de 2017, los eventos internacionales más prestigiosos de la capital. En 2018, el parque Zaryadye, orgullo de los ediles, fue incluido en el ranking de la revista estadounidense *Time* como uno de los lugares más lindos del mundo para visitar.

Primer parque público moscovita que se construyó en más de cincuenta años, Zaryadye forma parte de un proyecto de embellecimiento y puesta en valor de la capital ante el mundo que emprendió el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, hace unos diez años. En 2010, cuando asumió su cargo, este ex funcionario federal –seguidor de larga data del presidente Vladimir Putin– se propuso limpiar la imagen de la ciudad para impulsarla en la competencia mundial que libran las grandes metrópolis. En otras palabras, el objetivo consiste en competir con Nueva York, Londres, Tokio o París y convertir Moscú en una “ciudad global”, según el concepto popularizado por la socióloga y economista estadounidense Saskia Sassen, quien por otra parte integró el jurado del concurso que seleccionó a los diseñadores del parque.

En una economía dependiente del precio –muy volátil– de los hidrocarburos, Moscú debe convertirse en un centro mundial de estabilidad financiera e innovación. Rusia, y sobre todo su plataforma privilegiada para establecer inversiones extranjeras, la metrópolis moscovita, buscan captar los flujos económicos y financieros internacionales al darle asilo a las oficinas centrales y a las filiales de empresas transnacionales, y al desarrollar actividades culturales así como el turismo.

Construir un relato metropolitano

Para eso, es preciso cumplir con una serie de condiciones. Además del respeto a la propiedad privada, un sistema fiscal ventajoso, una burocracia laxa y una sede exclusiva, las empresas transnacionales buscan un entorno urbano atractivo e infraestructuras colectivas de calidad para brindarles a sus ejecutivos. Estos son parte de los miembros de la famosa “clase creativa” –motor de la nueva econo-



mía– junto con científicos, ingenieros, artistas, trabajadores de medios de comunicación, educación, salud y justicia. De hecho, el padre de este concepto, Richard Florida (1), visita Moscú. En 2019, fue el invitado de honor del Moscow Urban Forum (MUF), una gran convención sobre cuestiones urbanas que reúne cada año a varios miles de espectadores y a cientos de actores –funcionarios públicos, economistas, urbanistas– de más de cincuenta países. Y que desde 2017 se celebra en... el parque Zaryadye.

Desde 2018, la compañía Mosinjproekt, coorganizadora del evento y “brazo constructor” de la municipalidad (que posee el 100% de la empresa), recurre a los servicios (por 10.000 euros mensuales) (2) de un representante de primera línea: Maurice Leroy, quien ocupa el cargo de subdirector general. El ex diputado del departamento francés de Loir-et-Cher y ex ministro de Vivienda del tercer gobierno de François Fillon (2010-2012, a cargo en ese entonces del Gran París), es el responsable de los grandes proyectos internacionales de la empresa pública moscovita. Leroy supervisó, entre otras cosas, la firma de un programa de cooperación entre Sobianin y el presidente de la Metrópolis del Gran París, Patrick Ollier, el 4 de julio de 2019. El acuerdo permitió que se posicionaran varias de las principales empresas francesas, como

Électricité de France (EDF) y Suez. El MUF ofrece así una oportunidad única al gobierno municipal para promover los resultados de su política urbana ante los dirigentes e inversores internacionales.

Actualmente, Moscú está cubierta de eslóganes de un metro de alto con letras mayúsculas, que se encuentran en determinadas plazas del centro, y de logos coloridos y floreados. Se instalaron redes wi-fi por todas partes y la identidad visual de la municipalidad pasó a elaborarse en colaboración con la población, a través de aplicaciones disponibles para smartphones. En 2018, en el subterráneo, las pantallas transmitían el canal municipal Moskva 24, en el que, entre dos imágenes de hinchas brasileños haciendo jueguitos en la Plaza Roja durante el Mundial de Fútbol, se veía al alcalde inaugurando infraestructuras de todo tipo: parques, estaciones de subte, rutas, hospitales e incluso barrios enteros en las afueras de la ciudad. Porque construir ya no es suficiente; también hay que comunicarlo mediante la edificación de un relato metropolitano: el de una ciudad en movimiento, conectada a los grandes flujos mundiales.

Violencia y corrupción

Con esta gran dosis de comunicación, Sobianin pretende pasar la página de la era Yuri Luzhkov, alcalde de la capital entre 1992 y

2010, cuyo balance es duramente criticado en la actualidad. En la mente de los ciudadanos, su mandato quedó asociado a la explosión demográfica de la ciudad. En efecto, en la década de 1990, las empresas constructoras empezaron a obtener permisos de obra sin dificultad alguna. La densidad de la ciudad pasó de 8.280 habitantes por kilómetro cuadrado en 1989 a 10.681 en 2010, una cifra cercana a la de las grandes ciudades asiáticas. Atravesada por las vibraciones de los taladros, Moscú arrastraba también la mala imagen que se había forjado en la primera mitad de los años noventa, cuando la tasa de homicidio se cuadruplicó. Por otra parte, incluso después de que los grupos criminales hubieran cesado los tiroteos en medio de las calles, la ciudad se vio salpicada con regularidad por asuntos de corrupción.

El alcalde Luzhkov encarnaba en sí mismo el concepto de conflicto de intereses. Su mujer, Yelena Baturina, con quien se casó el día anterior en vísperas de su nombramiento como jefe de la alcaldía en 1991, se convirtió en la directora de Inteko, el gigante de la construcción. Baturina se hizo rica durante el mandato de su marido, al punto de convertirse en la primera mujer multimillonaria del país. Asimismo, juntos pusieron en marcha, en un estilo que mezclaba pastiche y modernismo, grandes proyectos relacionados con el patrimonio histórico, que apuntaban a desdibujar la marca del sovetismo por un retorno a los orígenes prerrevolucionarios. La reconstrucción entre 1995 y 2000 de la Catedral de Cristo Salvador, que había sido dinamitada en 1931 por el poder comunista, y la inauguración en 1997 de una estatua del emperador Pedro el Grande, erigido sobre un barco con obeliscos de bronce, reflejan el gusto dudoso de la época.

Pero uno de los aspectos más estructurantes de la política de Luzhkov fue la transición de la capital hacia la economía de libre mercado. Bajo su mandato, las superficies comerciales y de oficinas, que prácticamente no existían en la URSS, se multiplicaron. Su principal hazaña fue la construcción, iniciada en 1998, del distrito financiero Moskva City, que hoy cuenta con siete de los diez rascacielos más altos de Europa. Erigido en la orilla del Moscova, frente a los edificios estalinistas de la avenida Kutúzov, donde vivían dignatarios del partido, este distrito simboliza la entrada de la capital rusa en el grupo de las metrópolis mundiales. Sin embargo, en 2006, con 5,5 millones de metros cuadrados de oficinas, es decir, unos 0,56 m² por habitante, Moscú seguía estando muy por debajo de los promedios internacionales. En la misma época, París, por ejemplo, contaba con 4,5 metros cuadrados

de oficinas, es decir, unos 0,56 m² por habitante, Moscú seguía estando muy por debajo de los promedios internacionales. En la misma época, París, por ejemplo, contaba con 4,5 metros cuadrados

de oficinas por habitante. La demanda moscovita era tal que el precio anual del alquiler de oficinas por metro cuadrado se disparó. Según un informe de la consultora inmobiliaria británica Knight Frank (3), en 2008 alcanzó los 900 euros, lo que la situó por delante de París (840 euros), Singapur (826 euros) y Dubai (780 euros), pero por detrás de Tokio (1.400 euros) y Londres (1.017 euros).

Regreso a la órbita federal

Aunque la relativa escasez de superficies de oficinas debilita el atractivo internacional de la metrópolis, su distribución también plantea problemas. Un tercio de los empleos están situados en el distrito central de la capital, que representa menos de un décimo de su superficie (4). A los flujos cotidianos de millones de trabajadores moscovitas se suman los 1,4 millones de trabajadores que vienen de la región de Moscú, es decir, el 30% de su población activa. Entre ellos, algunos viven en las ciudades dormitorio densamente pobladas que limitan con la capital o en las pequeñas ciudades situadas a cien kilómetros de la autopista de circunvalación (MKAD) y realizan trayectos de ida y vuelta de entre cuarenta y doscientos cuarenta minutos por día (5). En los alrededores de las ciudades dormitorio, también empezaron a surgir superficies comerciales, grandes consumidoras de terrenos. En 2010, por ejemplo, el primer local de Ikea abrió sus puertas en Jimki, un suburbio situado al noroeste de la capital, y en 2002, Auchan (la cadena de supermercados francesa) siguió los mismos pasos. Rápidamente, cientos de marcas rusas y extranjeras ocuparon la autopista de circunvalación, en el cruce con las autopistas federales, para maximizar su alcance de mercado.

Tras la caída de la URSS, la ampliación del acceso al automóvil particular acarrió importantes reconfiguraciones del tejido urbano. La tasa de motorización aumentó drásticamente, algo raro en una gran ciudad europea a fines del siglo XX. Pasó de 113 a 308 autos por cada 1.000 habitantes entre 1993 y 2016. Y esto sucedió en una ciudad cuyo plano general, en el año 2000, no preveía más de 8,5 millones de habitantes para 2025, mientras que hoy cuenta con alrededor de 13 millones. Consecuencia lógica: el sistema de transporte de Moscú es uno de los más saturados del mundo (6).

En 2010, la elección de Sobianin, ex jefe de la administración presidencial (2005-2008) y ex viceprimer ministro de la Federación (2008-2010), marcó una ruptura. Con la designación de altos funcionarios federales al frente de los principales departamentos de la administración municipal, Moscú volvió a estar en manos federales después de dieciocho años de relativa autonomía política. Esta recuperación del control se vio acompañada, algunos meses más tarde, del anuncio de una nueva política urbana voluntarista. El 17 de junio de 2011, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presi-

dente Dmitri Medvédev anunció que quería ampliar las fronteras de la municipalidad y transferir las principales instituciones federales –sobre todo las Cámaras bajas y altas del Parlamento y la Fiscalía General– hacia los territorios anexados, en un amplio distrito administrativo, con el fin de liberar el centro de la ciudad de las actividades burocráticas.

“Los negocios siempre quieren estar cerca del gobierno, los ministerios y los organismos estatales”, afirmaba Sobianin. El alcalde estaba convencido de que este nuevo territorio sería un imán de inversiones y que constituiría el principal instrumento de su política de reorientación de los flujos de transporte (7). El presidente les pidió a Sobianin y a Boris Gromov, entonces gobernador de la región de Moscú, que seleccionaran un territorio para ampliar la capital. Los funcionarios encontraron una “corbata” de tierra de unos 1.480 kilómetros cuadrados sobre un eje sur-oeste que multiplicó el tamaño total de la ciudad por 2,4. El territorio, bautizado “Nueva Moscú”, tenía una población de apenas 232.000 habitantes y prometía a la capital importantes perspectivas de despliegue. Después de esta anexión, aprobada el 1º de junio de 2012, Moscú, con sus 2.561 kilómetros cuadrados (unas veinticinco veces el tamaño de París intramuros), se convirtió en la sexta ciudad más grande del mundo, con una densidad promedio de 4.919 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, desde un punto de vista puramente estadístico, dos veces menos que antes de la anexión.

Competencia internacional

A las autoridades rusas les gusta comparar la Nueva Moscú con el Gran Londres (1999) o con la Metrópolis del Gran París (2016). En el caso británico, un nivel administrativo suplementario coordina la capital y el gran anillo londinense, y sobre esta estructura, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tiene la mayor parte del poder. Por el contrario, la Metrópolis del Gran París consiste en un dispositivo de coordinación de 131 municipalidades. Estas dos configuraciones difieren mucho del caso moscovita, ya que la capital rusa absorbió, por anticipado, territorios poco urbanizados. Probablemente sería más pertinente compararse con Hanoi, otra ciudad poscomunista que triplicó su superficie en 2008 después de anexar la provincia limítrofe de Hà Tây. Pero esa comparación sería menos prestigiosa...

Para diseñar la organización de este nuevo territorio, el municipio de Moscú lanzó en enero de 2012 una gran competencia internacional, con diez equipos candidatos. El estudio estadounidense Urban Design Associates ganó el concurso y propuso articular doce “bloques funcionales” (industrial, administrativo, comercial, sanitario, educativo, científico, turístico, logístico, etc.) alrededor de un nuevo centro administrativo federal. Este proyecto, que estaba pensado para 1,7 millones de personas y contemplaba la creación de

800.000 puestos de trabajo, preveía conectar la Nueva Moscú con la “ciudad vieja” mediante un sistema de transporte rápido y eficaz.

Sin embargo, en su mayoría, estos proyectos quedaron trunco y solo vieron la luz sobre folletos de papel satinado. Sin que fuera anulado oficialmente, el traslado de las instituciones políticas desapareció del programa. Ante la prensa, los funcionarios adujeron que Putin (quien volvió a la presidencia en 2012) quería darle prioridad a la financiación de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que tendría lugar en Vladivostok en 2012 y a los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014.

Al no recibir a las instituciones federales, la Nueva Moscú se convirtió en un paraíso para las constructoras, tal como su homólogo francés luego del proyecto del Grand Paris Express (8). El ballet ininterrumpido de topadoras da cuenta de ello. Las ocho estaciones del metro que se construyeron para unir la ciudad nueva con la red existente cumplen el papel de descomunales generadoras de plusvalía del suelo. Y otras diecisiete estaciones deberían inaugurarse de acá a 2035. Según el ayuntamiento, ya se dio inicio a la obra de más de 14 millones de metros cuadrados de viviendas y más de 4,3 millones de metros cuadrados de superficies comerciales. La población de la Nueva Moscú pasó de 232.000 personas en 2012 a 404.000 en 2020, lo que supone un aumento del 74%. Para este mismo período, los datos oficiales pronostican la apertura de 170.000 espacios de trabajo. Sin embargo, ya se están observando los primeros casos de congestión de la red. La prensa local señala embotellamientos y saturación de las líneas del metro puntualmente en estas zonas, ya que los habitantes van a trabajar al centro gracias a las nuevas estaciones, a las que suelen acceder por minibus.

Consulta popular

Tras tomar nota del estancamiento del proyecto para trasladar las instituciones, el alcalde de Moscú cambió de estrategia. Mientras que los ingresos fiscales de la ciudad se disparaban (+11,3% entre 2015 y 2016) y que el ministro federal de Finanzas estudiaba la posibilidad de reducir el presupuesto moscovita en beneficio de las demás regiones (9), la capital necesitaba un plan alternativo. Así, en 2017, se formalizó un ambicioso programa de renovación urbana, cifrado en 100.000 millones de rublos (1.500 millones de euros). Su objetivo: demoler cinco mil edificios vetustos. Este parque de viviendas, constituido principalmente por *krushchovkas* –edificios prefabricados construidos en serie entre 1957 y 1968, cuando Nikita Jrushchov dirigía la URSS–, comprende 350.000 departamentos en los que viven más de un millón de personas, es decir, aproximadamente uno de cada diez moscovitas. Según el decreto municipal del 1º de agosto de 2017, su destrucción tiene por objetivo “dar una imagen moderna de la capital de la Federación de Rusia” y, al mismo tiempo, acompañar “la formación de una estructura policéntrica”. En una entrevista concedida al portal de noticias de economía RBK, el ministro federal de la Construcción, Mikhail Men, anunció la relocalización de los habitantes: “En el mismo barrio o cerca, pero se los prometo; ¡no en la Nueva Moscú!” (10); una manera de admitir disimuladamente el fracaso de esta última. Además, los departamentos tendrán una superficie equivalente a la de los antiguos, pero en edificios mucho más altos (¡de hasta setenta pisos!) (11) y mixtos, es decir, integrados por viviendas, oficinas y comercios. La idea es introducir en barrios, hasta ahora principalmente residenciales, nuevas funciones para “reducir [la necesidad de movilidad de la población y] la ocupación en las infraestructuras de transporte” (12). De este modo, cada barrio debe convertirse en un islote de vida relativamente autónomo –un polo– en el que los habitantes residan, puedan encontrar trabajo y mandar a sus hijos al colegio.

Este programa, que fue anunciado un año antes de las elecciones municipales y presidenciales de 2018, suscitó una breve pero enérgica oposición. La municipalidad respondió rápidamente y lanzó, del 15 de mayo al 15 de junio de 2017, una gran consulta popular en la aplicación móvil “Ciudadano Activo”. Haciendo unos clics en sus smartphones, los habitantes –muchos de los cuales, desde 1992, recibieron gratuitamente un título de propiedad privada de la vivienda en la que residían durante la época soviética– pudieron expresarse sobre el destino de su inmueble. Si más de un tercio de los copropietarios se oponía a la demolición, ésta era anulada. El resultado de la votación representó un éxito para la municipalidad: solo el 11% de los edificios registrados se retiraron de la lista de las demoliciones.

Así continúa la densificación urbana que comenzó bajo el mandato de Luzhkov. Esta vez, se apoya en las nuevas tecnologías, que permiten mitigar los posibles conflictos sociales y a la vez recabar datos personales (ver recuadro). A fines de los años 2000, la municipalidad apenas se preocupaba por la “democracia participativa”. Así, por ejemplo, las autoridades falsificaron en masa las firmas de los propietarios de los departamentos para asignar a sindicatos amigos la gestión de los edificios de viviendas de la capital... Los métodos actuales, inspirados en el marketing urbano, no por ello dejan de constituir un incumplimiento.

Todos estos proyectos alteran la vida de los moscovitas. Muchos expertos temen que la anexión de territorios y la “renovación” del viejo Moscú, lejos de reequilibrar el esqueleto de la capital, provoquen nuevos problemas. Moscú por sí sola captó el 45% de los 8 millones de nuevos habitantes urbanos con los que cuentan las quince ciudades millonarias rusas desde 1989, y la tendencia no está cerca de revertirse. “La vida dinámica y activa de Rusia, en su enorme territorio, no puede concentrarse en unas pocas megalópolis”, indicaba Putin en 2018 en su discurso presidencial ante el Parlamento, con motivo de su investidura. ¿Autocrítica? No precisamente. “Las grandes ciudades deben difundir su energía, grandes de apoyo para un desarrollo espacial armonioso y equilibrado de toda Rusia”, agregaba (13). Conque “difundir su energía”... En un contexto de hipercentralización política y presupuestaria (véase “Ocho por ciento de la población”), el mito del derrame parece tener aun un futuro prometedor. ■

1. Richard Florida, *The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life*, Basic Books, Nueva York, 2002.
2. David Bensoussan, “Quand les Russes recrutent d'anciens députés français”, *Challenges*, París, 5-1-19.
3. “Global Real Estate Markets – Annual Review and Outlook”, Knight Frank, Londres, 2009.
4. Pascal Marchand, *Moscou*, Autrement, col. “Atlas Mégapoles”, París, 2010.
5. Alla Makhrova y Roman Babkine, “Metodología para delimitar los límites de la aglomeración moscovita basada en datos de operadores celulares” (en ruso), *Estudios Regionales*, Moscú, N° 2, 2019, www.smolgu.ru
6. Hélène Richard, “La recuperación del transporte público”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, septiembre de 2015.
7. Entrevista en la radio Ekho Moskvy, 17/06/11.
8. Hacène Belmessous, “Le Grand Paris ou le pacte pour les bétonneurs”, *Le Monde diplomatique*, París, octubre de 2018.
9. *Forbes*, edición rusa, Moscú, 27-4-19.
10. RBK, 27-2-17, www.rbc.ru
11. *Kommersant*, Moscú, 29-12-19.
12. Decreto N-497, 2017. Ley del Gobierno de Moscú N 497-PP del 1-8-17, “Sobre el programa de renovación del parque de viviendas en la ciudad de Moscú”.
13. Citado en Jean Radvanyi, “La nouvelle ‘Stratégie de développement territorial’ russe. Entre volontarisme et utopie?”, *Regards de l'observatoire franco-russe*, París, 2020.

*Doctorando en Geografía en el Instituto Francés de Geopolítica (Universidad de París VIII).

Traducción: Andrea Romero

Espejismos de la democracia digital

Además de organizar grandes concursos internacionales de arquitectura, la capital rusa ha incurrido en las últimas innovaciones en materia de “democracia digital local”. El objetivo: conectarse a las últimas tendencias del marketing urbano para romper la imagen de la ciudad soviética monumental, rígida y autoritaria, y unirse al club de las “ciudades globales”.

En 2015, el gobierno lanzó la plataforma Internet “Ciudadano Activo”, que hoy cuenta con 3 millones de usuarios, 140 millones de opiniones recogidas y cerca de 4.500 preguntas sometidas a votación. Estas últimas tocan veinticuatro grandes temáticas como el transporte (“¿Moscú necesita una nueva línea de metro?”), la ecología (“¿De qué tipo de arbustos deberían ser los cercos de tal barrio?”), la construcción (“¿Deberíamos hacer más hincapié en los estacionamientos, las áreas de juego o los caniles para mascotas?”) e incluso el deporte (“¿En qué estadio moscovita preferiría presenciar el Mundial de Fútbol de Playa?”).

La idea no es someter al voto de los ciudadanos las preguntas más importantes –al contrario– sino de hacerles las preguntas cuyas respuestas son susceptibles de coincidir con los objetivos de las autoridades, contribuyendo así a legitimar el accionar municipal. Para asegurarse de que la plataforma sea utilizada de manera sostenida a pesar de los temas más bien anecdóticos que pone sobre el tapete, la municipalidad le da a los usuarios más asiduos regalos varios: souvenirs, ropa, entradas para espectáculos, tickets de estacionamiento, boletos de transporte, códigos de descuento, etc. Esta estrategia clientelista le permite recabar diversos datos personales. Los cuestionarios no solo no son anónimos sino que, para poder participar de ellos, también hay que proporcionar una serie de informaciones: lugar de residencia y trabajo, correo electrónico, cantidad de hijos, profesión, sensibilidad estética y política, etc. Todos datos que pueden resultar útiles para la propaganda electoral dirigida...

Una tesis apreciada por los intelectuales del Oeste

¿Era antisemita Alemania Oriental?

por Sonia Combe*

En el debate sobre el racismo y la xenofobia que agita a Alemania, el antisemitismo ocupa un lugar aparte. A veces, su eco resuena ruidosamente, como en julio pasado, durante el juicio al autor del ataque contra la sinagoga de Halle, el 9 de octubre de 2019, que produjo dos muertos entre los pasantes.

Halle se encuentra en el territorio de la antigua República Democrática Alemana (RDA), esa Alemania comunista nacida en 1949 y desaparecida en 1990. Aunque el asesino haya nacido tras la caída del Muro, este hecho consolidó a los partidarios de una tesis de moda: si los judíos vuelven a estar en peligro en la República Federal, la culpa es de la difunta RDA, como lo afirma por ejemplo el profesor de Ciencias de la Educación de Alemania (Occidental) Micha Brumlik (1). En un artículo titulado “¿Hasta qué punto la RDA era marrón [es decir, ‘nazi’]?”, el académico pone de manifiesto varios elementos incriminatorios: ese Estado descansaba en “estructuras jerárquicas autoritarias” que serían la prueba de una continuidad con el Tercer Reich; se habría negado a proceder a una “confrontación con su pasado”; habría reintegrado a antiguos nazis, chantajeándolos, para estar seguros de su fidelidad. Por último, la RDA, no contenta con no indemnizar a las víctimas del genocidio y al Estado de Israel, habría llevado a cabo una política antisionista sospechosa con el apoyo de judíos de Alemania Oriental. “El antisemitismo es el ‘socialismo de los imbéciles’, había declarado el dirigente socialdemócrata August Bebel. El antisemitismo es el socialismo de una dictadura llamada RDA, se siente uno tentado de completar”, concluye Brumlik (2).

Amenaza judeo-bolchevique

Resulta difícil encontrar una acusación más radical. Emérito académico, nacido de padres judíos alemanes que habían escogido volver a Alemania Occidental después de la guerra, Brumlik es una autoridad tanto en el seno de los círculos universitarios como en los medios de comunicación, que de buena gana difunden su voz. Vislumbrando en la RDA la “segunda dictadura antisemita del siglo XX”, Jeffrey Herf, un historiador estadounidense repite un sonsonete análogo: a partir de 1967, la RDA habría intentado destruir Israel con la ayuda de la extrema izquierda de Alemania Occidental (3). ¿Cómo? Realizando alianzas con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y los países árabes; vendiéndoles armas. Si bien la RDA era oficialmente antisionista –al tiempo que afirmaba el derecho a la existencia de Israel–, la equivalencia entre esa posición política y el antisemitismo sigue siendo un elemento de propaganda (4).

Si se exceptúa el período 1949-1953, en que la URSS de Josef Stalin se hundía en la paranoia antisemita, alentando a más de quinientos judíos a abandonar la RDA, la acusación de antisemitismo aún no había sido inscrita tan abiertamente en la cuenta de las fechorías de la Alemania comunista. Desde fines del siglo XIX y principios del XX, los nacionalistas más bien habían peleado contra la izquierda “judaizada” y la amenaza “judeo-bolchevique” (5). El odio al comunismo, al igual que el antisemitismo, era constitutivo de la ideología nazi, que concebía el marxismo como una creación judía que había que eliminar.

La respuesta a Brumlik provino de una ensayista nacida en Berlín Pankow –por lo tanto,

al Este– diez años antes de la caída del Muro: Charlotte Misselwitz (6). Su texto evoca a la pediatra del hospital berlinés de La Caridad Ingeborg Rapoport, que falleció en 2017 a los 104 años. Exiliada en Estados Unidos bajo el Tercer Reich como judía y comunista, había escogido volver a su casa, en el Este, y hacer carrera en la RDA. Testigo de la multiplicación de actos xenófobos y antisemitas desde la reunificación, Rapoport proponía la explicación inversa a la de Brumlik y Herf: la RDA, ¿no se había reunificado con la República Federal de Alemania (RFA), un país donde antiguos nazis habían podido hacer carrera en puestos elevados? A su juicio, los judíos no estaban en peligro en tiempos de la RDA; ¡pero volvían a estarlo ahora!

Para los partidarios de la RDA antisemita, es un disparate. Harry Waibel, un historiador (occidental) que consagró su carrera a pintar la Alemania Oriental de marrón, dice haber sacado cifras abrumadoras de archivos a los cuales habría sido el primero, incluso el único, en tener acceso: la Stasi (la policía política de Alemania Oriental) habría consignado 7.000 delitos racistas y antisemitas, entre los cuales 145 profanaciones de cementerios judíos y 200 “ataques tipo pogromo” sobre el conjunto del territorio, así como “diez linchamientos en 400 ciudades”. Si bien las barras bravas, en forma paralela a los partidos de fútbol, y la exhibición de signos nazis, eran conocidos, la amplitud que les atribuye Waibel sorprendió a los ciudadanos de la antigua RDA. Por cierto, las autoridades mostraban menos entusiasmo en reprimir a los delincuentes neo-

nazis que a los opositores al régimen, pero las cifras puestas de manifiesto por el historiador siguen siendo cuestionables. Y ninguna búsqueda análoga fue llevada a cabo en la antigua RFA, donde, pese a la “confrontación con el pasado”, el anticomunismo del Estado implicó una gran indulgencia tanto frente a los antiguos nazis como a los neonazis.

Neonazis en la policía

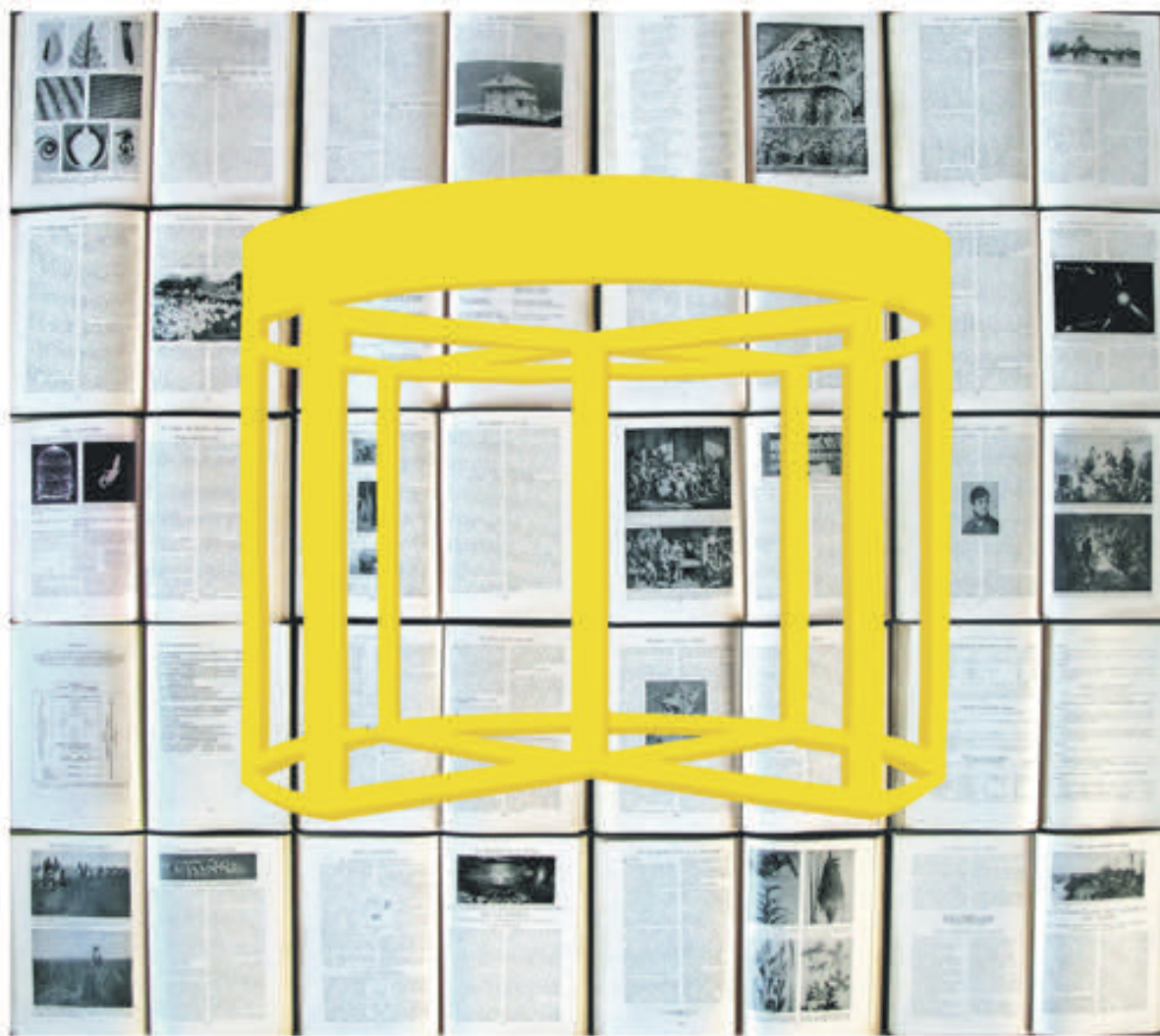
Estudios recientes revelan que los servicios de inteligencia occidentales –el Bundesverfassungsschutz (VS, seguridad interior) y el Bundesnachrichtendienst (BND, seguridad exterior)– consagraban lo esencial de su energía en vigilar a la izquierda y en perseguir a los miembros de la Fracción del Ejército Rojo (7). Al punto de descuidar a la extrema derecha, de la que ahora se descubren viejos focos en la policía y en el ejército; el más reciente: la pertenencia del jefe del sindicato de la policía de Berlín al movimiento neonazi (8). En 1991, recuerda Misselwitz, apoyándose en investigaciones accesibles –contrariamente a los archivos “exclusivos” de Waibel–, se estimaba que el 16% de la población occidental alimentaba prejuicios antisemitas, contra el 6% de la población del Este. En 1994, el 40% de los alemanes occidentales pensaban que se concedía demasiada importancia al genocidio de los judíos, contra el 22% de los alemanes orientales.

No importa: defendida por la mayoría de los historiadores, la convicción según la cual la RDA habría esquivado la confrontación con el pasado nazi se difunde. Para Norbert Frei,

figura prominente de la disciplina que ejerce en la Universidad de Jena, la política cultural antifascista de la RDA no habría sido más que rutina y discursos huecos (9) –algo que parecen contradecir las investigaciones de opinión mencionadas más arriba–; en resumidas cuentas, ¡algo habría quedado! Al igual que Brumlik, Frei culpa a esas famosas “estructuras jerárquicas autoritarias” que estarían en el origen de tendencias fascistoideas, un viejo tema cuya versión más jocosa fue dada involuntariamente por Christian Pfeiffer. En 1999, este criminólogo de Alemania Occidental había desentrañado el origen de esas inclinaciones en la práctica que consiste en hacer sentar a todos los niños de Alemania Oriental en la peleta a la misma hora en los jardines de infantes de la RDA... Ahora bien, luego de esa experiencia traumática, los ciudadanos alemanes del Este tuvieron ocasión de descubrir otras “estructuras jerárquicas autoritarias”: aquellas de la empresa privada. Como lo aprendieron muy rápido los “Ossies”, si bien en la RDA era muy peligroso criticar al jefe de Estado, no se corría el riesgo de quedarse desocupado por haberse opuesto a su superior en el trabajo. Hoy ocurre a la inversa.

El chantaje

Queda una cuestión de fondo: la desnazificación en la RDA ¿fue expeditiva? Más rápida que en el Oeste, por cierto, porque había mucho menos que hacer que en la RFA, donde habían huido la mayoría de los cuadros comprometidos con el Tercer Reich. ¿Reintegró la RDA a antiguos nazis? Probablemente, pe-



Sebastián Maquieira, Puerta colectiva de información giratoria (enciclopedias y esmalte /vidrio), 2015
(www.sebastianmaquieira.cl - Instagram: sebmaquieira)

ro en menor número que la RFA. ¿Los habrá extorsionado con su pasado? Es probable. El chantaje es un método utilizado por todos los servicios de inteligencia. Pero es cierto que, a diferencia de la Stasi, los servicios de inteligencia interior y exterior del Oeste no podían recurrir al chantaje contra los antiguos nazis, al estar ellos mismos, hasta los años setenta, en gran medida compuestos por ex miembros del Partido Nacionalista.

El BND había sido puesto en marcha por un exoficial de la Wehrmacht, Reinhard Gehlen, gracias a Estados Unidos, que atribuía a los nazis una suerte de superpoder contra el comunismo (10). Toda la burocracia estatal de la RFA estaba contaminada. Como lo estableció en sus conclusiones el grupo de investigación sobre la historia del Ministerio del Interior, “en julio de 1961 el porcentaje de antiguos miembros del Partido nazi entre los cuadros superiores alcanzaba el 67%”, contra menos de un décimo en el Este (11). Sin contar que ex servidores del Tercer Reich, como el famoso Hans Globke, anticomunista convulsivo que estuvo en el origen de las leyes antisemitas de Núremberg, ocupaban lugares destacados sin que nadie los importunara. Globke no era otro que el jefe de gabinete de Konrad Adenauer, el primer canciller de la RFA.

Pago de indemnizaciones

En cambio, resultaría más difícil encontrar antiguos nazis a la cabeza del gobierno de Alemania Oriental, dirigido hasta su desaparición por una víctima del Tercer Reich, Erich Honecker. En 1952, mientras la Alemania de Adenauer negociaba con Tel Aviv sus “reparaciones” por el asesinato de seis millones de judíos, o sea, una ayuda financiera a Israel a cambio de la adquisición de productos alemanes, los comunistas Walter Ulbricht (secretario general del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania) y Wilhelm Pieck (presidente de la República) dirigían la RDA. Aunque poco simpáticos, ambos habían pasado la guerra en el exilio en la URSS; otros,

como el ex socialdemócrata Otto Grotewohl, primer ministro entre 1949 y 1964, salían de las mazmorras nazis; Albert Norden, miembro influyente del buró político del Partido Comunista, era hijo de un rabino. ¿Por qué habrían debido sentirse culpables de ese crimen? La URSS ya estrangulaba a la RDA con reparaciones en material ferroviario y máquinas herramienta, al punto de conducir al suicidio en 1957 a un responsable de la economía, Gerhart Ziller. Mientras se negaba a indemnizar a los judíos fuera de sus fronteras, la RDA concedió, en su suelo, a las “víctimas del fascismo” (judíos y gitanos) y más aun a los resistentes antifascistas, pensiones y privilegios nada desdeñables.

En muchos aspectos, el culto a los antifascistas, sobre los cuales basó su legitimidad la RDA, evoca la política memorial llevada a cabo en la misma época en Francia, donde también se atribuía a las calles los nombres de resistentes. Los discursos oficiales, como los pronunciados en la RDA, no hablaban de la sociedad colaboracionista. Los historiadores franceses también contribuyeron al mito de una Francia resistente. A cada uno le corresponden sus páginas faltantes. Mientras que la RDA guardaba silencio sobre el Pacto germano-soviético y la desaparición de los comunistas alemanes refugiados en Moscú, ejecutados de una bala en la nuca en la prisión de Lubianka, la mayoría de los historiadores de Alemania Occidental seguían utilizando la palabra “invasión” para hablar del desembarco del 6 de junio de 1944, exoneraban a la Wehrmacht de toda participación en la empresa genocida y fabricaban el mito de un cuerpo diplomático que “no sabía”. Dos fábulas tenaces, que solo fueron malogradas con la exposición itinerante bautizada “La guerra de exterminio. Crímenes de la Wehrmacht, 1941-1944”, entre 1995 y 2004, así como con las publicaciones de una comisión de historiadores independientes a partir de los archivos de la diplomacia en 2010 (12). En sus *Memorias*, el historiador Saul Friedländer relata que el di-

rector del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, Martin Broszat, le negaba la competencia de hablar del genocidio porque, como judío, habría estado demasiado implicado. Más tarde iba a descubrir que Broszat había sido miembro del Partido nazi...

Caza de comunistas

A medida que los estudios históricos develan los entresijos de la creación de la Alemania Occidental, sus reticencias a juzgar a los antiguos nazis –ya que los “camaradas” se juzgaban entre ellos, a partir del momento en que el 90% de los magistrados y abogados habían servido en el Tercer Reich (13)–, la caza a los comunistas en la función pública (14), la composición y la acción de su servicio de inteligencia, se intenta, como para no quedarse corto, sobrecargar el casillero judicial de la RDA. El aporte de ese país desaparecido a la construcción de un balance del nazismo a través de una importante producción cinematográfica, teatral y literaria, o incluso el trabajo de memoria llevado a cabo por pastores de la Iglesia evangélica, permanecen ignorados en el Oeste. Auschwitz nunca fue un tabú en la RDA. ¿Acaso la psicoanalista Margarete Mitscherlich, autora con su marido Alexandre Mitscherlich de la obra *La incapacidad de sentir duelo* (1967), no vio en la novela de la escritora de Alemania Oriental Christa Wolf, *Trame d'enfance* (1976), el más magistral trabajo de duelo en lengua alemana? Como en Francia, el arte había superado a la historiografía y colmado las lagunas del discurso oficial.

Treinta años después de la implosión del bloque del Este, los vencedores de la Guerra Fría se encarnizan sobre los últimos vestigios de la ideología de Alemania Oriental: el antifascismo y el internacionalismo. En el curso de un debate, en 2011, el filósofo Jürgen Habermas recordaba que el anticomunismo de Estado de la RFA se inscribía en la continuidad de la ideología nazi, y que liberarse de él pasaba por posiciones anticomunistas (15). No fue oído. ■

1. Sigue siendo importante precisar si el autor o la autora son del Oeste, porque sigue siendo el caso de la mayoría de aquellos y aquellas que se expresan sobre la RDA.

2. Micha Brumlik, “Ostdeutscher Antisemitismus: Wie braun war die DDR?”, *Blätter für Deutsche und Internationale Politik*, Berlín, enero de 2020, e “In der DDR wurde die NS-Zeit verdrängt”, *Die Zeit*, Hamburgo, 4 de marzo de 2020.

3. Jeffrey Herf, *Undeclared Wars with Israel: East Germany and the West German Far Left, 1967-1989*, Cambridge University Press, 2016.

4. Dominique Vidal, *Antisionisme = antisémitisme? Réponse à Emmanuel Macron*, Libertalia, Montreuil, 2018.

5. Véase Paul Hanebrink, “El mito del judeo-bolchevismo”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, diciembre de 2019.

6. Charlotte Misselwitz, “Als ob wir nichts zu lernen hätten von den linken Juden der DDR”, *Deutschland Archiv*, 30-4-20, www.bpb.de

7. Véase la colección “Unabhängige Historikerkommission zur BND-Geschichte”, Links-Verlag, 2016-2018.

8. Gareth Joswig, “Mitgliedsnummer 11”, *Die Tageszeitung*, Berlín, 20-7-20. Véase también Massimo Perinelli y Christopher Pollmann, “Ceguera ante los crímenes neonazis”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, julio de 2019.

9. *Deutschlandfunk*, 9-2-20.

10. Véase la colección “Unabhängige Historikerkommission zur BND-Geschichte”, *op. cit.*

11. Frank Bösch y Andreas Wirsching (dir.), *Hüter des Ordnung. Die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus*, Wallstein, Göttingen, 2018.

12. Eckart Conze et al., *Das Amt und die Vergangenheit: Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik*, Pantheon, Múnich, 2012.

13. Klaus Bästlein, *Der Fall Globke: Propaganda und Justiz in Ost und West*, Metropol, Berlín, 2018.

14. Dominik Rigoll, *Staatschutz in Westdeutschland: Von der Entnazifizierung zur Extremistenabwehr*, Wallstein, 2013.

15. *Frankfurter Rundschau*, 1-7-11.

*Historiadora. Autora de *La Loyauté à tout prix. Les floués du "socialisme réel"*, Le Bord de l'eau, Lormont, 2019.

Traducción: Víctor Goldstein

Suscríbase este 2021 a
Le Monde Diplomatique
y sus libros mensuales

Suscríbase con pago automático (PAT) y
reciba cada mes *Le Monde Diplomatique*
más un libro por \$4.900 mensual.
Teléfono: 22 608 35 24

<https://editorialauncreemos.cl/producto/suscripcion-periodico-libro-mensual/>

Singularidad del cine de Alemania Oriental

Un vals con la censura

por Bernard Eisenschitz*

En diciembre de 1965, el plenario del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) denunció dos películas de ficción recientes por “falso liberalismo, pesimismo y escepticismo”; luego bloqueó las diez películas en circulación de la Deutsche Film AG (DEFA), el estudio cinematográfico estatal. Es decir, casi la totalidad de la producción anual. La posibilidad de una renovación en profundidad del cine, fenómeno que se produjo un poco en todos lados, inclusive en la Unión Soviética y en varios países socialistas de Europa, se desvanecía. La desconfianza recíproca entre los cineastas y el poder era definitiva.

La historia de la censura cinematográfica recorrió los cuarenta años de la República Democrática Alemana (RDA), con un entrelazamiento de instancias y motivaciones. Fuera de la oficina política, el comité central del Partido-Estado y el Ministerio de Cultura, del que dependía el estudio -era el mismo presidente del Consejo de Estado Walter Ulbricht quien veía las películas-, también estaba la jerarquía. Por ejemplo, Frank Beyer tuvo que hacer que la televisión produjera su adaptación de la novela de Jurek Becker *Jakob el embustero*, que la DEFA había rechazado, pero que sin embargo luego distribuyó, como uno de sus raros éxitos internacionales. La Unión Soviética también intervenía, bloqueando durante trece años a *Buscadores de sol*, de Konrad Wolf (1958), por no decir nada de la susceptibilidad de la Polonia vecina. Ni siquiera Victor Hugo estaba seguro: la coproducción *Los miserables* (1958), con Jean Gabin, se estrenó un año más tarde que la francesa, después de haber sufrido varios cortes y cambios en el texto. Y, hasta 1988-1989, la distribución de las películas soviéticas de la *glasnost* (transparencia) estuvo obstaculizada.

Vitalidad de documentar

Fundada en 1946, la DEFA heredó tanto la infraestructura de la capitalista Universum Film-Aktiengesellschaft (UFA), entonces nacionalizada por el régimen nazi -estudios, laboratorios, técnicos de gran envergadura-, como los hábitos del cine nacionalsocialista. El estudio, el famoso Babelsberg, estaba sometido a una producción a la antigua, siguiendo el modelo de la UFA y de Mosfilm, la empresa nacional de cine soviética -cosa que convenía a los pioneros de la DEFA como Slávan Dudow, colaborador de Bertolt Brecht en el teatro y en el cine antes de 1933, o a Wolfgang Staudte, director del film *Los asesinos están entre nosotros* (1946)-, pero no tanto a la época de la Nouvelle Vague. Lo que más restringió a la actividad fue el peso de la autoridad política sobre los autores, con una elección de temas conforme a la visión oficial, adaptaciones literarias académicas, un control en todas las etapas, guiones aprobados con la precisión de una coma y, en consecuencia, una sobrevaloración del texto. En 1965 las ficciones de la DEFA ya tenían una reputación mediocre y los cines comenzaron a vaciarse. “Les prohibieron hacer películas durante un año y nadie lo notó”, observó un director checo después del plenario.

Sin embargo, sería un error tomar al cine de la RDA como una extensión de la palabrería oficial. Como ocurre en culturas estrechamente controladas, las aspiraciones de los creadores y el discurso sostenido en la cumbre siguen evoluciones distintas. Las películas de 1965 -terminadas o reconstituidas alrededor de 1990- formaron un conjunto fuertemente innovador. Sin copiar el modelo neorrealista, sus autores salieron a la calle y a la naturaleza, y sacaron partido de intérpretes excepcionales, a menudo formados por el Berliner Ensemble, el teatro fundado por Brecht. La mayoría embistió a una jerarquía esclerosada y apeló a una renovación de la concepción del socialismo. Sin precauciones oratorias, se ocuparon de la vida social, del formalismo que sustituyó a lo político y de las relaciones laborales. Mostraron personajes contradictorios, héroes o no, y comunistas rutinarios o fieles a sus ideales originales, o ambos a la vez. El jefe de equipo de *Huella de piedras* (Frank Beyer), como los jóvenes de *Berlín a la vuelta de la esquina* (Günther Klein), se opusieron mediante un comportamiento “anarquista” a las autoridades del partido y de la fábrica. En *Karla*, de Herrmann Zschoche -primer guion de Ulrich Plenzdorf que se hizo famoso en 1972 por su novela *Las nuevas desventuras del joven W.*-, una maestra rechaza una enseñanza que, so pretexto de defender el socialismo, predica la falsificación de la historia. *Nés en 1945* (*Jahrgang 45*), del documentalista Jürgen Böttcher, puso en escena, alrededor de una pareja a punto de divorciarse, una vida errante. Las autoridades, la misma idea de país socialista, estaban ausentes. Böttcher se interesaba por los rostros y cuerpos, en un paisaje urbano que se descubriría poco a poco. No fueron tantas las películas de las nuevas olas que alcanzaron tal nivel de desdramatización.

Los autores que estaban en la lista negra a fines de 1965 eran tratados en forma desigual: obligados a la autocritica, expulsados del estudio o simplemente reprendidos. De ese modo, Böttcher regresó al cine documental. “La prohibición abrió una herida que tardó mucho en curar”, escribió Zschoche. En el espíritu de la “rehabilitación ideológica” del estudio, las películas sobre la vida cotidiana presentaron en adelante los conflictos como simples dramas emocionales destinados a ser resueltos, lo que el cineasta tituló “melodrama socialista”.

En 1968, *Yo tenía 19*, de Konrad Wölflin, fue una excepción. Se convirtió, al atraer a más de 3,2 millones de espectadores, en uno de los mejores de la historia de la DEFA. Al haber crecido en el exilio en Moscú, y regresar a Alemania a los 19 años con el ejército rojo como “oficial comisionado en la cultura”, Wölflin se inspiró en episodios que vivió durante los últimos días de la guerra. En todas sus películas abordó temas difíciles, desde la deportación de los judíos (*Estrellas*) hasta la marca dejada por el nazismo (*Mamá, estoy vivo*) y el presente del país: *El cielo dividido*, *El hombre desnudo en el estadio*... Cineasta, polemista, docente y con una lúcida conciencia de la cultura de la RDA, pese a haber estado atravesado por la de ambas Alemanias.

Si bien Zschoche y algunos realizadores (Heiner Carow, Egon Günther) y guionistas (Becker, Plenzdorf...) habían permanecido fieles a su voluntad de no mentir sobre el país, el impulso y la energía de las películas de 1965 se perdió en los años siguientes. Era el momento de un cine “cívico”, tímido, en el que las películas dejaron de ser sometidas a la censura: *Les Russes arrivent*, de Carow (1968); *Jadup y Boel*, de Rainer Simon (1980).

Los éxitos se debían a las figuras femeninas, reflejo de uno de los logros políticos del país: una “ciudadana consciente” que busca al tercer hombre de su vida en *El tercero* (Egon Günther, 1972); la decisión de romper con las convenciones y dar lugar al deseo físico en el gran éxito *La leyenda de Paul y Paula* (Carow y Plenzdorf, 1973), considerado como el film de una generación; el primer amor, en *Siete pecas* (Zschoche, 1978), una bofetada a la vieja mojaduría alemana, al trasladar a *Romeo y Julieta* a una colonia de vacaciones (1,1 millón de espectadores)... hasta los sueños de *Solo Sunny*, obrera convertida en una cantante de gira, heroína extraviada del último film de Konrad Wolf (1979).

Los documentales

Hasta el final, el cine de ficción se dividió entre su cautela y una necesidad de coraje insatisfecha, con una elección de temas atrevidos cuando ya era demasiado tarde: el diálogo entre comunistas y cristianos (*Que l'un porte le fardeau de l'autre*, de Lothar Warneke, 1988), la homosexualidad (*Coming Out*, de Carow, 1989)... Si las películas, como los manuscritos, no se quemaban, los hombres envejecen y se desgastan: “Una cosa que no pueden devolvernos es el tiempo”, decía Heiner Carow.

El documental siguió un camino diferente. A partir de los años sesenta apareció como la forma suprema del cine de la RDA. El veterano Karl Gass, formado en el trabajo de grupo, alentó a los jóvenes cineastas a practicar una filmación discreta y paciente, con material ligero. El festival del documental de Leipzig hizo descubrir las formas múltiples del cine político y de la contrainformación, con la presencia de innovadores como Richard Leacock o Chris Marker. El estudio de documentales de la DEFA permitió que nuevos talentos se desarrollen y salgan del formato del *Kulturfilm* ultramontado y comentado, en provecho de una mirada más avispada.

La denuncia del imperialismo fue un tema obligatorio desde los comienzos de la República, que ahora asumían las películas del tándem Walter Heynowski-Gerhard Scheumann. Buscaban sus temas en la vigorosa denuncia propagandística de Alemania Federal y de la permanencia del nacionalsocialismo, o del imperialismo occidental (un ciclo sobre Chile, otro sobre Camboya), con los métodos de los investigadores infiltrados, quienes se hicieron pasar por alemanes occidentales ante sus entrevistados (Augusto Pinochet en *Yo soy, yo fui, yo seré*).

Los demás documentalistas sintieron curiosidad por la existencia en tiempo y espacio de su joven país. Sus películas, que

la dramaturgia tradicional no había obstaculizado, estaban dirigidas a sus conciudadanos, poniendo el acento en el mundo del trabajo y la vida de las mujeres. *Le Secrétaire* (1967), de Böttcher, recorre la actividad cotidiana de un funcionario del partido, poco respetuoso con las formas jerárquicas, entre los obreros. Pintor y cineasta, Böttcher llevó a cabo, de *Blanchisseuses* (1972) a *Aiguilleurs* (1984) o *La Cuisine* (1987), documentando la observación de oficios, gestos y rostros: sonido directo, observación paciente, sentido de la duración, no intervencionismo.

Botellas al mar

Más joven, Volker Koepp fue un personaje de sus films que intervino en primera persona y dialogó con sus interlocutores. Entre 1973 (*Saluts de Sarmatie*) y 2013 (*En Sarmatie*), transitó la llanura que se extiende desde el Báltico al Mar Negro, la Sarmatia de la Antigüedad -una zona intermedia atravesada a lo largo de la historia por guerras y poblaciones desplazadas-, convertida en su país imaginario y su modelo a escala del nuevo siglo. Fue allí, “al Este del Elba”, donde testificó en 1992, en *Bric-à-brac* (*Sammelsurium*), que se había puesto en venta la RDA, “Un país transformado en museo donde trabajan anticuarios y guías”. El paseo por el espacio y la historia atravesó la memoria íntima de Koepp, la de aquellos a los que cuestionaba y la de los acontecimientos actuales.

Ese itinerario en el tiempo fue un rasgo característico del documental de la RDA. Los cineastas se dedicaron a largo plazo a un lugar, ciudad, fábrica, liceo, a un grupo de individuos. El proyecto más desmesurado fue el de Winfried Junge, quien desde 1961 a 1979 y luego hasta 2007 siguió a los niños de la ciudad de Gollzow que habían asistido a la escuela en 1961, y realizó 19 películas con ellos. Volker Koepp filmó durante veintitrés años *Jeunes filles à Wittstock*, en una región agrícola brutalmente industrializada. Despedido de la escuela de cine, Thomas Heise lanzó botellas al mar con películas que reaparecieron veinte años más tarde. De este modo, esos cineastas dieron testimonio del presente de un pequeño país y de la memoria del pasado cercano, conscientes de que un socialismo no puede volverse realidad sino en un largo período de tiempo, un tiempo que no le fue concedido a la RDA.

La DEFA se privatizó tan pronto se logró la unión monetaria. El estudio fue dirigido durante seis años por la Treuhand (organismo responsable de supervisar la privatización de los bienes de la ex RDA) por un cineasta de Alemania Occidental, Volker Schlöndorff, y pudo seguir operando como proveedor de servicios y coproductor de superproducciones internacionales. Los directores de la DEFA se adaptaron poco a poco a las nuevas condiciones y trabajan para la televisión o en la enseñanza. ■

*Historiador del cine. Autor, entre otros libros, de *Fritz Lang au travail*, Éditions Cahiers du cinéma, París, 2011.

Un refugio ante las producciones de Netflix

La vuelta de tuerca de las telenovelas

por Anne-Dominique Correa*

En el reino de las telenovelas, una gran parte de la población sigue atraída por los escenarios melodramáticos que caracterizan al género: un cóctel de heroínas virtuosas, sentimientos castos y ascenso social fulgurante. Pero las series que elige el público latinoamericano ya no se escriben ni realizan en la región, sino en Turquía.

Una joven viuda se entera de que su hijo de cinco años tiene leucemia. Su vida depende de un trasplante de médula ósea, pero no tiene con qué pagarlo. Toca la puerta de la mansión de su suegro para pedir ayuda, sin éxito. Este nunca aceptó su casamiento con su hijo y la acusa de ser responsable del accidente de auto que le costó la vida. Desesperada, decide suplicarle a su empleador, propietario de una empresa constructora, que le otorgue un préstamo, aunque oculta la razón del pedido. Convencido de que las mujeres están dispuestas a todo por dinero, el hombre acepta con una condición: que pase la noche con él. Ella acepta.

De esa “noche negra” nace una historia de amor tormentosa, que se extiende a lo largo de noventa episodios de una hora y media. En 2014, cuando el canal chileno Mega TV transmitió *Las mil y una noches* por primera vez, la serie rompió todos los récords de audiencia al reunir cerca de un 28% de los telespectadores por noche (1). Al igual que el resto de América Latina, el país es conocido por su predilección por los melodramas románticos; sin embargo, esta historia se destaca por su singularidad: el héroe y la heroína no se llaman Rosa o Ricardo, como en las telenovelas tradicionales de la región, sino Scherezade y Onur. Y cuando llega el momento del primer beso –después de no menos de 28 episodios–, el plano de fondo permite vislumbrar la costa del Bósforo y la punta iluminada de la Torre de Gálata. La serie tiene lugar en Estambul.

Tras el éxito de *Las mil y una noches*, decenas de telenovelas turcas inundaron los principales canales de televisión privados de América Latina, siempre con la misma popularidad. En 2014, ¿*Qué culpa tiene Fatmagül?*, la historia de una joven pastora que es obligada a casarse con su agresor para salvar el honor de su familia, se convirtió en la serie más vista en el canal peruano Latina (2). En Colombia, *Elif*, una serie que cuenta las aventuras de una niña abandonada que busca a su madre, se mantuvo al aire por más de cuatro años (entre 2016 y 2020), con 1.150 episodios: un récord para una producción extranjera.

Máquinas del tiempo

El éxito de estas telenovelas eleva a Turquía al pináculo de la moda. Los recién nacidos reciben nombres como Elif, Fatmagül o Ibrahim, en referencia a los protagonistas. En las redes sociales, los fans multiplican las páginas donde se examina al detalle la vida de los actores. Algunos incluso llegan a atravesar el Atlántico para visitar los lugares donde se rodaron: en 2018, las agencias de viaje registraron un

crecimiento del 70% del turismo latinoamericano hacia Turquía (3). Hasta el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un desvío para visitar el plató de su serie preferida, *Resurrección: Ertuğrul* (una producción histórica sobre la ascensión del Imperio Otomano en el siglo XVII), después de asistir a la ceremonia de investidura de Recep Tayyip Erdoğan en 2018.

¿Cómo se puede interpretar este triunfo de las series turcas en América Latina, la tierra santa de las telenovelas (4)? Según Guillermo Orozco Gómez, investigador en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, estas series funcionan como máquinas del tiempo, puesto que retoman el esquema de la telenovela clásica de los años ochenta. De hecho, la mayoría cuenta la historia de amor imposible entre una joven pobre y un hombre de familia acomodada. Además, enlazan esta narrativa con una mirada del mundo “muy conservadora y púdica”, analiza Orozco Gómez. Su contenido podría resumirse como “familia, trabajo y tradición”, agrega. Lo cierto es que no se muestra ni un centímetro de piel: a lo sumo un beso (después de varios episodios) o una caricia sugestiva.

Secretos de familia

Otra de las similitudes de la telenovela turca contemporánea con la latinoamericana clásica es que la virtud, encarnada por el héroe, siempre triunfa. Así, después de la muerte de su padrastro, la joven Elif finalmente encuentra a su madre y descubre que es la heredera de una de las mayores fortunas del país. Scherezade salva a su hijo y Onur se arrepiente del suplicio que le infligió. Los agresores de Fatmagül, que habían logrado comprar el silencio de su familia, terminan tras las rejas. Y la mayoría de las veces, la historia termina con un casamiento feliz...

Por su parte, las producciones latinoamericanas entraron en una nueva era. Orozco Gómez explica que “las telenovelas se liberaron. Muchas de ellas se abrieron al tema de la sexualidad”. Este es el núcleo central de *La casa de las flores*, una comedia mexicana, disponible en Netflix desde 2018. La serie cuenta las desventuras de los miembros de la familia de la Mora, el arquetipo de la burguesía mexicana obsesionada por las apariencias. Durante los primeros trece episodios de la primera temporada, salen a la luz secretos que pueden dañar la reputación de la familia. En el primer capítulo, la matriarca, Virginia de la Mora –irónicamente apodada “de la Moral”– descubre que, a sus espaldas, su marido administra un cabaret de travestis junto con su amante. Luego, su hijo le confiesa que tiene una relación amorosa con su consejero de finanzas y, por último, vuelve de España su cuñado... que cambió de sexo. A lo largo de la primera temporada, Virginia de la Mora hace todo lo posible por mantener una fachada de “normalidad” en el vecindario, a riesgo de caer en el patetismo.

La serie propone una sátira del puritanismo latinoamericano al tiempo que exhibe la diversidad sexual, incluso mediante escenas crudas. Ya en el primer capítulo, que dura treinta y dos minutos, se suceden una escena de sexo y una felación homosexual, algo inimaginable veinte años atrás. El único vestigio que queda del pudor de antaño es la presencia de la actriz que interpreta a la matriarca, Verónica Castro, antigua estrella del canal mexicano Televisa, principal productor de telenovelas en español en los años 1980.

Su regreso al set de filmación para *La casa*

de las flores marcó un cambio de época en las telenovelas. Mientras que en los ochenta solía interpretar papeles “a lo Cenicienta”, ahora fuma marihuana a escondidas para olvidar el desastre familiar. ¡Peor aun! La vende disimulada en los ramos de flores para evitar la quiebra de su negocio. En una entrevista al diario El País, Verónica Castro reconoció que tuvo que “aflojar” para interpretar esas “desviaciones” en la pantalla chica (5). Esta telenovela liberal sedujo principalmente a una audiencia joven, lo que le valió la etiqueta de “culebrón millennial”.

Sin embargo, según Orozco Gómez, esta modernización de las telenovelas en realidad no refleja un cambio de mentalidad de las audiencias, sino que se trataría más bien del resultado de una nueva estrategia comercial. Con la llegada de las plataformas de video *on demand* en los años 2000, se modificó la relación con el público. Orozco Gómez explica que “antes, la telenovela le imponía a la audiencia su propio ritmo para asegurarse su fidelidad. Ahora, con Netflix, el público volvió a tener el control. Se pueden ver cinco capítulos de un tirón o uno por semana, como a uno le parezca mejor. También se pueden ver los capítulos por separado, porque ya no dependen unos de otros”. La época en que las familias se reunían, como un ritual, para ver la telenovela de las ocho de la noche es cosa del pasado. La caída de popularidad de las telenovelas da cuenta de esto: mientras que en los noventa los mayores éxitos de Televisa alcanzaban un 40% de audiencia, hoy apenas superan el 15% (6).

Para sobrevivir, la telenovela buscó entonces abrirse a un público internacional. Se asoció con productores estadounidenses, como la cadena en español Telemundo, lo que hizo que se impusieran nuevas estéticas. Cecilia Percy, una autora de telenovelas colombiana que trabaja en coproducciones del canal colombiano RCN y Disney, explica que debe acortar cada vez más la duración de los episodios y acelerar el ritmo. “Ya no se prioriza la emoción sino la acción”, resume, haciendo referencia a la lentitud del desarrollo de la trama y la exageración de las actuaciones que hacían al encanto de los culebrones. “Nos estamos volviendo cada vez más dependientes de lo que se produce en el exterior”, se lamenta.

Gueto para hipsters

Para responder a estas nuevas exigencias, los productores de telenovelas innovan. Así surgieron, en la década de 2000, las narconovelas, esas series inspiradas en los cárteles de droga en América Latina. A pesar de la polémica que generan por la “heroización” de los delincuentes, estas gozan de un gran éxito en el exterior, en particular en la cadena estadounidense Telemundo. En 2008, la telenovela *Sin senos no hay paraíso*, que cuenta las aventuras de una prostituta que busca unirse a una rica organización de cocaína, alcanzó un 28% de rating. Dos años más tarde, el primer episodio de *La reina del Sur*, inspirado en la vida de la narcotraficante mexicana Sandra Ávila Beltrán, atrajo a más de 2,4 millones de espectadores, un récord histórico. En 2012, siguió el éxito de *El patrón del mal*, una biopic sobre la historia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, vista por 2,2 millones de personas. “Estas series responden a los clichés estadounidenses sobre América Latina: droga, violencia y corrupción, como así también a los criterios estéticos del Norte”, nos explica Percy.

Otra innovación reciente son las bionovelas, que relatan el recorrido de figuras locales. En 2019, Netflix coprodujo, junto con la señal colombiana Caracol, una serie histórica sobre la vida de uno de los personajes emblemáticos de los procesos de independencia de América Latina en el siglo XIX: *Bolívar, una lucha admirable*. La víspera de su estreno en Netflix, el presidente venezolano puso al público sobre aviso, ya que temía que la serie presentara una versión “oligárquica” del héroe nacional: “¿Cuántas mentiras, deformaciones y basura pondrán en la miniserie de Bolívar?” Después de darse cuenta de que, como toda bionovela, esta se focalizaba en la vida íntima del personaje antes que en el análisis político de sus acciones, se disculpó: “Lograron en la serie traer a un Bolívar vivo, un Bolívar humano, sensible” (7). Un año antes, otra bionovela coproducida con Telemundo había dado la vuelta al mundo en la plataforma: una serie sobre el famoso cantante mexicano de boleros Luis Miguel. Tras su difusión, las descargas de sus temas en Spotify se triplicaron (8). “La nueva receta de las telenovelas es crear historias con elementos locales, pero que sean de exportación”, resume Percy.

Ahora bien, así como esta evolución impulsa a la telenovela a transgredir las convenciones en una sociedad muy conservadora, también la aleja de su público tradicional. De hecho, las telenovelas parecen haber perdido su capacidad para ofrecerles a las clases populares un espejo de sus aspiraciones. Mientras que las primeras producciones como *El derecho de nacer* (1961), *Los ricos también lloran* (1979) e incluso *Rosa salvaje* (1987), reflejaban la esperanza de ascensión social de las clases populares, posible únicamente a través del casamiento o los avatares del destino, las series actuales representan el mundo y las preocupaciones de las elites globalizadas. “Por querer contentar a la audiencia de Netflix, la telenovela se convirtió en un gueto para hipsters”, se lamenta Omar Rincón, crítico de televisión colombiano. Una parte de su público (sobre todo mujeres mayores de 45), se sintió traicionada y se refugió en las series turcas. “Vinieron a llenar el vacío que dejaron las telenovelas”, observa Rincón. En su opinión, este éxito debería ser una señal de alarma para la industria: si quiere recuperar sus antiguos colores, “la telenovela tiene que salir al rescate del melodrama”. ■

1. Eduardo Woo, “Con peak de 32 puntos ‘Las Mil y Una Noches’ concluye su arrollador éxito en Meg”, *Biobiochile*, Concepción, 14-1-15, www.biobiochile.cl
2. Véase “Novela turca Fatmagül venció en rating al Perú-Colombia”, *Diario Correo*, Lima, 9-9-15.
3. “Popularity of Turkish soap operas leads Latin American tourists to flock to Turkey: Association”, *Hurriyet Daily News*, Estambul, 22-10-18, www.hurriyettailynews.com
4. Véase Lamia Oualalou, “Nuevas ficciones para un nuevo Brasil”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, julio de 2013.
5. Elena Reina, “Verónica Castro, la reina del culebrón ‘millennial’”, *El País*, Madrid, 1-9-18.
6. David Luhnow y Santiago Pérez, “Viewers Spurn the Telenovela for a New Love: Netflix”, *The Wall Street Journal*, Nueva York, 23-4-18.
7. “Maduro pide disculpas a los productores de una serie sobre Bolívar y recomendación”, EFE, Madrid, 1-8-19.
8. Marysabel E-Huston-Crespo, “Luis Miguel rompe récords en Spotify gracias a su serie biográfica con Netflix”, CNN, Atlanta, 18-5-18.

*Periodista.

Traducción: Georgina Fraser



Capitalismo progresista La respuesta a la era del malestar

Joseph E. Stiglitz.
Ediciones Taurus, 2020, 398 págs.

“¿Cómo llegamos hasta aquí, hacia dónde vamos y qué podemos hacer para cambiar el curso de los acontecimientos?”. Es la pregunta que se hace este economista estadounidense demócrata, buscando respuestas a las políticas republicanas de Donald Trump: “La desigualdad en la riqueza es ahora mucho peor que antes de la Gran Recesión de 2008, cuando ya era suficientemente mala”. Stiglitz siente que este no será el mismo capitalismo después de esta gran depresión, pues no se trata de una crisis más y dejará una huella duradera en el sistema capitalista; en particular en los Estados Unidos, principal responsable y beneficiario del neoliberalismo, pero que tras la crisis “quedó con una montaña de deudas”.

Es útil comprender que Stiglitz muestra el camino para mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, y no la nuestra: “nosotros obtuvimos casi todo lo que queríamos en las negociaciones comerciales de finales del siglo XX. Contra las objeciones de los países en desarrollo, nos aseguramos fuertes medidas de protección de la propiedad intelectual, que preservaban la de los países avanzados, pero no la de los países en desarrollo”. Pero sus recetas ya han sido exploradas por los europeos, y pueden llegar tarde para dar solución a una crisis tras la cual, tal como reconoce, vivimos un mundo multipolar.

En dos partes y once apretados capítulos recorre la situación económica de EEUU y su relación con el mundo. “La realidad es que Estados Unidos ya no domina el mundo como lo hacía en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. El intento de reinstaurar ese dominio es inevitable fracasará y, con ello, su posición dentro de la economía global, y en un sentido más amplio su influencia mundial decaerá aún más”. Este Premio Nobel pide un giro en la economía y la política estadounidense, pero no tiene fe de lograrlo.

Este es un libro programático contra Trump, por lo que resulta apropiado leerlo tras el actual triunfo demócrata de Joe Biden. Está muy bien escrito, para mostrar una situación desatada por los mismos que sólo son mencionados de modo tangencial; “las reglas del juego están siendo escritas de manera desproporcionada por esta minoría”. Tal vez lo mejor del libro es lo no dicho (como pasa con frecuencia con los libros de economía). Pero es un buen trabajo en medio de una crisis mundial que se ha agravado con la pandemia. Es interesante su lectura, no mira nuestros intereses económicos, pero nos ayuda a comprender las alternativas que tiene EEUU para encarar la crisis mundial. Lo que Stiglitz llama: “No es demasiado tarde para salvar al capitalismo de sí mismo”. ♦

Gonzalo Rovira



Cuerpos de la memoria Sobre los monumentos a Schneider y Allende

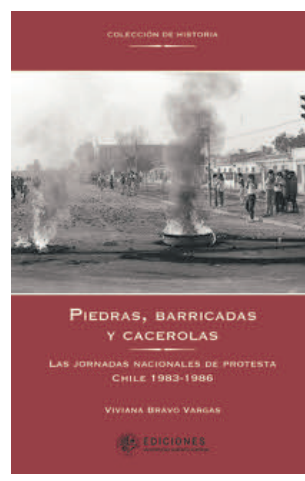
Luis Montes (Editor)
Departamento de Artes Visuales,
Universidad de Chile, 2020, 143 págs.

El presente libro, surgido del Núcleo de Investigación Escultura y Contemporaneidad de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, aborda problemas que trascienden los procesos de gestación y construcción de los monumentos de René Schneider y Salvador Allende. En efecto, el problema que cruza el libro es el de la distancia que media entre esos dos momentos -dos mundos distintos- en que fueron exigidos uno y otro, es como si cada uno de ellos fuera una hebra de la que tirando emergen dimensiones completas de dos visiones de mundo casi incommensurables: el Chile de la Unidad Popular y el país neoliberal de la transición, que en este libro quedan caracterizados como un mundo de significación histórica y política, el primero, y de despolitización, espectacularización y temporalidad dislocada, el segundo.

Tanto en los capítulos de Luis Montes como en el de Verónica Figueroa se abordan los procesos de construcción de los monumentos. En base al estudio del contexto, de las bases de los concursos y las discusiones asociadas quedan claras las distancias, pero la interpretación se basa en los monumentos mismos. Un aspecto altamente interpretable es el del carácter abstracto del monumento al general Schneider frente al carácter figurativo del monumento al presidente Allende, lo que lejos de ser anecdótico o fruto de cierto azar, fue un interés perseguido. ¿Qué puede dar a pensar esto? Llevado a los códigos de la teoría historiográfica contemporánea se podría decir que mientras el monumento a Schneider pertenece a un régimen de historicidad futurista, el de Allende está anclado a uno presentista. El primero fue concebido como pura proyección hacia un tiempo “otro”, y de aquí su carácter abstracto, mientras que el segundo se encuentra cerrado en su literalidad, en sus limitadas posibilidades de interpretación, más aún en el normado espacio en donde se encuentra emplazado.

Los capítulos a cargo de Sergio Rojas, Mauricio Bravo y Claudia Páez indagan en ese problema más vasto indicado al inicio, el de la distancia que media entre esos dos momentos para preguntarse por el ahora. Sergio Rojas sostiene: “Mi hipótesis en este escrito es que en esta diferencia temporal encontramos una clave para reflexionar el sentido de aquello que, desde el presente, se denomina la historia contemporánea de Chile”, en efecto, sostiene, en el tiempo que media entre los dos monumentos “el sentido de que sea un monumento cambió” (p. 26), el de antes era el tiempo de la historia, el de hoy un estado: “aparentemente al individualismo neoliberal, combinando escepticismo y emprendimiento, le resultaría del todo ajena la idea de un juicio de la historia y hasta de pasado histórico” (p. 27). Este libro es una oportunidad para reflexionar mejor también sobre el sentido de la actual iconoclasia. ♦

Pablo Aravena Núñez



Piedras, barricadas y cacerolas Las jornadas nacionales de protesta. Chile 1983-1986

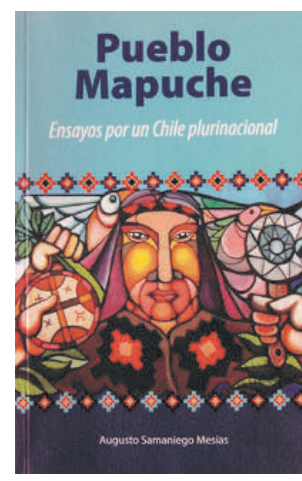
Viviana Bravo Vargas
UAH ediciones, 2017, 436 páginas

El exhaustivo trabajo está dividido en nueve capítulos y da cuenta de dos grandes líneas: el cuestionamiento a los discursos oficiales encontrando asidero sobre los antecedentes o motivaciones para la movilización nacional, y por otro lado, la cultura de la protesta como extensión de la participación y politización de los espacios de oposición para hacerle a una fuerte robusta y poderosa maquinaria de exterminio. Para esto, la historiadora acude a diferentes fuentes primarias como los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, la del dirigente sindical Luis Fuentealba, a la Biblioteca Nacional, al Fondo Documental Eugenio Ruiz-Tagle (FLACSO), diarios, periódicos y revistas de la época. Además, destaca el trabajo en terreno con 29 entrevistas a personas activas durante la dictadura y las fuentes secundarias: 164 libros, artículos y tesis.

De lo anterior, permite especificar el método de trabajo de Viviana Bravo Vargas, quien durante su carrera académica ha desarrollado una línea de investigación sobre la rebelión popular-urbana durante la dictadura cívico militar. El presente libro constituye tesis doctoral y en el 2013 recibió mención honrosa en el Premio Casa de las Américas.

De acuerdo a los estudios citados por la autora, las subversiones populares no conllevan una sola directriz, estas son múltiples y para Chile, han sido interclasistas. Es decir, desde el colapso económico y financiero, para 1983 había un deterioro de la calidad de vida de los trabajadores debido a la explotación de los mismos en las fábricas. Con ello, un aumento de la inseguridad que afectó a los grupos vulnerables, la falta de expectativas juveniles y tanto la intervención de los grupos políticos en las tomas de terreno como el trabajo de base de los grupos eclesíásticos propiciaron una orgánica frente al dictador. En este volumen hay un especial énfasis sobre el quehacer poblacional de la Región Metropolitana, a excepción de llamados de la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre (CNTC) y otras zonas específicas, dejando de lado las experiencias en regiones como el histórico “punterazo” (1984) o el frente cultural en las regiones, por ejemplo. Aunque el tono de la obra tiene un tono de época, la vindicación de las Jornadas Nacionales de Protestas, al igual que el camino hacia el Plebiscito (2020) a la Nueva Constitución, comenzaron en las calles. Estos espacios fueron tomados por sujetos organizados para hacerle frente, desde el 11 de mayo de 1983, a las fuerzas represivas de la dictadura. ♦

Gonzalo Schwenke



Pueblo Mapuche Ensayos para un Chile plurinacional

Augusto Samaniego Mesías
Ariadna Ediciones, Santiago, 2020,
178 páginas.

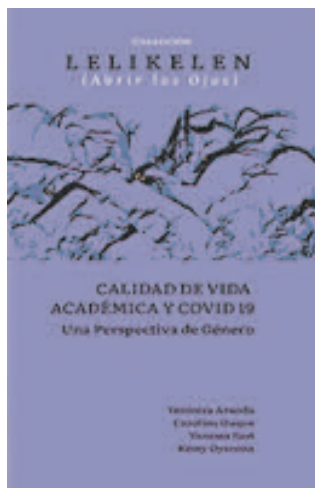
Cinco ensayos componen este libro: Prensa e ideal del “Chile homogéneo” (s, XIX); Integrar o respetar al pueblo mapuche; Allende... el camino del Nielol; pueblo mapuche: la transición inacabada; Notas sobre neoliberalismo y pueblo mapuche. Ellos proponen información e interpretaciones históricas de la relación del Estado y sociedad con el pueblo originario. De cara a una Constitución democrática el texto es significativo. Pasado y presente/futuro muestran la necesidad de un Estado plurinacional. En el centro está la urgencia de reconocer ‘los derechos colectivos’ de los pueblos indígenas como base de una convivencia que de estabilidad democrática y un camino cierto a la convivencia.

Se abordan las políticas e ideologías del despojo violento de las tierras ancestrales desde 1860 a inicios de 1930: la ‘reducción de los Lof’. Luego vino la ‘asimilación’ mediante políticas: reducciones en las cuales las Comunidades padecieron de malas y estrechas tierras asignadas; se pretendió que los mapuche renunciaran a su identidad, mediante el hambre y sometimiento al mercado de trabajo peor pagado. Esa es la base de la ideología de ‘un Chile homogéneo’ dominado por la élite. Se agregaron otras políticas y ‘leyes indígenas’, siempre buscando eliminar la Comunidad y la propiedad colectiva en los Lof. Se expresó el ‘indigenismo estatal’; en oposición a la nueva ideología se destacó el sabio Alejandro Lipschutz, investigador médico de prestigio mundial que se abocó al estudio de la Comunidad indígena en América y Chile; el texto trata de las fases del Frente Popular y el segundo gobierno de Carlos Ibáñez. Luego se caracteriza las luchas por la Reforma Agraria con las luchas mapuche por sus tierras; las limitaciones de las izquierdas que pensó solo en incorporar mapuches a la ‘lucha de clases’ y a la ‘unidad obrero campesina’.

Bajo la Unidad Popular no se logró una Reforma Agraria que creara formas específicas de propiedad para las Comunidades indígenas. Sin embargo, la ley Indígena de Allende (aún modificada por la oposición) restituyó más tierras a las comunidades que lo hecho en todo el tiempo anterior.

La reorganización en resistencia a la dictadura cívico militar de los mapuche generó la práctica de autonomías mapuche; se afirmó la desconfianza ante el Estado, los partidos (aún clandestinos), las ONGs., etc. Organizaciones mapuche y Lof destacan su identidad y el fortalecimiento del sujeto social-étnico. El autor destaca que la comunidad agraria permanece como el sustento más inmediato de las demandas del pueblo y la posible articulación de una Nación mapuche. No obstante un hecho que marca el proceso es que cerca de tres cuartos de quienes se autoidentifican mapuche habitan grandes ciudades. ♦

S. Alarcón Castro



Calidad de vida académica y Covid-19: una perspectiva de género

Verónica Aranda, Carolina Duque, Vanessa East y Kemy Oyarzún
Editorial Cuarto Propio, 2020, 68 páginas.

Este libro busca dar cuenta de la interacción de investigaciones universitarias y sus enlaces y alcances con la sociedad. ¿Importan el sexo, la clase, la raza, la edad o la preferencia sexual de quienes investigan y crean, en las ciencias, las humanidades o las artes?, se preguntan las creadoras y autoras de esta colección de libros E-book nacidos en pandemia, gestado en nueve meses y parido recientemente. Repensar la producción de conocimiento en medio de la crisis social y pandémica, ha llevado a distintas investigadoras, autoras, de áreas diversas, a replantearse la pertinencia o no de las investigaciones que se realizan en el contexto del quehacer universitario. Las condiciones de trabajo han cambiado ro-

tundamente desde que se declaró la pandemia. Las casas se han adaptado como laboratorios, bibliotecas, archivos, salas de clases, salas de reuniones, entre otras actividades, como gimnasios, liceos, escuelas, lugares de cuidados para mayores, en fin un sinnúmero de actividades que hacen perder el límite entre lo íntimo, lo público, y lo laboral. Por estudios recientes se sabe que las mujeres tienen una sobrecarga adicional de trabajo dado por el encierro en un solo espacio de las múltiples actividades realizadas. Un número menor de hombres comparte las labores del hogar, del cuidado y la educación. Las mujeres universitarias no escapan a esta realidad. Se realizó una encuesta al interior de la Universidad de Chile, que dio como resultado que solo 51% de las entrevistadas declara compartir las tareas domésticas, y que pueden dedicar algo así como dos horas a la semana a sus actividades de investigación, sin tener prácticamente tiempo libres para ellas. Una situación que deja en evidencia este estudio es que sí importa el sexo a la hora de producir conocimiento. Este conocimiento y las prácticas que le siguen, son fundamentales para la existencia humana, ya es hora de valorarlo y reconocerlo social y públicamente como el más especializado para la continuidad de la vida, demostrándose su imprescindibilidad en tiempos como los actuales. Este libro fue publicado en la colección Lelikelen (Abrir los ojos) de la Red de Imaginarios Críticos e Interseccionalidad, la Asociación Nacional de Funcionarios Académicos de la Universidad de Chile, el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina y la Unidad de Equidad y Género en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. ♦

Margarita Iglesias Saldaña



La revolución chilena de octubre Dos visiones

José Luis Valenzuela y Manuel Acuña Asenjo
Editorial Senda, 358 páginas

Quiénes están estudiando y escribiendo sobre las raíces de la explosión social del 18 de octubre de 2019, todavía no se ponen de acuerdo sobre cómo llamarle, con qué nombre quedará en los libros de historia y, de tener alguno, cuál es el que caracteriza mejor ese momento inédito de las luchas sociales en las últimas décadas. Los autores José Luis Valenzuela -de formación en la ingeniería y en las relaciones internacionales- y Manuel Acuña Asenjo -vinculado al derecho, la economía y los derechos humanos- buscan aunque no explícitamente una caracterización más definitiva a este proceso social en curso.

“La revolución chilena de octubre” es quizás por eso un libro que contiene dos, uno de cada autor empaquetado como una obra única. La editorial advierte que no expresan posiciones antagónicas y que más bien ambos escritos se complementan.

Y claro, el libro como un conjunto tiene dos puntos de partida distintos, que refle-

jan de algún modo la formación académica y sus trayectorias profesionales divergentes. Valenzuela ofrece una búsqueda histórica, con datos precisos y comprobables de las características de la sociedad chilena previa al reventón popular y a los impactos de la pandemia viral. La precariedad de la vida, el modelo concentrado del poder económico, los gráficos que desnudan la exclusión que viven millones de personas, los sistemas de educación, de salud y de pensiones que empobrecen, endeudan e intentan disciplinar a la población, son explícitos, reforzados con datos comparativos con la región y el mundo. Es el momento en que el lector, posiblemente abrumado por tantas cifras, se preguntará ¿cómo el poder político, el Estado, la academia, etc., no fueron capaces de prever la explosión que venía?

Manuel Acuña Asenjo en la otra mitad del libro analiza en qué estaban las instituciones, en qué momento se encontraban cuando el agotamiento, el malestar y las vidas insatisfechas se hacía evidente. Iniciado el “estallido”, esos días de furia que hicieron tambalear la institucionalidad, el autor observa las reacciones de los distintos sectores, desde las atolondradas medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera (y sus propias interpretaciones), hasta la brutal represión que cayó sobre la población movilizada. Es un dato de la causa que el gobierno se vio obligado a abrir un cauce político de salida a la crisis a través de la entrega de la Constitución elaborada por la dictadura y defendida por sus herederos. Es donde estamos ahora, por lo que el autor avanza algunas propuestas para el nuevo Chile que emergerá de la rebelión, cuyo destino todavía es incierto. ♦

Libio Pérez

¡Súmate ya!, a la COMUNIDAD DE LECTORXS LOM

Tenemos 4 modalidades de suscripción,
elige la tuya y recibe tu libro en casa.
Despacho gratuito.



Suscríbete en
www.lom.cl

 LOMediciones
  @Lomediciones
  @lom_ediciones



Génesis y ascenso del socialismo chileno Una antología hasta 1973

Jorge Arrate Mac Niven y Carlos Ruiz Encina
(editores)
LOM ediciones, 2020, 328 páginas

El libro de Jorge Arrate y Carlos Ruiz constituye una depurada y meditada selección de textos de algunos de los principales dirigentes e intelectuales del socialismo chileno hasta 1973. Entremedio se intercalan ciertos comentarios de los autores, los que permiten ir reconstruyendo una trayectoria intelectual y política signada por quiebres y contradicciones, pero que mirados desde la síntesis que el libro propone se va dibujando un pensamiento teórico y político singular.

Este pensamiento comienza a fraguarse desde los años 20 del siglo pasado, tendrá un hito importante en la efímera República Socialista del 4 de junio de 1932 y adoptará una forma orgánica con la fundación del Partido Socialista en 1933.

¿Cuáles son algunas características de este pensamiento político y en qué radica su originalidad? De los textos se desprende el temprano esfuerzo por enraizar la idea socialista en la historia nacional rescatando figuras como Arcos y Bilbao, Balmaceda. El socialismo se presenta así como la evolución de un esfuerzo de rango histórico de profundización democrática, igualdad y soberanía económica.

También destaca una aguda lectura de la estructura social posoligárquica y que se plasma en la definición de 1933 de “trabajadores manuales e intelectuales” ampliando las fronteras de la clase obrera; o en la heterodoxia teórica reflejada en la adhesión a “un marxismo enriquecido y rectificado por el constante devenir social”. O en la amalgama entre democracia y socialismo, a partir del programa del 47.

Esta particular alquimia teórica y política diferenciará al socialismo chileno de las vertientes comunistas, anarquistas y socialdemócratas, otorgándole una fisonomía propia, y será el caldo de cultivo para el surgimiento y posterior desarrollo del *allendismo*. De allí se nutrirá la originalidad del liderazgo de Salvador Allende y de su proyecto de una vía chilena al socialismo. El *allendismo* es impensable sin este desarrollo político y teórico que lo antecede y lo acompaña.

Estamos frente a una obra esencial para conocer los orígenes y la trayectoria del socialismo chileno, lo cual contribuye no solo a entender mejor el desarrollo político del siglo XX, sino también puede resultar inspirador de los actuales procesos reconstructivos del proyecto y de la identidad de la izquierda. ♦

Ernesto Águila Zúñiga



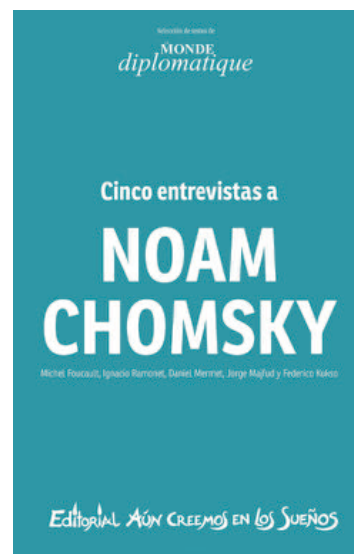
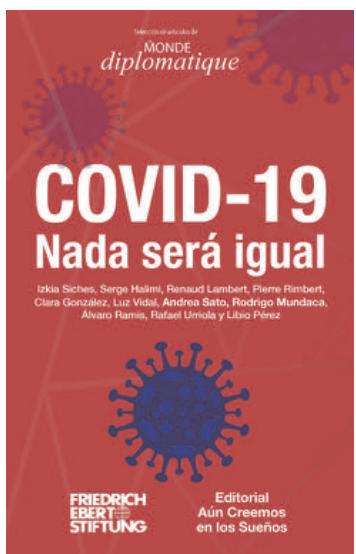
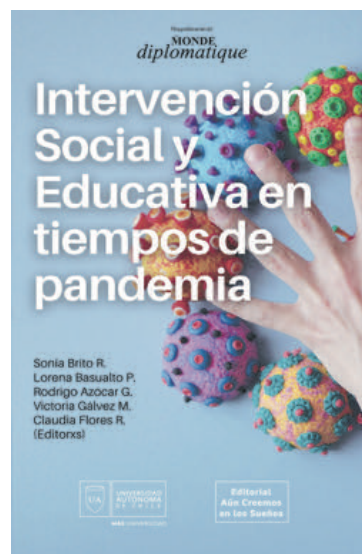
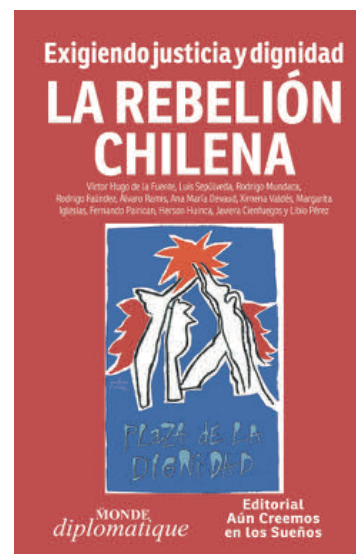
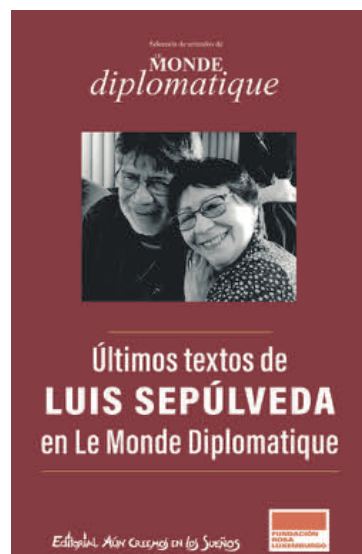
Nuevo libro

AVANZANDO HACIA RELACIONES MÁS COLABORATIVAS ENTRE FAMILIAS Y ESCUELA: EXPERIENCIAS DESDE PAÍSES IBEROAMERICANOS

Los resultados de los estudios científicos que focalizan en las relaciones entre las familias y la escuela ponen de relieve la influencia positiva que se produce entre ambos contextos sobre el desarrollo de los y las estudiantes, contribuyendo de este modo positivamente tanto en los resultados a nivel escolar como en las áreas socioemocionales. Por este motivo, muchas escuelas han desarrollado diferentes intervenciones para fortalecer el vínculo con las familias. Sin embargo, en el contexto de los países iberoamericanos, y especialmente en Latinoamérica, las experiencias sistematizadas que se encuentran disponibles en la literatura científica son escasas. Este libro viene a dar respuesta a este vacío, realizando una compilación de aproximaciones conceptuales y experiencias desarrolladas en diferentes países iberoamericanos.

Disponible por ahora solo en versión digital a \$2.950 en:
<https://editorialauncreemos.cl>

Libros impresos (\$3.950) y digitales (\$2.950)



Librería Le Monde Diplomatique, San Antonio 434, Santiago. Teléfono: 22 608 35 24
 Compre por internet en: www.editorialauncreemos.cl